

REFORMAS ESTRUCTURALES Y CAPITALIZACIÓN

(BO-0094)

RESUMEN EJECUTIVO

**PRESTATARIO Y
GARANTE:**

La República de Bolivia

**ORGANISMO
EJECUTOR:**

Ministerio de Capitalización

**MONTO Y
FUENTE:**

BID (FOE) US\$ 70.000.000

Tramos: Aprobación del Directorio US\$ 14.000.000

Tres flotantes: General US\$ 14.000.000

Hidrocarburos US\$ 28.000.000

Jurídico/financiero US\$ 14.000.000

Cofinanciamiento (AIF): US\$ 50.000.000

Tramos: Aprobación del Directorio US\$ 10.000.000

Tres flotantes: General US\$ 10.000.000

Hidrocarburos US\$ 20.000.000

Jurídico/financiero US\$ 10.000.000

Total: US\$120.000.000

Cooperación Técnica (FOE) US\$ 12.000.000

**PLAZOS Y
CONDICIONES
FINANCIERAS:**

Período de amortización: 40 años

Período de gracia: 10 años

Período de desembolso:

Préstamo: 2 años

Cooperación técnica: 3 años

Tipo de interés: 1% durante el período de gracia, 2% en adelante

Inspección y supervisión: 1%

COFINANCIAMIENTO:

Asociación Internacional de Fomento (AIF)

Período de amortización: 40 años

Período de gracia: 10 años

Período de desembolso: 2 años

Comisión por servicios: 0,75%

Comisión por compromiso: 0,5%

**CLASIFICACIÓN
AMBIENTAL:**

El Comité del Medio Ambiente, en su reunión del 8 de noviembre de 1994, clasificó esta operación dentro de la Categoría III y aprobó el correspondiente informe ambiental el 16 de mayo de 1995.

**EXCEPCIONES A
LA POLÍTICA DEL
BANCO:**

Ninguna

**PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA DE
PRÉSTAMO:**

Los equipos de proyecto del Banco y de la AIF han trabajado conjuntamente desde octubre de 1994 con el fin de ultimar la estructura del programa en colaboración con las autoridades bolivianas y han negociado conjuntamente las disposiciones del contrato de préstamo. El Banco se sumó en las fases finales de la preparación de este programa, que venía siendo examinado por el equipo de proyecto de la AIF desde hacía más de un año, en el entendimiento de que el análisis del préstamo de la AIF sería utilizado también por el Banco para esta iniciativa. Las conclusiones y resultados de las anteriores operaciones de ajuste sectorial, así como las dos operaciones de cooperación técnica financiadas por el Banco y varios préstamos de asistencia técnica de la AIF han servido como base para el programa presentado en este documento. Cuando así lo ha exigido el hecho de haberse sumado al programa en una fase avanzada de análisis, el equipo de proyecto del Banco ha examinado, revisado y en último término encontrado aceptables todos los aspectos de la operación que habían desarrollado los diversos equipos de proyecto de la AIF.

El proyecto de contrato de préstamo del Banco contiene todas las condiciones habituales de esta institución para las adquisiciones y desembolso de los préstamos sectoriales. Las condiciones para la realización de los desembolsos son idénticas para los préstamos del Banco y de la AIF. El plan de operaciones de la cooperación técnica del Banco en lo que respecta al registro de todos los ciudadanos bolivianos se presenta en el Anexo 3. Se adjuntan a este documentos los principios relativos a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pensiones negociadas por los equipos de proyecto.

OBJETIVOS:

La pieza central del programa de reforma del gobierno, "Plan de Todos", es un audaz programa de privatización de seis grandes empresas públicas mediante un proceso denominado capitalización. El objetivo del programa de capitalización es mejorar la eficiencia de los servicios públicos acabando con la propiedad y gestión estatal de tales empresas, establecer la gestión del sector privado y los recursos necesarios para atender las demandas actuales y futuras de servicios y, al mismo tiempo, liberar, para la reducción del déficit y la inversión en sectores sociales e infraestructura, entre el 25% y

el 30% del presupuesto nacional, asignado anteriormente a inversiones de dichas compañías. Este programa supone una transferencia del control de la gestión de hasta el 50% de la propiedad de las empresas estatales a inversionistas estratégicos. A diferencia de las privatizaciones tradicionales, el Tesoro boliviano no recibirá fondos de estas transacciones. Los inversionistas no comprarán los activos existentes; lo que harán, en cambio, es invertir en el capital social de la compañía por un total que equivaldría aproximadamente a su valor contable. Esta inversión se utilizará para aumentar el capital de cada compañía y poder disponer de nueva liquidez para la ampliación. La parte del Estado en las nuevas compañías, que representa el valor de los activos existentes, se transferirá al pueblo boliviano mediante el establecimiento de cuentas de distribución diferidas que serán administradas por fondos privados de pensiones.

La propuesta operación de ajuste favorecerá el establecimiento de un entorno propicio de manera que: i) la inversión privada se muestre dispuesta a intervenir en la medida en que el gobierno se retire de los sectores atendidos por las empresas estatales; ii) esta inversión privada estimule el crecimiento en forma eficiente, y iii) se promueva la competencia siempre que sea posible. Se están preparando los detalles sobre la forma concreta de capitalizar cada una de las grandes empresas públicas teniendo en cuenta los planes de reestructuración sectorial, la actual estructura de capital de la empresa y las estimaciones sobre las necesidades de inversión a corto y mediano plazo.

DESCRIPCIÓN:

Se proponen actuaciones específicas en tres ámbitos, como se detalla en la matriz de condicionalidad incluida en el Anexo 2:

i) Reforma sectorial y capitalización de las empresas públicas, en que el gobierno deberá: a) aprobar una legislación general que permita la capitalización de las empresas públicas más importantes y establezca un marco regulador general para los sectores que van a ser objeto de capitalización; b) aprobar medidas legislativas específicas de cada sector y promulgar reglamentos para promover la inversión y un entorno eficiente y competitivo en los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería, ferrocarriles y aviación, y c) iniciar la capitalización de seis grandes empresas públicas que dominan los mencionados sectores. Además, el gobierno completará la privatización de más de 100 pequeñas y

medianas empresas (valor medio de aproximadamente US\$1 millón) y la reestructuración del sector minero.

ii) Reformas institucionales y jurídicas para fortalecer las instituciones reguladoras y judiciales de Bolivia y establecer mecanismos administrativos para la resolución rápida y equitativa de los conflictos sobre problemas comerciales y de reglamentación. Estas reformas incluirán los siguientes aspectos: a) establecimiento de un organismo regulador independiente con departamentos sectoriales y desarrollo de su capacidad para la aplicación de los reglamentos; b) aprobación de una ley sobre procedimientos administrativos para los conflictos sobre problemas de regulación entre el Estado y representantes del sector privado, y c) ratificación de una convención internacional y aprobación de una ley sobre arbitraje. El gobierno tiene también previsto mejorar este entorno propicio al desarrollo del sector privado mediante la aplicación de una ley de transacciones garantizadas y la mejora de los registros comerciales y de propiedad. Además, el gobierno se ha comprometido a apoyar plenamente las iniciativas adoptadas por el sistema judicial para mejorar la administración de la justicia en Bolivia.

iii) Reformas del sector financiero para desarrollar los mercados financieros a largo plazo. La primera fase de la reforma financiera contó con la ayuda de anteriores programas de ajuste respaldados por el Banco (628/OC-B0) y la AIF, orientados a reformar el sistema bancario. Esta fase se orientará sobre todo a mejorar la regulación de las instituciones de valores y seguros, así como a fortalecer el ahorro contractual y los mecanismos de pensiones. Además, el gobierno tiene previsto fortalecer todavía más el sistema financiero mediante la reestructuración del Banco Central y la aprobación de la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley de Superintendencia de bancos y entidades financieras.

**MEDIDAS YA
APLICADAS:**

La Ley de capitalización fue aprobada por el Congreso en marzo de 1994 y en ella se establecía el marco para el programa; se han adoptados decisiones políticas para aplicar los diversos aspectos de éste. Se han aprobado y aplicado las condiciones para la presentación de la operación al Directorio Ejecutivo; puede verse un resumen de dichas condiciones en la matriz de política (Anexo 2).

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

Las condiciones de cada uno de los tres desembolsos de tramos flotantes han sido aprobadas mediante acuerdo con las autoridades gubernamentales y aparecen en los párrafos 4.9 a 4.12 de la propuesta de

préstamo. Las condiciones se han resumido en la matriz de política, que aparece como Anexo 2, y se exponen con detalle en la Carta de política de desarrollo (Anexo 1).

De los fondos del préstamo podrá utilizarse un total de hasta US\$14 millones para compensar a Bolivia por el costo de las importaciones adquiridas en los seis meses anteriores a la firma del contrato de préstamo (véase el párrafo 4.13). Además, se propone que se pueda reembolsar con cargo a los fondos del crédito hasta un total de US\$4 millones de los gastos efectuados después del 1 de enero de 1995 pero antes de la firma del acuerdo de cooperación técnica reembolsable para financiar el registro de los ciudadanos bolivianos (véase el Anexo 3, párrafo 3.6).

**APOYO A
LA ASISTENCIA
TÉCNICA:**

El proceso de registro de todos los bolivianos adultos para determinar si reúnen los requisitos de participación en el programa de capitalización se llevará a cabo por medio del registro universal de todos los ciudadanos bolivianos en el llamado "Registro Único Nacional (RUN)", que deberá realizarse con asistencia de la cooperación técnica del Banco por un valor de US\$12 millones, así como de US\$2 millones de la AIF y el equivalente de US\$2 millones del gobierno boliviano. El objetivo del proyecto es registrar a la totalidad de los aproximadamente 3,3 millones de bolivianos durante un período de dos años y preparar una base de datos a partir de la cual se pueda mantener el registro civil y el de votantes. Dos consultores han comenzado ya a ayudar en la primera fase del proyecto.

Tres operaciones generales de asistencia técnica de la AIF, por un valor total de más de US\$32 millones, se llevarán a cabo, según las previsiones, en lo que queda de año en paralelo al proceso de capitalización (véanse los párrafos 4.15 a 4.25).

**CRITERIOS DE LA
POLÍTICA RELATIVA
A LA POBREZA:**

Aunque no se trate de una inversión dirigida específicamente a luchar contra la pobreza, el programa deberá tener efectos positivos en ese sentido, como se indica en el párrafo 5.3, ya que se liberarán recursos públicos para aumentar los servicios sociales esenciales en favor de los pobres, se producirá una redistribución masiva de los ingresos como consecuencia de la transferencia a todos los adultos bolivianos de la parte del Estado en las grandes empresas públicas, se van a asignar a proyectos sociales los beneficios obtenidos de la privatización de pequeñas y medianas empresas públicas y algunas reformas jurídicas favorecerán la expansión del crédito a los pequeños empresarios.

BENEFICIOS:

Los beneficios económicos de las políticas apoyadas por este crédito son considerables. La reforma global y el establecimiento de un marco regulador adecuado para los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y minería, junto con las reformas jurídicas encaminadas a promover métodos eficientes de resolución de diferencias, como la reciente ratificación de la convención de Nueva York sobre arbitraje internacional, deberán tener efectos positivos en las inversiones del sector privado en general y deberán propiciar la inversión privada y la transferencia de tecnología. Estas reformas, en especial el desarrollo acelerado de los recursos de hidrocarburos bolivianos, deberán tener efectos importantes en el crecimiento del PIB. Se prevé que reduzcan el déficit y permitan al gobierno aumentar los gastos correspondientes a inversión en capital humano y estructura básica en paralelo al crecimiento del PIB. Se prevé una reducción, en términos absolutos, de los gastos públicos generales.

RIESGOS:

A pesar de las medidas que se están adoptando en la evaluación ambiental de esta operación, en particular en el sector de la minería, los problemas sociales relacionados con la reubicación de los mineros independientes y los miembros de las cooperativas, si no se plantean adecuadamente, podrían provocar riesgos adicionales y retrasos en el proceso de capitalización. En el marco de la preparación ambiental del programa, el Banco ha ofrecido la colaboración de consultores para determinar el ámbito de un Plan de Rehabilitación y Desarrollo Social de la región minera. Actualmente, el Banco está tramitando una cooperación técnica por valor de US\$200.000 con el fin de permitir la contratación de consultores que ayuden al grupo de trabajo establecido dentro de la Secretaría de Minería a elaborar el programa. Asimismo, la falta de experiencia en la gestión de normas claras y adecuadas de emisiones en el medio ambiente para los sectores que se van a capitalizar puede dificultar la aceptación por parte de los licitantes de las normas provisionales, crear incertidumbres en la evaluación de los costos relacionados con el cumplimiento de los reglamentos y retrasar el proceso de licitación. Además, aunque se están adoptando disposiciones que deberían ser suficientes, si las responsabilidades de la contaminación acumulada y actual en las instalaciones que se van a capitalizar no se determinan adecuadamente antes del proceso de licitación, los resultados podrían no responder a las expectativas. Las operaciones de asistencia técnica de la AIF servirán de ayuda en la

actividad ambiental, lo mismo que la ejecución continuada del proyecto del Banco de fortalecimiento de las instituciones ambientales (préstamo 929/SF-BO).

La crisis financiera de América Latina, iniciada en diciembre de 1994, ha limitado los flujos normales de capital privado hacia Bolivia. La privatización prevista (a través de una oferta internacional de valores públicos) de la compañía eléctrica de la ciudad de Cochabamba (ELFEC) se canceló y se sustituyó por una venta negociada directamente. Podría haber retrasos en el consiguiente programa de privatización, pero el programa de capitalización principal deberá mantenerse dentro del calendario previsto. Se calcula que los precios de oferta de los inversionistas estratégicos en lo que respecta a las compañías capitalizadas podrían ser algo inferiores al que se habría conseguido hace un año. No obstante, la magnitud de la reducción no parece, según las estimaciones, que justifique el retraso del proceso de capitalización. Los beneficios de la pronta aplicación del programa deberán compensar todo posible aumento de las ofertas por los inversionistas estratégicos como consecuencia de un retraso en el proceso.

Si la legislación necesaria para las reformas se debilita significativamente antes de su aprobación por el Congreso o se retrasa, el sector privado continuará reteniendo los fondos de inversión. Además, la operación implica una compleja serie de reformas legislativas y reguladoras que deben ordenarse con sumo cuidado para garantizar los resultados deseados. Los logros conseguidos hasta ahora y la condicionalidad inicial tienen como objetivo reducir el riesgo de quiebra; no obstante, el incumplimiento en una sola área podría dificultar el desembolso de los tramos. Para evitar el estancamiento de todo el programa, en el caso de que se retrasen algunas reformas sectoriales específicas, importantes pero difíciles, se propone dividir el segundo tramo en tres tramos flotantes, que se desembolsarán en cuanto se reúnan las condiciones específicas establecidas para ellos.

**ESTRATEGIA DE
PAÍS Y SECTORIAL
DEL BANCO:**

La estrategia del Banco para el país respalda el programa y se centra en los proyectos y programas que: i) contribuirían a resolver los problemas que están retrasando las reformas estructurales; ii) fortalecerían la capacidad productiva y de exportación del país, y iii) favorecerían la búsqueda de soluciones a las necesidades básicas de la población.

I. INTRODUCCIÓN

A. Antecedentes

- 1.1 En agosto de 1994, por solicitud de las autoridades bolivianas, el Banco se sumó a las fases finales del financiamiento de este programa, que venía siendo estudiado por el equipo de proyecto de la Asociación Internacional de Fomento desde hacía más de un año, en el entendimiento de que la evaluación del préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) sería utilizada también por el Banco para la operación. Los equipos de proyecto del Banco y de la AIF llevaron a cabo dos misiones conjuntas (octubre de 1994 y marzo de 1995), colaboraron en la conclusión de la estructura del programa junto con las autoridades bolivianas y negociaron conjuntamente las disposiciones del contrato de préstamo.
- 1.2 Aunque el Banco tenía en curso un préstamo de inversión sectorial y había organizado dos operaciones de asistencia técnica para la preparación de los aspectos del programa de capitalización y las privatizaciones consiguientes (véase más adelante), los equipos de la AIF/Banco Mundial habían aportado la mayor parte de los recursos para los preparativos del programa, que se financiaría con un crédito de la AIF por valor de US\$50 millones. La misión de evaluación de la AIF en relación con el crédito se había llevado a cabo al final de 1993. En el momento en que el Banco decidió participar en el financiamiento, el programa estaba en sus fases finales de preparación.
- 1.3 El documento de aprobación del crédito de la AIF se encuentra en las fases finales de elaboración y se someterá a la aprobación del directorio de la AIF en la primera ocasión (a mediados de julio de 1995, según las previsiones actuales).
- 1.4 Para mantener los actuales niveles de ingreso per cápita, Bolivia debe conseguir una tasa de crecimiento sostenido del PIB, para lo que se requerirá una inversión interna bruta anual en términos reales superior al 16% del PIB, y un crecimiento del 20% anual de la inversión privada. Por ello, la promoción de la inversión privada es una prioridad principal para el país. En conformidad con esta prioridad, en el programa de la campaña del nuevo gobierno, "El Plan de Todos", se destacó como primero de los siete pilares en que se basa el plan "un crecimiento sustancial de los recursos destinados a inversión", lo que supone, entre otras cosas: i) la capitalización/privatización de empresas públicas, ii) el fomento de la inversión privada, y iii) el aumento del ahorro del sector público. Además, la expansión de los flujos de inversión debe ir acompañada de un crecimiento paralelo de los instrumentos e instituciones de ahorro, como los fondos mutuos y de pensiones, y los mercados de valores.

- 1.5 Hasta ahora, el programa de reforma de la empresa pública ha obtenido los siguientes resultados: i) eliminación de las transferencias presupuestarias a empresas públicas e imposición de una estricta disciplina sobre sus actividades de empréstito, ahorro y adquisición; ii) venta de unas 30 pequeñas y medianas empresas estatales y iii) apertura del sector minero para promover la inversión privada. A pesar de este progreso, la inversión pública en los sectores de las grandes empresas estatales (hidrocarburos, telecomunicaciones de larga distancia, electricidad, minería y transporte) ha representado aproximadamente el 33% del presupuesto de inversión pública. Los intentos realizados en el pasado de aumentar la eficiencia de las empresas estatales monopolísticas mediante contratos de rendimiento han fracasado en gran parte.
- 1.6 Capitalización de las empresas públicas. El gobierno está preparando una iniciativa global para asociar el capital privado al capital público en las empresas estatales mediante su programa de capitalización. Para llevar a cabo el programa se creó, en marzo de 1994, el Ministerio de Capitalización, que se disolverá una vez terminado el proceso. El programa incluye seis empresas públicas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). El planteamiento del gobierno para recaudar capital privado con destino a estas empresas incluye, como primera medida, la transformación de estas compañías en entes mixtos públicos-privados (Sociedades Anónimas Mixtas - SAM), en que los socios privados serán los actuales empleados, que recibirán una participación en el capital equivalente al monto de las "prestaciones sociales" que han acumulado en la compañía. La siguiente fase consistirá en una oferta de hasta el 50% de las acciones (capitalización) que serán suscritas por inversionistas privados, y supondría la transformación de las "Sociedades Anónimas Mixtas" en empresas normales (Sociedades Anónimas). El Ministerio de Capitalización, con asistencia de firmas consultoras especializadas en cada sector, determinará la valuación de las nuevas compañías, así como la meta de inversión de capital y el mínimo de capital para cada una. Se prevé, en general, que las nuevas inversiones dupliquen el valor neto de cada empresa. Esta nueva inyección de capital se aplicará a programas de reestructuración, rehabilitación y nuevas inversiones. Como última fase, el gobierno tiene previsto distribuir las acciones que continúan en su poder entre todos los ciudadanos adultos bolivianos mediante un mecanismo de fondos de pensiones.
- 1.7 En el programa de capitalización el gobierno no recibe ningún beneficio de la emisión de acciones, pero la contribución en capital a las compañías y la nueva gestión introducida por los inversionistas privados permiten la aplicación de planes de modernización e inversión, lo que aumentaría el valor de las acciones de las empresas, la mitad de las cuales se encontraría en poder de ciudadanos bolivianos.

- 1.8 La capitalización se está llevando a cabo en el contexto de la preparación de un nuevo marco regulador para los sectores decisivos de la economía boliviana. La Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), aprobada por el Congreso en octubre de 1994, establece un amplio marco regulador para los hidrocarburos, comunicaciones, electricidad, transporte y abastecimiento de agua. El sistema elaborado en dicha ley comprende una Superintendencia General y superintendencias específicas de los distintos sectores. Los superintendentes sectoriales serán responsables de las actividades cotidianas de regulación en sus respectivos sectores, mientras que el Superintendente General se encargará de la supervisión del sistema regulador en conjunto, la aprobación de las políticas de personal y de recursos humanos y las normas operativas internas, la preparación de un presupuesto consolidado para el sistema regulador y la respuesta a las apelaciones presentadas frente a las decisiones de los superintendentes sectoriales. Las superintendencias son autónomas y se financiarán mediante derechos sobre las industrias reguladas. La ley prevé una serie de medidas para proteger las superintendencias frente a ingerencias políticas, incluida la protección de los superintendentes ante posibles destituciones arbitrarias. En la ley se establecen también algunas normas intersectoriales, entre ellas los requisitos de transparencia y el primer conjunto de normas antimonopolio de Bolivia.

B. Consideraciones macroeconómicas

- 1.9 Bolivia fue uno de los primeros países de América Latina que adoptó un programa económico de largo alcance destinado a restaurar la estabilidad de los precios y reformar estructuralmente la economía con el fin de conseguir un crecimiento sustentable. Desde 1985 el programa de reforma ha contado con el apoyo de acuerdos adoptados en el marco del Servicio Financiero Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de créditos de ajuste y otras formas de asistencia del Banco, el Banco Mundial y donantes bilaterales.
- 1.10 El programa tenía como objetivo garantizar la estabilidad general al mismo tiempo que se aplicaban reformas estructurales para reducir la participación estatal en la economía, mejorar las finanzas del sector público, fomentar la inversión privada y aumentar la productividad y la competitividad. Las reformas han incluido los siguientes elementos: i) liberalización de los precios; ii) unificación del tipo de cambio y liberalización de los flujos de capital; iii) simplificación del régimen fiscal y mejoras en la administración de los impuestos; iv) liberalización del comercio y reforma aduanera; v) privatización de las pequeñas empresas públicas comerciales, y vi) reforma del sector financiero (incluida la liberalización de los tipos de interés, eliminación de las subvenciones al crédito, liquidación de los intermediarios financieros de propiedad estatal y fortalecimiento de la supervisión y regulación de los bancos). Este programa se ha complementado con un eficaz esfuerzo de reducción de la deuda y de

servicio de ésta mediante la reprogramación en condiciones concesionarias por medio de acuerdos con acreedores bilaterales (incluidas cinco reprogramaciones del Club de París) y un amplio programa destinado a eliminar la deuda con bancos comerciales.

- 1.11 A pesar de los logros obtenidos, dos factores principales explican el decepcionante resultado de la economía en su intento de atraer la inversión privada. En primer lugar, las empresas públicas dominan sectores claves de la economía que presentan fuerte potencial de crecimiento: hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, electricidad y transporte. En segundo lugar, Bolivia carece de un marco institucional que ofrezca a los agentes privados un cierto nivel de claridad, previsibilidad y posibilidad de aplicación de los principios jurídicos y normativos que regulan sus actividades.
- 1.12 El nuevo gobierno asumió sus funciones en agosto de 1993 con la promesa de continuar reduciendo y racionalizando la función del Estado y de promover el programa social. El Plan de Todos incluye los siguientes aspectos: i) reforma del Poder Ejecutivo; ii) programa de capitalización; iii) reforma de la educación; iv) reforma de las pensiones, y v) programa de "participación popular", que representará una descentralización del poder para transferirlo a las provincias, municipios y asociaciones de vecinos con la finalidad de establecer prioridades y fiscalizar las inversiones en carreteras, saneamiento y educación.
- 1.13 Inmediatamente después de asumir sus funciones el nuevo gobierno aceleró las conversaciones con la AIF, del grupo del Banco Mundial, sobre el financiamiento de los programas de reforma. En septiembre de 1993 se llevó a cabo una misión de evaluación preliminar de la AIF en relación con el crédito y ajuste para el programa de capitalización, y la evaluación de la AIF tuvo lugar en diciembre de 1993. Desde entonces, se han llevado a cabo varias misiones de seguimiento, con plena participación del Banco desde octubre de 1994, para adelantar los preparativos de la documentación sobre las condiciones que deberían reunirse antes de la presentación a los directorios de la AIF y del Banco.

C. Estrategia del Banco y operaciones afines

1. Estrategia del Banco para Bolivia

- 1.14 Bolivia continúa encontrando considerables dificultades en su intento de lograr un crecimiento sostenido a pesar de ocho años de ajuste económico y de considerable alivio de la deuda. La elevada proporción de los ingresos de exportación procedente de productos primarios y el bajo nivel de ahorro interno han limitado la capacidad de la economía de responder con flexibilidad a las conmociones externas e internas. Como es probable que estos obstáculos se mantengan en el futuro previsible, el país debe conservar la estabilidad macroeconómica, mantener un tipo de cambio adecuado,

mejorar la eficiencia del sector público y aumentar los incentivos a la inversión del sector privado. El programa económico de Bolivia, reflejado en el reciente documento de bases de políticas establecido conjuntamente con el FMI, tiene por objeto lograr estos objetivos. El programa promueve un crecimiento económico estable, junto con la mitigación de la pobreza y la conservación del medio ambiente.

1.15 Como se indica en el Cuadro 1, la aplicación y mantenimiento del programa económico adoptado por el gobierno requerirá entradas anuales de aproximadamente US\$844 millones de asistencia (sin contar las donaciones) y de alivio de la deuda en el período 1995-1997 como complemento del ahorro interno del país. Estos recursos continuarían procediendo en gran parte de los donantes y de reprogramaciones del Club de París. En cuanto a los desembolsos programados, se prevé obtener un promedio de US\$337 millones de los flujos netos de capital y de la inversión extranjera; US\$340 millones al año de instituciones multilaterales (US\$165 millones del BID) y otros US\$60 millones de créditos bilaterales. El déficit de US\$108 millones se saldará mediante una reducción de la deuda bilateral o del servicio de la deuda.

Cuadro 1 Necesidades de financiamiento externo, 1995-1997 (millones de US\$)			
	1995	1996	1997
Necesidades de financiamiento	770	872	891
Déficit en cuenta corriente	411	547	596
Amortización vencida	296	263	256
Cambio neto en las reservas; (+) aumento	63	62	39
Fuentes de financiamiento	770	872	891
Capital privado neto	171	384	455
Desembolsos brutos 1/ Multilaterales	455	388	355
BID	375	339	305
AIF	175	160	160
FMI	99	90	80
Otros	48	48	24
Bilaterales	53	41	41
Servicio de la deuda reprogramado y reducción de la deuda 1/	80	49	50
	144	100	81

Fuente: FMI.

1/ Sólo a largo plazo (se incluye el interés capitalizado).
2/ El acuerdo del Club de París, en marzo de 1995, concedió una reducción del servicio de la deuda de US\$344 millones en el período 1995-1997. Esta reducción supera en US\$19 millones al monto del SRAE en este concepto.

1.16 Para conseguir los objetivos de crecimiento, el gobierno debe atraer cuantiosos recursos adicionales internos y externos. La parte de la inversión privada en el PIB tendrá que multiplicarse por más de dos antes de que finalice el decenio. Para conseguir estos niveles de inversión privada, el gobierno tiene previsto: i) abrir sectores fundamentales - en concreto los hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y electricidad - todavía dominados por el sector público y ii) establecer un marco jurídico y regulador propicio. Las reformas apoyadas por esta operación de ajuste son fundamentales para el logro de esos objetivos.

1.17 La estrategia del Banco apoya esta propuesta y centra su atención en proyectos y programas que: i) contribuyan a resolver los

problemas que están retrasando las reformas estructurales; ii) fortalezcan la capacidad productiva y de exportación del país, y iii) favorezcan soluciones a las necesidades básicas de la población.

2. Anteriores préstamos del Banco con fines semejantes

- 1.18 Las reformas introducidas por el anterior gobierno de Bolivia establecieron el marco para este programa e hicieron posible su ejecución. El gobierno, con apoyo del préstamo del Banco para el sector de la inversión y la reforma del sector financiero y el correspondiente Programa Global de Crédito Multisectorial (628/OC-BO y 629/OC-BO, respectivamente), junto con un crédito paralelo de ajuste estructural de la AIF y otras instituciones internacionales, todos aprobados en septiembre de 1991, consiguió en gran parte sus objetivos en materia de políticas. En los préstamos sectoriales tanto del Banco como de la AIF, se había cumplido la condicionalidad del primer tramo en el momento de la aprobación por el Directorio y dicho primer tramo se entregó en enero de 1992. Entre los requisitos fundamentales de la condicionalidad que se habían cumplido para esas fechas figuraban la promulgación de los diversos decretos que iniciaban el cierre de los tres bancos públicos, la presentación al Congreso de un proyecto de ley sobre la reglamentación y supervisión del sistema financiero y un acuerdo sobre una estrategia detallada para la privatización de las empresas públicas.
- 1.19 Cuando el gobierno elegido en agosto de 1993 dio a conocer su "Plan de Todos", que contenía entre sus elementos fundamentales el propuesto programa de capitalización, el Directorio apoyó, en marzo de 1994, una modificación del préstamo 628/OC-BO a fin de revisar los requisitos de condicionalidad para la entrega del segundo tramo a fin de mantenerlos en conformidad con la orientación del nuevo programa gubernamental. En esas fechas, el Directorio consideró que se había cumplido en términos generales el resto de la condicionalidad y en abril de 1994 se entregó el segundo tramo. En el marco de las reformas del sector financiero, esta condicionalidad incluía los siguientes aspectos: bancos públicos, crédito para actividades de desarrollo, mejoras en la regulación y supervisión de los intermediarios financieros y en el funcionamiento del Banco Central, fomento de los mercados de capital y mejoras en la eficiencia del sistema financiero; en lo relativo al sector de la inversión, preveía actividades de capital privado asociadas a capital público, mejoras en la eficiencia de la empresa pública, privatización, procedimientos comerciales e infraestructura empresarial y pequeña y mediana empresa.
- 1.20 Había fuertes vínculos y relaciones de mutuo apoyo entre los préstamos del BID y la AIF, dada su vinculación a través de una matriz de política común. No obstante, la matriz de política del Banco, en particular, contenía algunas condiciones adicionales que no eran exigidas por la AIF. En muchos aspectos, establecía requisitos

para el tercer tramo y permitía una profundización de las actividades en determinados sectores no incluidos en la matriz de la AIF. En consecuencia, gran parte del progreso conseguido mediante las reformas de ajuste estructural y del sector financiero público gracias al apoyo de los préstamos 628/OC-BO y 629/OC-BO constituye ahora la base de este nuevo programa cuyo objetivo es aprovechar las anteriores mejoras y profundizar los resultados obtenidos hasta la fecha.

- 1.21 Las anteriores reformas consiguieron también un considerable volumen de inversión en el sector de hidrocarburos. Actualmente, hay unas 16 compañías realizando exploraciones y explotando concesiones, aunque representan sólo aproximadamente el 20% de la producción nacional. Mediante sus prácticas comerciales competitivas y el control del proceso de entrega de concesiones en nombre del gobierno, YPFB continúa dominando el mercado además de controlar la exploración y la producción. Parece evidente que para que los esfuerzos de privatización y eficiencia sean eficaces es necesario apartar al Estado de su actual función dominante y monopolística en las actividades de los principales sectores de la economía. En tales circunstancias el convencimiento de que el Estado no podía permitirse hacer las inversiones necesarias en compañías básicas para garantizar unos servicios adecuados y, al mismo tiempo, efectuar las inversiones en infraestructura y servicios sociales necesarias en el país, llevó a una revisión de los programas de reforma cuyo resultado es el nuevo programa.
- 1.22 El prestatario ha cumplido en buena parte las condiciones fijadas para la entrega del tercer préstamo sectorial de inversión (PSI) 628/OC-BO, y se está tramitando la correspondiente autorización. Este programa de capitalización completaría las iniciativas impulsadas por las condiciones de dicho préstamo. Los estudios y reformas previstos en el PSI en lo tocante a la estructura jurídica y el funcionamiento y supervisión del sector de los seguros, las pensiones y valores alcanzarán su pleno desarrollo en este programa. El proceso de capitalización creará la necesaria masa crítica de acciones que se venderán en el mercado y la necesidad de administrar estas mismas acciones en nombre de la población boliviana hasta que lleguen a la edad de la jubilación pueda dar el necesario impulso al funcionamiento del sistema de pensiones reformado.
- 1.23 Debe señalarse también que algunas de las características originariamente previstas en el marco del PSI, como la ley de inversión, han quedado desplazadas por la ampliación de las reformas llevadas a cabo de acuerdo con el programa de capitalización. La Ley de Capitalización y otras medidas afines aprobadas el año pasado han reconocido a todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, los mismos derechos y privilegios y, conjuntamente con las distintas leyes sectoriales, garantizan la libre circulación de capitales y la remesa de beneficios al extranjero. Se están adoptando otras medidas para estimular la inversión extranjera con

el fin de propiciar el proceso de capitalización. Los consultores y funcionarios bancarios especializados en inversión que colaboran con el sector minero han llegado a la conclusión de que debe adoptarse un planteamiento más integrado del anteriormente previsto para la privatización de las diversas compañías mineras, con el fin de lograr empresas que sean comercialmente viables, para lo cual se requiere también una nueva modificación de las leyes de minas. En el momento en que se aprueben y desarrollen las nuevas leyes sectoriales sobre hidrocarburos, telecomunicaciones, seguros y valores y se concluya la reglamentación del SIRESE y la nueva ley de electricidad, será posible examinar las disposiciones de una ley general de inversión, tal como se había previsto anteriormente.

- 1.24 A pesar de su experiencia en programas anteriores de reforma, el BID no tenía en principio la intención de participar en el financiamiento del programa de capitalización, ya que tenía compromisos para la realización de otros proyectos en Bolivia. No obstante, dado que el ámbito del programa se había ampliado considerablemente y superaba los requisitos de financiamiento anteriormente previstos, el Gobierno de Bolivia solicitó apoyo financiero del BID para que cofinanciara el programa con la AIF.

3. Cooperación técnica reembolsable del sector financiero - 879/SF-BO

- 1.25 Los objetivos de la cooperación técnica (que se firmó en marzo de 1992 y cuyos desembolsos podrían comenzar en enero de 1993) son colaborar con el Ministerio de Capitalización en el proceso de revisar y racionalizar las actividades empresariales del gobierno con el fin de preparar el proceso de "privatización". En concreto, el objetivo del préstamo es continuar desarrollando la capacidad de las principales empresas públicas para negociar, administrar y realizar en la práctica su capitalización; incrementar la capacidad de las secretarías gubernamentales encargadas de administrar las empresas públicas para asociar mejor los objetivos y metas de estas empresas públicas con las políticas sectoriales del gobierno y, finalmente, ayudar a éste a definir y evaluar una estrategia para la privatización de las diversas compañías mixtas. El programa original preveía actividades de asistencia al gobierno para la creación de una unidad de ejecución que respaldara a las instituciones correspondientes en la formulación, negociación, administración y evaluación de los contratos-plan que se firmarían entre el gobierno y el sector privado. Este aspecto se dejó de lado cuando se suprimieron dichos contratos.
- 1.26 Las actividades de la operación se promovieron mediante un financiamiento transitorio del PNUD y actualmente están en plena ejecución, habiéndose desembolsado más del 50%.

4. Programa de capitalización en apoyo de la cooperación técnica - FOMIN - ATN/MT-4451-BO

1.27 En junio de 1994, se firmó un acuerdo con el Banco relativo a una cooperación técnica no reembolsable de US\$2,336 millones con cargo al Fondo Multilateral de Inversiones cuyo objetivo es ayudar al gobierno boliviano por intermedio de la Secretaría Nacional de Capitalización e Inversión (SENACI), del Ministerio de Capitalización, en el proceso de preparación del programa de capitalización. El programa continúa avanzando satisfactoriamente para acompañar en la forma debida la cronología de capitalización, habiéndose desembolsado más del 25% de los fondos.

1.28 Los objetivos durante la primera fase del programa son los siguientes:

- a. fortalecimiento institucional de la Secretaría, que se encargará de la formulación y aplicación del programa;
- b. transformación de las seis empresas en "Sociedades Anónimas Mixtas";
- c. preparación y, posteriormente, aplicación de las modificaciones jurídicas necesarias para establecer un marco jurídico idóneo para la inversión privada en los seis sectores, en particular los de electricidad, hidrocarburos y telecomunicaciones;
- d. conclusión del diseño de la estrategia de capitalización/privatización en cada una de las seis compañías, en particular de ENDE, YPFB y ENTEL;
- e. preparación de ENDE, YPFB y ENTEL para su capitalización/privatización;
- f. formulación de una estrategia de privatización para las compañías controladas por las corporaciones regionales de desarrollo.

5. Proyectos en ejecución - ENDE (BO-0116) e YPFB (BO-0150)

1.29 En el proyecto BO-0116 del Banco, que se financia con el préstamo 598/OC-BO, resta completar varios componentes. Algunos de ellos, relacionados principalmente con la red de transmisión, permanecerán con la residual de ENDE. El principal proyecto inconcluso es la unidad generadora de Carrasco. La terminación de este proyecto, según se estudió con los posibles inversionistas y se indica en la documentación correspondiente al proceso de ofertas de capitalización, continuará siendo supervisada y ejecutada por ENDE, para ser transferida una vez terminada, a la nueva compañía capitalizada (programada para enero de 1997).

- 1.30 Se ha previsto que el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos de YPFB (BO-0150) que se financia con los préstamos 816/SF-BO (59% desembolsado) y 542/OC-BO (98% desembolsado) será terminado por YPFB antes de la capitalización de las respectivas compañías nuevas y no tendrá repercusiones en el proceso de licitación ni en las operaciones posteriores de los socios estratégicos.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1 La pieza central del programa de reforma del gobierno, "Plan de Todos", es un audaz programa de privatización de seis grandes empresas públicas mediante un proceso llamado de capitalización. El objetivo del programa de capitalización es aumentar la eficiencia de los servicios públicos, poner fin a la propiedad y administración pública de las empresas estatales, establecer un sistema de administración privada y los recursos necesarios para atender las demandas actuales y futuras de servicios y, al mismo tiempo, liberar recursos para reducir el déficit y para invertir en sectores sociales e infraestructura la parte del presupuesto nacional que anteriormente se había destinado a cubrir las necesidades de inversión de dichas compañías. Este programa supone la transferencia a inversionistas estratégicos del control de la gestión y de hasta un 50% de la propiedad de esas empresas estatales. Los inversionistas no comprarán los activos existentes sino que harán más bien una inversión en capital social de la compañía, que equivaldrá, aproximadamente, a su valor contable. Esta inversión se utilizará para aumentar el capital de la compañía y poder disponer de nueva liquidez para la ampliación.

A. Estructura del programa y componentes de política

2.2 La operación de ajuste propuesta apoyará el establecimiento de un entorno propicio adecuado de manera que: i) la inversión privada se muestre dispuesta a intervenir en la medida en que el gobierno se retire de estos sectores; ii) dicha inversión estimule el crecimiento de manera eficiente, y iii) se promueva la competencia siempre que sea posible. Los detalles sobre la manera en que se capitalizará cada una de las grandes empresas públicas se especificarán teniendo en cuenta los planes de reestructuración específicos de cada sector, la actual estructura de capital de la empresa y las estimaciones sobre las necesidades de inversión a corto y mediano plazo. La actual propiedad estatal se transferirá a bolivianos adultos mediante el establecimiento de cuentas de jubilación de distribución diferida que serán administradas en forma privada por fondos de pensiones. El desarrollo de los mercados financieros a largo plazo y el establecimiento de un marco regulador adecuado para este sector son, por ende, fundamentales para el éxito del plan de capitalización.

2.3 La custodia de las acciones para el pueblo boliviano se confiará a un fideicomiso mundial, escogido de una nómina reducida de las mayores firmas internacionales especializadas en esta materia, cuya contratación se tramita actualmente. La firma será contratada antes de la primera capitalización (ENDE) y administrará las acciones y seleccionará los directores de los directorios de las distintas empresas capitalizadas, que representarán las acciones en custodia. Una vez que se haya definido la administración privada

de las pensiones de las cuentas del pueblo boliviano y que se haya completado el registro de los ciudadanos elegibles, la firma transferirá el valor de las respectivas acciones al administrador de pensiones nombrado. El fideicomiso mundial, además de encargarse de la custodia inmediata de las acciones, ayudará a crear en Bolivia capacidad de custodia para apoyar la conformación de un mercado de valores más amplio.

- 2.4 Los criterios utilizados para determinar la cobertura sectorial y las condiciones que deberán incluirse en esta operación son los siguientes: i) importancia del sector en lo que respecta a los ingresos públicos, el empleo y potencial de crecimiento del país; ii) magnitud de las nuevas inversiones privadas necesarias para el desarrollo del sector; iii) aspectos del entorno propicio que son fundamentales para estimular una inversión eficiente del sector privado en la medida en que el gobierno abandone los sectores que tradicionalmente ha dominado, y iv) reformas del sector financiero que sean fundamentales para el éxito de la estrategia de capitalización del gobierno.
- 2.5 Los componentes de políticas se presentan en la carta de política de desarrollo (Anexo 1) y se resumen en la matriz de política (Anexo 2). Las actividades y reglamentos específicos que deberán adoptarse para el cumplimiento de cada una de las condiciones se detallan en el proyecto de convenios de préstamo del Banco y la AIF y aparecen en los párrafos 4.9 a 4.12.
- 2.6 La operación implica una serie compleja de reformas legislativas y reguladoras que deben ordenarse en forma muy cuidadosa para conseguir el resultado deseado. Los logros obtenidos hasta ahora y las condiciones iniciales tienen como objetivo mitigar el peligro de fracaso; no obstante, el incumplimiento en un solo sector podría impedir el desembolso de los tramos del crédito. Se propone dividir el segundo tramo en tres tramos flotantes, que se desembolsarán en el momento en que se cumplan sus condiciones específicas a fin de evitar el estancamiento de todo el programa si se retrasan algunas reformas difíciles e importantes relativas a sectores específicos. En el caso de dos compañías de gran importancia, ENTEL e YPFB, las condiciones para la entrega del segundo tramo requieren la presentación de documentos de condiciones para la capitalización de ENTEL y de al menos el 30% de los activos de YPFB. En relación con todas las compañías, el contrato con cada inversionista estratégico contendrá objetivos específicos de rendimiento, que deberán cumplirse y que servirán como medidas adecuadas de seguimiento de las condiciones reflejadas en la matriz de política. Además, los miembros de los directorios de cada compañía que representan las acciones del pueblo boliviano tratarán de aumentar en la medida de lo posible la rentabilidad de dichas acciones, y la medida más eficaz para ello será la expansión de las actividades de cada compañía, como se prevé en los planes elaborados por los asesores y banqueros de inversión de cada sector.

B. Reforma del sector de hidrocarburos

- 2.7 El sector del petróleo y del gas es trascendental para Bolivia, ya que representa aproximadamente el 40% de los ingresos públicos y el 10% de los ingresos de exportación. Aunque se han adoptado medidas para aumentar la participación privada en el sector, éste se encuentra todavía dominado por YPFB. Este sector tiene varios problemas: insuficiencia de inversiones para explotar los actuales yacimientos o los recientemente descubiertos, ineficacia de las operaciones de YPFB y fuerte carga de la deuda, así como disminución de los precios de las exportaciones de gas a la Argentina. Si bien la Ley de Hidrocarburos de 1990 amplió las posibilidades de participación en este sector y eliminó algunos disuasivos fiscales, la respuesta ha sido escasa.
- 2.8 El sector de los hidrocarburos ofrece quizá las mayores posibilidades de aumentar la eficiencia y atraer inversión extranjera directa al país. Además de las grandes cuencas sedimentarias todavía no exploradas, se estima que Bolivia tiene el equivalente de 880 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas y 4.800 millones de barriles de reservas potenciales. Las necesidades de inversión entre 1994 y el año 2000 se estiman en US\$700 millones, únicamente para actividades de explotación y desarrollo. Los proyectos de exportación de gas natural al Brasil y Chile, actualmente en fase de negociación, representan las oportunidades comerciales más importantes para Bolivia en lo que queda de esta década. No obstante, hay que superar todavía numerosos obstáculos. Para que estos proyectos prosperen, se requerirá una extensa actividad de exploración y producción, que supera con mucho las capacidades del sector público, a fin de encontrar y explotar reservas de petróleo y de gas suficientes para atender la demanda interna y de exportaciones. Finalmente, habrá que atraer un considerable volumen de inversiones privadas para financiar los oleoductos necesarios y otras infraestructuras imprescindibles para la aplicación de dichos proyectos.
- 2.9 En conformidad con el "Plan de Todos", el gobierno ha establecido objetivos claros para el sector. Son los siguientes: i) incrementar en lo posible los beneficios económicos a largo plazo derivados de todas las actividades del sector; ii) eliminar la situación de monopolio de YPFB y fomentar la competencia; iii) capitalizar YPFB; iv) revisar el papel del gobierno en el sector; v) garantizar que el sector de los hidrocarburos continúe siendo fuente de ingresos y divisas fuertes; vi) atraer considerables inversiones privadas en todas las fases del sector, especialmente en las de exploración y producción; vii) promover una mayor eficacia y eficiencia en todo el sector; viii) proteger a los consumidores mediante una regulación eficaz, y ix) proteger el medio ambiente de los daños que podrían ser causados por las operaciones de explotación petrolífera.

- 2.10 El gobierno se ha comprometido con un ambicioso plan de reforma del marco jurídico, institucional y regulador que rige actualmente en el sector de los hidrocarburos, con el fin de atraer inversiones extranjeras y promover la eficiencia. Esta legislación, así como los reglamentos y directrices relativas a los contratos, se están formulando de manera que resulten competitivos, desde el punto de vista fiscal y en otros sectores, con los de los países vecinos y los del resto del mundo. La primera fase de reforma legislativa se ha superado ya con la aprobación de la enmienda de la Ley de Impuestos 843, descrita anteriormente, en la que se establece un nuevo régimen fiscal para los combustibles líquidos en las operaciones ulteriores del proceso productivo. Se trata de un requisito necesario para liberalizar los precios de los productos petroleros, restablecer la transparencia de los precios y, de esa manera, crear las condiciones para estimular la competencia.
- 2.11 A corto plazo, la mayor dificultad de administrar la recaudación de los impuestos de los hidrocarburos, unida a la pérdida de los pagos de transferencia de YPFB, puede provocar un déficit fiscal. El impacto presupuestario a corto plazo de la aplicación de las reformas en el sector de los hidrocarburos se vería paliado en parte por este crédito. A mediano plazo, el impacto fiscal de las reformas será positivo, ya que aumentarán los impuestos recaudados de un sector más dinámico y se habrán superado los costos a corto plazo. Las futuras reformas en el sector de los hidrocarburos son las siguientes:
- a. Aprobación por el Congreso de una nueva ley de hidrocarburos y promulgación de los reglamentos básicos para la aplicación de dicha ley. El actual proyecto de ley incluye los siguientes elementos: i) derecho de libre disposición, exportación e importación de crudos, productos derivados del petróleo y gas natural; ii) racionalización del régimen fiscal de las operaciones iniciales del proceso productivo y de los productos derivados del petróleo, al margen de lo establecido en la Ley 843, enmendada por la Ley 1606, incluido un impuesto nacional de escala móvil relacionado con el volumen o valor de la producción o en función de un coeficiente de ingresos y gastos acumulados (factor "R"); iii) desreglamentación de los productos derivados del petróleo; iv) introducción de una mayor flexibilidad en los acuerdos contractuales de exploración, producción y transporte por oleoducto; v) establecimiento de un mecanismo institucional adecuado con suficiente independencia y autonomía para promover las inversiones en exploración, negociar contratos de exploración y producción, administrar el banco de datos, desempeñar las obligaciones del Estado frente a las compañías de explotación y controlar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en conformidad con las prácticas y normas internacionales; vi) jurisdicción del Superintendente de

Hidrocarburos dentro del Sistema de Regulación Sectorial 1/; vii) introducción de disposiciones reguladoras para garantizar el acceso de terceras partes a los oleoductos y gaseoductos, con tarifas basadas en principios del transporte público; viii) eliminación de los obstáculos directos e indirectos al ingreso en las actividades ulteriores del proceso productivo de los hidrocarburos, y ix) disposiciones que permitan la capitalización de YPFB (véase el Anexo 4, donde se describen los principios básicos de esta ley).

- b. Promulgación de uno o varios reglamentos básicos para la aplicación de la nueva ley de hidrocarburos. Dichos reglamentos abarcarán los siguientes temas: i) proceso de adjudicación de las zonas de exploración; ii) derechos de paso, acceso y tarifas en relación con los oleoductos; iii) normas y reglamentos ambientales, técnicos y de seguridad; iv) definición de los mecanismos institucionales para garantizar y supervisar los contratos actuales y futuros de exploración y producción, y v) régimen fiscal de las fases iniciales de la producción. Además, el gobierno se ha comprometido a establecer una unidad autónoma de medio ambiente y a aprobar reglamentos, normas y reglas ambientales en relación con las actividades del sector de los hidrocarburos.
- c. Promulgación de uno o varios reglamentos básicos para la aplicación de los nuevos impuestos sobre los productos derivados del petróleo establecidos en la enmienda de la Ley de Impuestos 843. Se necesitan reglamentos sobre la cuantía de los impuestos, para aplicar el nuevo sistema fiscal que acompañará a la liberalización de los precios de los productos derivados del petróleo.
- d. Establecimiento y dotación de personal de organismos reguladores y de otra índole para la adjudicación y supervisión de las concesiones y del cumplimiento de los reglamentos. Hay que fortalecer varias instituciones del gobierno boliviano para hacer posible la aplicación de los reglamentos sobre hidrocarburos y de la nueva política fiscal. Se establecerá, dentro del SIRESE, una Superintendencia de Hidrocarburos con personal calificado para aplicar los reglamentos sobre tarifas de distribución del gas, supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de distribución, controlar los acuerdos de acceso libre y/o transporte común en los casos necesarios y evitar las prácticas anticompetitivas en el mercado. Además, se establecerá una institución independiente, autónoma desde el punto de vista financiero, que negociará los contratos de

1/ Entre esas responsabilidades figurarían la regulación de la distribución del gas natural, la supervisión de las obligaciones de acceso a los oleoductos y la imposición de las normas antimonopolio.

exploración y producción, administrará los actuales contratos de exploración entre YPFB y las compañías petroleras privadas y supervisará el cumplimiento por parte de los inversionistas estratégicos de un programa mínimo de inversiones establecido para el YPFB una vez capitalizado. Para asegurar el mantenimiento de la principal fuente de ingresos del gobierno es preciso reforzar la capacidad administrativa del Ministerio de Hacienda en lo que respecta a la recaudación de los nuevos impuestos en el sector de los hidrocarburos. Finalmente, habrá que fomentar la capacidad de la Secretaría Nacional de Energía en lo que atañe a la elaboración de normas, supervisión de las normas y reglamentos ambientales, técnicos y de seguridad, realización de evaluaciones y auditorías ambientales y aplicación - en asociación con la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente - de las leyes y reglamentos ambientales.

- e. Capitalización de YPFB. El programa de ajuste del gobierno tiene como objetivo establecer un marco jurídico regulador aceptable para el sector de los hidrocarburos al mismo tiempo que se procede a la capitalización de YPFB, que supondrá su fragmentación en varias compañías. El gobierno ha formulado los principios para la capitalización de YPFB, entre los que figuran la capacidad de las nuevas empresas de: i) atraer capital de inversión, tecnología y personal de gestión; ii) aumentar el valor para los accionistas, y iii) conseguir una posición competitiva en el mercado de gas natural. Otro factor decisivo será la organización de las nuevas compañías de tal manera que se reduzca la preocupación por la mala utilización de las fuerzas del mercado en detrimento de los consumidores internos. El gobierno considera que las nuevas compañías privadas resultantes deben competir en condiciones de igualdad en todas las zonas del sector y que toda la superficie de exploración actualmente en manos de YPFB estará abierta a la exploración de compañías privadas. Los actuales contratos de operaciones entre YPFB y productores privados se transferirán al gobierno antes de la capitalización. El gobierno tiene previsto completar la capitalización de YPFB para comienzos de 1996.

C. Reforma del sector de las telecomunicaciones

- 2.12 Bolivia tiene uno de los peores sistemas de telecomunicaciones de América Latina. El gobierno ha llegado a la conclusión de que la calidad de los servicios de las comunicaciones y los niveles de penetración de éstas en Bolivia no mejorarán significativamente si no se emprenden amplias reformas en la regulación del sector y en la gestión de las empresas locales y de larga distancia. Si bien ENTEL, que se encarga de las comunicaciones a larga distancia y está incluida en el plan de capitalización, no requiere nuevo capital y sólo necesita un pequeño volumen de inversiones, las cooperativas de servicios locales no pueden atender los requisitos

de servicio y de inversión. Por ello, el gobierno tiene intención de exigir que ENTEL, una vez efectuado el proceso de capitalización, destine la mayor parte de sus nuevos recursos de inversión a mejorar el servicio local.

2.13 En su carta de política de desarrollo, el gobierno ha declarado que desea atraer hacia este sector capital privado de inversión a fin de prestar más y mejores servicios a la población. Además, se ha comprometido a conseguir este objetivo mediante: i) el establecimiento de un nuevo marco jurídico y regulador para el sector de las telecomunicaciones que estimule una competencia equitativa y abierta para la prestación de dichos servicios, y ii) la capitalización de ENTEL de tal manera que las inversiones se orienten hacia el servicio local, en caso necesario.

2.14 Las iniciativas más importantes en el programa de reforma de las telecomunicaciones son las siguientes:

a. Aprobación por el Congreso de una nueva ley de telecomunicaciones. El actual proyecto de ley, ya presentado al Congreso: i) delinea las responsabilidades específicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro del SIRESE; ii) define los principios de las nuevas estructuras de tarifas y de interconexión para promover el desarrollo eficiente del sector; iii) especifica que, en los casos en que no haya competencia, las tarifas serán reguladas por la Superintendencia utilizando métodos que incorporen una fórmula de ajuste automática, y iv) prevé la interconexión obligatoria de las redes de telecomunicaciones públicas, de manera que permitan una interconexión equitativa y no discriminatoria. La ley presentada al Congreso autoriza a las empresas tanto de larga distancia como locales a conservar los privilegios de monopolio en sus concesiones durante seis años, pero todos los servicios de valor añadido (transmisión de datos, telefonía celular, líneas privadas en arriendo, etc.) estarán abiertos a la libre competencia. Finalmente, el proyecto de ley autoriza a la Superintendencia a eliminar esa exclusividad si no se cumplen los objetivos de calidad y ampliación de las concesiones. Con el crecimiento efectivo de la competencia en el sector y la conclusión del período de exclusividad, la necesidad de reglamentación desaparecerá gradualmente hasta que finalmente la competencia determine libremente la variedad, calidad y precios de los servicios de telecomunicaciones.

b. Promulgación de reglamentos básicos para la aplicación de la ley. El gobierno ha comenzado a preparar los reglamentos correspondientes para la aplicación de la ley. Una vez transcurridos tres meses de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, se promulgarán los reglamentos. Estos incluirán: i) procedimientos y fórmulas para el ajuste de las tarifas, y ii) normas para la interconexión de las distintas empresas (normas técnicas y tarifas de acceso).

- c. Capitalización de ENTEL. La estrategia para la capitalización de todo el sector exige que ENTEL, una vez capitalizada, amplíe el servicio local - incluido el de las zonas rurales - en conformidad con las especificaciones que se incorporarán a su acuerdo de concesión. Para que la compañía pueda obtener una rentabilidad razonable de las inversiones efectuadas, el gobierno tiene previsto conceder a ENTEL, una vez privatizada, derechos exclusivos de prestación de servicios básicos internacionales y de larga distancia en Bolivia por un plazo de seis años. El nivel de cobertura, mantenimiento, calidad, ámbito de operación y sanciones se especificarán en su acuerdo de concesión. Después de su capitalización, ENTEL deberá instalar al menos un teléfono público en unas 1.500 comunidades rurales con más de 1.000 habitantes y teléfonos públicos en las zonas urbanas. Además, durante ese tiempo las actuales cooperativas deberán ampliar y mejorar su servicio dentro de las áreas de concesión. Si los proveedores locales no atienden estos objetivos, el Superintendente permitirá que otras empresas entren en el mercado y superen esas deficiencias. Las tarifas iniciales durante el período de transición se calcularán en función del costo de cada clase de servicio, con un margen razonable de beneficio. Los ajustes se efectuarán con una metodología basada en precios máximos. El gobierno tiene la intención de ofrecer las nuevas acciones de ENTEL no más tarde de mediados de 1995. Para efectuar esta transacción se ha contratado un banco internacional de inversiones.
- d. Establecimiento y dotación de personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro del SIRESE. La Superintendencia de Telecomunicaciones, que adjudicará y supervisará las concesiones y el cumplimiento de los reglamentos, deberá establecerse antes de que hayan transcurrido 90 días de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones. La contratación de personal para esta unidad deberá llevarse a cabo durante 1995.

D. Reforma del sector de la electricidad

- 2.15 Aunque ENDE ha conseguido establecer eficazmente un sistema de generación y transmisión que ofrece servicios técnicamente fiables, la organización del sector eléctrico de Bolivia en su conjunto no reúne los requisitos necesarios para garantizar la eficiencia de las operaciones, promover la competencia, atraer inversión privada en sustitución del apoyo gubernamental y ampliar el sistema eficazmente. Para resolver estos problemas, el gobierno se ha comprometido a adoptar una estrategia de reestructuración del sector, que cuenta con el apoyo del préstamo propuesto.
- 2.16 Los principales objetivos de la reforma del sector eléctrico son prestar servicios económicos y fiables al mayor número posible de consumidores, con poca intervención gubernamental y teniendo debidamente en cuenta los problemas del medio ambiente. Este objetivo se alcanzará promoviendo la calidad y eficiencia mediante

la competencia y una regulación efectiva y autónoma, y atrayendo nuevas fuentes de capital privado para impulsar su desarrollo. A fin de resolver los problemas del sector y alcanzar el nivel de eficiencia necesario para apoyar el desarrollo económico y social del país, el gobierno se propone adoptar una estrategia de reestructuración sectorial.

- 2.17 Uno de los primeros pasos decisivos en el proceso de reforma de este sector fue la aprobación por el Congreso de una nueva ley de electricidad. En dicha ley se especificaban los siguientes aspectos: responsabilidades de la Superintendencia de Electricidad dentro del SIRESE, incluida la atribución y supervisión de las concesiones; principios para la fijación de tarifas; obligación de separación de las funciones de generación, transmisión y distribución en diferentes compañías, incluida la prohibición de propiedad cruzada directa (en el caso de las empresas de servicios públicos integradas en el Sistema Interconectado Nacional); acceso abierto a la transmisión y la distribución; establecimiento del principio de que las necesidades futuras de inversión serán atendidas por el sector privado y disposiciones antimonopolio de manera que no se atente contra la competencia en el mercado de contratos al por mayor.
- 2.18 El gobierno ha contratado abogados y funcionarios bancarios especializados en inversiones internacionales con el fin de que preparen la capitalización de ENDE y la privatización de ELFEC (compañía de distribución de electricidad de Cochabamba). Las ulteriores medidas de reforma del sector de la electricidad incluyen los siguientes elementos:
- a. Promulgación de reglamentos para la aplicación de la Ley de Electricidad. Se prevé que los reglamentos para la aplicación de esta ley estén aprobados no más tarde de mediados de 1995. Los reglamentos básicos contemplarán los siguientes aspectos: i) calidad de las normas de servicio; ii) normas claras y específicas de fijación de tarifas; iii) sistemas económicos de distribución y iv) condiciones para el establecimiento de concesiones y licencias y para el seguimiento de las normas de rendimiento.
 - b. Establecimiento y dotación de personal de la Superintendencia de Electricidad dentro del SIRESE. Desde la aprobación de la Ley de Electricidad, el gobierno ha comenzado a contratar personal para la Superintendencia para que pueda encargarse de la adjudicación y supervisión de las condiciones y del cumplimiento de los reglamentos y ha comenzado a prepararlo para el desempeño de esas funciones.
- 2.19 Capitalización de ENDE. El gobierno tiene intención de capitalizar ENDE no más tarde de mediados de 1995 y hacerlo en forma que favorezca la competencia y la participación del sector privado en la generación de electricidad en el futuro y se garantice el acceso

abierto a la red. Los activos de ENDE se han dividido en dos partes: generación y transmisión. A su vez ENDE-Generación se ha dividido en tres compañías que deberán capitalizarse, de manera que las nuevas inversiones en el sector estimulen la competencia eficaz, más que la creación de un cuasi-monopolio. Estas empresas privadas capitalizadas tendrán obligación de invertir en nueva capacidad de generación durante un período especificado a fin de atender una demanda creciente. El ingreso de nuevos operadores en el sector se limitará durante tres años después de la capitalización de las empresas generadoras. Los sistemas aislados de ENDE que atienden a las zonas rurales, así como los sistemas de distribución regional, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), Servicios Eléctricos de Potosí (SEPSA) y Compañía Eléctrica de Sucre (CESSA), se privatizarán en conformidad con la Ley de Privatización de 1992. Finalmente, la compañía de transmisión se capitalizará una vez que el sistema de expedición funcione en forma satisfactoria.

E. Reforma del sector minero

- 2.20 La importancia del sector minero en la economía boliviana ha disminuido de forma constante desde mitad de los años 80. Si bien la caída de los precios mundiales de los minerales ha contribuido a este declive, hasta 1994 gran parte de las pérdidas fue consecuencia de la mala gestión de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la explotación de minas no rentables y graves problemas de exceso de personal. Además, la falta de estabilidad del sistema fiscal y de las políticas de arriendo relacionadas con el sector minero sitúan a Bolivia en situación de desventaja comparativa con otros países en lo que respecta a la atracción de inversionistas. Entre 1986 y 1994 el gobierno emprendió un programa de racionalización de la COMIBOL, reduciendo radicalmente el excedente de personal y eliminando la explotación de algunas minas inviables. Para mejorar el rendimiento de este sector, la COMIBOL ha comenzado a transferir al sector privado, mediante empresas conjuntas, las responsabilidades de explotación y gestión de todas las operaciones potencialmente rentables. En el futuro la COMIBOL se convertirá exclusivamente en una sociedad de control.
- 2.21 Los ajustes que deberán introducirse en la COMIBOL deben completarse con la modernización del marco jurídico e institucional del sector para garantizar el acceso libre a los recursos minerales, la administración adecuada del sector, sobre todo en lo que respecta a los derechos mineros, y el establecimiento de una base de datos técnicos fiable. Se modificarán las políticas de arriendo incluidas en el vigente código de explotación minera de Bolivia, que colocan al país en una situación de desventaja comparativa con otros países en lo que respecta a la atracción de inversionistas. La AIF ha colaborado con este proceso de reforma mediante el proyecto de rehabilitación del sector minero, todavía en curso.

2.22 El gobierno: i) ha preparado un proyecto de enmienda de la Ley de Minas; ii) ha elaborado una estrategia para capitalizar la Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV), y iii) ha contratado asesores financieros/funcionarios bancarios especializados en inversión con el fin de preparar la capitalización de la EMV y aumentar la participación privada en la administración de los activos de la COMIBOL. Las iniciativas propuestas para el futuro son las siguientes:

- a. Aprobación de una enmienda de la Ley de Minas. Para conseguir que el sector sea más atractivo a los inversionistas a largo plazo, esta enmienda incluirá las siguientes disposiciones: delimitar las atribuciones de la COMIBOL en cuanto compañía de control y derogar las disposiciones de las leyes en las que se le atribuía una función relacionada directamente con la explotación minera; permitir en el sector minero arriendos por un plazo superior a los 10 años; introducir opciones fiscales para los inversionistas; eliminar los cánones opcionales, actualmente aplicados en concomitancia con el sistema fiscal basado en los resultados; mejorar la administración de los derechos mineros; definir las atribuciones y responsabilidades de las instituciones del sector para facilitar su modernización, mejorar su administración y mantener una base de datos fiables y actualizar las disposiciones ambientales vigentes para que estén en conformidad con la política gubernamental.
- b. Capitalización de la EMV. Un paquete de activos que garantizará a largo plazo un suministro suficiente de mineral de estaño a la metalúrgica Vinto aumentará notablemente el atractivo de la EMV para los posibles inversionistas. Con este fin, el gobierno tiene la intención de ofrecer un paquete que incluya la metalúrgica Vinto más el arriendo a largo plazo de una serie de minas de la COMIBOL. El capital conseguido mediante esta capitalización se utilizaría para la explotación de las minas.

F. Reforma del sector ferroviario

2.23 La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) se formó en 1964 mediante la combinación de varias líneas andinas de Bolivia occidental pertenecientes al Estado y varias compañías privadas. Algunos años más tarde se sumaron las líneas radiales de Bolivia oriental procedentes de Santa Cruz. En total, el sistema cuenta con 3.500 km de líneas de ferrocarril y 4.000 empleados. La red oriental es rentable (teniendo en cuenta las subvenciones del gobierno para compensar las tarifas de pasajeros y mercancías, inferiores al costo), pero las pérdidas de la línea andina absorben casi todos estos beneficios. Además, la rentabilidad de las líneas andinas ha disminuido en los últimos años como consecuencia del declive del sector de los minerales en Bolivia y del rápido aumento de los costos. Ambas redes sufren los efectos de las prácticas ineficientes, el exceso de personal y la falta casi total de

reinversión. Esta situación ha mejorado como consecuencia de los numerosos despidos efectuados a finales de 1993. No obstante, si no se introducen cambios fundamentales, todo el sistema de ferrocarriles está expuesto a un constante deterioro.

- 2.24 La adopción de las nuevas políticas económicas de Bolivia ofrece posibilidades de reformar a fondo el sector ferroviario. Los objetivos del gobierno son los siguientes: a) acceso no discriminatorio a los servicios ferroviarios; b) tarifas que reflejen las condiciones del mercado, libres de distorsiones monopolísticas; c) adopción por los ferrocarriles de las tecnologías y prácticas más eficientes y adecuadas y d) transformación de los ferrocarriles en un conjunto de empresas privadas por medio de un proceso de capitalización. Si, por razones sociales importantes, el gobierno decide que el sector privado debe continuar explotando unos ferrocarriles improductivos, éstos deberán ser compensados por el gobierno con un sistema transparente de pagos en concepto de obligaciones de servicio público.
- 2.25 El gobierno tiene previsto presentar al Congreso no más tarde de mediados de 1995 una ley de ferrocarriles. Esta permitirá a la compañía o compañías recientemente capitalizadas ofrecer un servicio ferroviario integrado. Los activos de ENFE, excluidas las vías férreas, se incluirían en el conjunto de medidas de capitalización. La ley delinearé las responsabilidades del Superintendente de Transporte dentro del SIRESE en el sector ferroviario. Un nuevo marco regulador garantizará que los ferrocarriles funcionen como "empresa de transporte público" que ofrezca sus servicios a todas las partes. Para eliminar abusos monopolísticos, las tarifas, contratos de transporte de mercancías u otros precios fijados para tales servicios así como las condiciones de éstos estarán sometidos a una reglamentación adecuada que será supervisada por el SIRESE. La ley establecerá los principios para el establecimiento de un mecanismo transparente de pago de los servicios públicos no remunerativos que el gobierno o cualquier otra entidad debidamente constituida desee percibir del ferrocarril.
- 2.26 En abril de 1995 el gobierno contrató consultores y funcionarios bancarios especializados en inversión para que ayuden a formular la estrategia de capitalización de ENFE. Además, se está efectuando un análisis del alcance y valor de las propiedades de ENFE, indicándose en cada caso si son necesarias o superfluas para el servicio ferroviario. Los asesores especificarán una o varias formas recomendadas de transacción, que posteriormente serán objeto de una campaña de comercialización.

G. Reforma del sector aeronáutico

- 2.27 La debida organización del sector aeronáutico es fundamental para el desarrollo e integración de Bolivia, así como para garantizar la seguridad de los viajeros. El sector aeronáutico de Bolivia se

caracteriza por una intervención estatal relativamente elevada y carece de un marco regulador eficaz. Todo ello ha dado lugar a numerosas ineficiencias en la prestación de los servicios relacionados con el tráfico aéreo y los aeropuertos. Dentro de su programa de reforma, el gobierno ha aprobado ya el Decreto Supremo 21060, que desregulaba las tarifas del tráfico aéreo interno. Esta disposición ha permitido crear una competencia privada más fuerte en el mercado.

- 2.28 El gobierno desea reestructurar el sector para promover la participación del sector privado, lograr una mayor eficacia del servicio aéreo nacional e internacional y reducir la participación del gobierno cuando resulte innecesaria. Los tres principios básicos del programa de reforma son los relativos a: i) los sectores del transporte aéreo internacional y nacional; ii) el sector de los aeropuertos, y iii) la adaptación del marco institucional y regulador.
- 2.29 El gobierno tiene intención de capitalizar LAB de manera que fomente la competencia en el sector aeronáutico nacional. Ha contratado un asesor técnico, un banco especializado en inversiones internacionales y un estudio de abogados para que ayuden en la capitalización de LAB. Desde 1994, el gobierno ha eliminado las subvenciones implícitas a Transportes Aéreos Militares (TAM) y Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que han suspendido sus operaciones. El gobierno desea establecer condiciones de igualdad eliminando las subvenciones implícitas a compañías aéreas determinadas, sobre todo en el caso de dos compañías aéreas militares - TAM y TAB. Las rutas internas a destinos no comerciales se adjudicarán mediante subasta a la compañía aérea nacional que pida la compensación más baja. El gobierno o bien convertirá a TAM y TAB en empresas comerciales que funcionen en un mercado competitivo o suspenderá sus servicios comerciales y las integrará en el sector militar.
- 2.30 En lo que respecta al sector de los aeropuertos, el gobierno tiene intención de reestructurar la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) en las siguientes condiciones: i) la mayor parte de las actividades relacionadas con los aeropuertos, excluidos los servicios de control del tráfico aéreo, se transferirán al sector privado; ii) una vez redimensionada, AASANA (que probablemente pasará a constituirse en una nueva entidad) conservará la responsabilidad únicamente de los servicios de control del tráfico aéreo; iii) la administración de los aeropuertos se descentralizará mediante la creación de organismos regionales, con participación de entes regionales y del sector privado, y iv) las tarifas y tasas de los aeropuertos se fijarán en niveles semejantes a los de los países vecinos. El gobierno ha conservado consultores especializados en aeropuertos para que colaboren en la reestructuración y privatización de AASANA y tiene intención de contratar un banco de

inversiones internacionalmente reconocido para que ayude a controlar esta transacción.

- 2.31 En lo que respecta al marco institucional y regulador del sector aeronáutico, el gobierno tiene intención de: i) adaptar la actual legislación aeronáutica a la nueva organización del sector, así como a la ley sobre el SIRESE; ii) adaptar la política general de aviación así como la de alcance internacional para acomodarse a los cambios en el sector aeronáutico, y iii) crear un organismo de aviación civil (con funciones reguladoras) para los asuntos relacionados con la aviación. La Superintendencia de Transporte establecida dentro del SIRESE se encargará de supervisar el cumplimiento de las normas de contenido económico, por ejemplo las tarifas correspondientes al emplazamiento aéreo.

H. Privatización de pequeñas y medianas empresas públicas

- 2.32 El gobierno posee unas 72 pequeñas y medianas empresas, que deberán privatizarse antes de que finalice el año 1996. Se trata de empresas que están bajo el control de las corporaciones regionales de desarrollo, el ejército, las prefecturas locales (en su mayoría, hoteles), municipios y diversos ministerios, secretarías, empresas estatales (en calidad de filiales) y otros entes. Su valor total se estima en US\$100 millones. En relación con prácticamente la mitad de este grupo, los consultores han realizado ya tasaciones y evaluaciones individuales de preprivatización.
- 2.33 El proceso de privatización de las pequeñas y medianas empresas se explicitó con todo detalle en la Ley de Privatización de mayo de 1992 y en los correspondientes reglamentos, y el gobierno anterior lo aplicó para la privatización o enajenación de unas 30 empresas con un valor total de \$12 millones. El gobierno ha aprobado un decreto en el que se adaptan los procedimientos a la nueva estructura del Poder Ejecutivo. El producto de la venta se utilizará exclusivamente para actividades de orientación social, seleccionadas por el organismo sobre el que recaía la responsabilidad de la empresa cuando pertenecía al sector estatal, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Hasta ahora se han desembolsado aproximadamente US\$5 millones de fondos para más de 100 proyectos sociales.

I. Reformas del marco institucional

- 2.34 El programa de capitalización arriba descrito tiene como objetivo acabar con la propiedad y gestión estatal de empresas estratégicas en sectores económicos fundamentales. El gobierno ha adoptado varias medidas para establecer un marco institucional que favorezca la participación del sector privado. Como ya se ha señalado, está preparando estructuras institucionales orientadas al sector privado, abriendo las estructuras de mercado y estableciendo reglamentos transparentes y organismos de regulación independientes en sectores decisivos actualmente dominados por las empresas

públicas. Además, está: i) estableciendo mecanismos eficaces e imparciales de resolución de diferencias para resolver los conflictos entre el gobierno y las empresas privadas como consecuencia de la aplicación de los reglamentos sectoriales; ii) estableciendo mecanismos de resolución de diferencias entre las distintas empresas privadas como consecuencia de los intercambios comerciales y financieros, incluidas las transacciones de capitalización propuestas; iii) apoyando los esfuerzos del Poder Judicial para mejorar la oportunidad y solidez de su sistema de resolución de diferencias mediante un programa de reforma judicial, y iv) tratando de superar las deficiencias y restricciones jurídicas en el registro y normas de seguridad de los bienes muebles, que limitan indebidamente el acceso al crédito.

1. Marco jurídico de la resolución de conflictos

- 2.35 La disponibilidad de mecanismos equitativos y ágiles de resolución de diferencias entre representantes de sector privado es otra consideración importante para los inversionistas. La legislación vigente no presenta mecanismos alternativos para este fin. Los principales obstáculos se refieren a la elegibilidad de las partes, ámbito de aplicación y posibilidad de obtener decisiones rápidas y de aplicarlas ulteriormente.
- 2.36 En agosto de 1994, el Congreso boliviano ratificó la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, la correspondiente convención de arbitraje de Panamá y el Tratado del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Ello permite imponer en Bolivia los laudos arbitrales referentes a organismos privados. Es también intención del gobierno promover la utilización de mecanismos alternativos de resolución de diferencias - arbitraje, conciliación y mediación - como medio de responder eficazmente a las necesidades de los inversionistas en el contexto nacional. Se ha elaborado ya un proyecto de ley de arbitraje, comercialización y mediación, que ha sido examinado por el Ministerio de Justicia y se someterá a la aprobación del Congreso.

2. Reforma judicial

- 2.37 El Poder Judicial, con apoyo del Ejecutivo, está tratando de mejorar la administración de la justicia en relación con los casos civiles y comerciales en Bolivia. El sistema judicial constituye un obstáculo decisivo al desarrollo del sector privado y al funcionamiento eficiente de una economía de mercado en Bolivia. La incapacidad del sistema judicial de establecer un entorno fiable y previsible para la imposición de los derechos relacionados con las transacciones comerciales es un obstáculo fundamental a la aparición de prácticas empresariales modernas y mercados eficientes. Las deficiencias del sistema han dificultado también el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de diferencias, como el arbitraje comercial.

- 2.38 El gobierno tiene intención de buscar la coordinación con las iniciativas del Poder Judicial encaminadas a modernizar la administración de la justicia en Bolivia. Ello supone la conversión del sistema judicial en una organización con los siguientes objetivos: i) resolución expeditiva de los conflictos judiciales; ii) decisiones judiciales basadas en una jurisprudencia racional y uniforme en conformidad con los principios legislativos y de equidad; iii) eficiencia en el uso de los recursos judiciales, y iv) responsabilidad y sensibilidad del Poder Judicial ante las necesidades de administración de justicia de la sociedad. Para superar las deficiencias del sistema judicial se deberán introducir reformas en las políticas de gestión de recursos humanos a fin de rectificar los incentivos que regulan la contratación, promociones y remuneración del personal y desarrollar la función de gestión estratégica junto con sistemas adecuados de información sobre la gestión. Se requieren también reformas para tramitar los conflictos de manera que se pueda responder eficazmente a la exigencia de una administración de justicia rápida, equitativa y previsible.

3. Fomento de las transacciones garantizadas

- 2.39 En Bolivia sólo tienen posibilidad de recibir crédito quienes pueden presentar bienes inmuebles como garantía. La posesión de existencias, las cuentas por cobrar o el equipo industrial no pueden servir de fianza si no va acompañada por una garantía real o personal suplementaria. El papel dominante de los bienes inmuebles en este sentido es resultado de deficiencias existentes en el marco jurídico e institucional en lo que respecta a las transacciones garantizadas. El marco jurídico vigente limita los activos que pueden servir de garantía y no aclara debidamente el orden de prioridad entre las reclamaciones de los acreedores ni cuál es el registro en que se deben hacer constar dichas reclamaciones. Además, la ley no permite ningún tipo de imposición privada de los derechos, alternativa que es fundamental para un sistema eficaz de transacciones garantizadas. Estos obstáculos jurídicos representan un grave obstáculo a la capacidad de los particulares de utilizar los bienes muebles como garantía.
- 2.40 Las deficiencias en el funcionamiento de los registros constituyen también un grave obstáculo a la instauración de un sistema de transacciones garantizadas que funcione debidamente. Ni el catastro ni el registro comercial aplican procedimientos adecuados para garantizar la clasificación, recuperación y publicidad de las garantías. Por ello, no pueden cumplir su objetivo principal de ofrecer a los acreedores garantizados la certeza que desean en cuanto a su interés prioritario sobre los activos de los deudores.
- 2.41 El gobierno tiene intención de solicitar al Congreso la aprobación de las enmiendas pertinentes del código mercantil o de una ley general de transacciones garantizadas con el fin de eliminar los actuales obstáculos jurídicos. Esta medida legislativa tendría

como objetivo facilitar, modernizar y aclarar la creación, perfeccionamiento y aplicación de intereses y gravámenes sobre la propiedad personal. Los reglamentos bancarios se modificarán de manera que se atengan a esta nueva ley.

- 2.42 Como la información de los registros es fundamental para garantizar un entorno económico eficiente, el gobierno está empeñado en mejorar el registro comercial y el de propiedad. De hecho, ya ha encargado que se efectúen evaluaciones de las necesidades técnicas de cada una de las oficinas de registro. Su intención es aprovechar las conclusiones de dichos estudios para promover y emprender un programa orientado a mejorar la operación y gestión de los registros mediante la informatización y el seguimiento de su desempeño. Además, está investigando la posibilidad de contratar a empresas del sector privado la gestión de los registros comerciales.

J. Reformas del sector financiero

- 2.43 Si bien la eficiencia de la intermediación financiera bancaria ha mejorado en los últimos años, los mercados financieros a largo plazo continúan estando insuficientemente desarrollados, con mecanismos de ahorro contractual débiles y mal regulados y mercados de valores muy restringidos y poco supervisados. El desarrollo de los mercados financieros a largo plazo es fundamental para el éxito de la estrategia de capitalización del gobierno, que implica la distribución de acciones entre la población boliviana mediante un mecanismo privado de fondo de pensiones. El establecimiento de un mercado secundario bien regulado de las acciones distribuidas, será fundamental para promover un mercado competitivo y conseguir los mayores beneficios posibles tanto para los inversionistas como para los beneficiarios de las acciones distribuidas. Además, la gestión y supervisión de este sistema de distribución es fundamental para la credibilidad pública del proceso de capitalización — todos los interesados deben estar convencidos de que las carteras están bien administradas y de que recibirán en forma oportuna y eficiente todos los beneficios a los que tienen derecho. Finalmente, el establecimiento de un mercado de seguros mejor regulado permitirá a los particulares utilizar las distribuciones mediante contratos de renta vitalicia para garantizar los ingresos más elevados en el momento de la jubilación, establecer un canal de inversión institucional en un mercado secundario de acciones y facilitar una mejor cobertura de riesgos.
- 2.44 El gobierno tiene también la esperanza de establecer mercados financieros a largo plazo para movilizar el ahorro a largo plazo destinado a la inversión. Los mercados accionarios y de renta fija podrían ser importantes vehículos para recaudar financiamiento destinado a la inversión así como un medio de acomodar los mecanismos financieros a los riesgos comerciales. Además, el desarrollo de los mercados de seguros podría aumentar las posibi-

lidades de cubrir los riesgos comerciales, personales y sobre la propiedad así como estimular la inversión institucional.

1. Desarrollo de los mercados de valores

- 2.45 Desde 1989 funciona un mercado de valores oficialmente regulado. Las dos bolsas, de La Paz y Santa Cruz, ofrecen fundamentalmente valores privados y públicos de renta fija. Hay en el mercado tres fondos mutuos y la bolsa de La Paz cuenta con 18 miembros (10 de los cuales son empresas filiales de bancos). La bolsa no ofrece ningún servicio de custodia de títulos y éstos pasan materialmente de unas cajas de seguridad a otras. De la misma manera, las compensaciones y los pagos se realizan manualmente en el caso de los valores y mediante transferencias de fondos de los bancos a los corredores y viceversa. La Comisión Nacional de Valores (CNV) regula la emisión y compraventa de valores. El volumen de operaciones de la bolsa de La Paz ha recuperado recientemente el nivel de 1990, tras haber descendido a sólo el 50% en 1992. Actualmente, el volumen medio de las operaciones es de US\$60 millones al mes. La gama de instrumentos intercambiados en las transacciones de compra o venta en la bolsa de La Paz ha evolucionado de forma constante y desde 1990 presenta una diversidad cada vez mayor, destacando los bonos, los certificados de depósito y las transacciones de recompra. Aproximadamente el 60% del volumen de operaciones corresponde a compras o ventas de valores, y el 40% a transacciones de venta y recompra con plazos que van desde uno a 45 días. La mayor parte de las operaciones se refieren a instrumentos de deuda a corto plazo, y la mayoría de las transacciones se producen en el mercado secundario de certificados de depósito, con acuerdos de recompra. Las transacciones se hacen de viva voz cinco días a la semana mediante la proclamación de los valores cotizados.
- 2.46 El gobierno está empeñado en establecer un mercado transparente y eficiente como prerrequisito necesario para el éxito de su programa de capitalización así como para acelerar la movilización del ahorro a largo plazo. Un mercado de valores bien regulado, con mecanismos adecuados de transparencia, facilitará el mercado secundario y de esa manera promoverá la competencia y garantizará el mejor precio y la mayor liquidez a los accionistas y a los miembros de fondos mutuos y de pensiones. La ampliación y mayor eficiencia de los mercados de acciones y bonos estimulará el desarrollo del financiamiento de sociedades a largo plazo y ofrecerá un mecanismo de protección frente a los riesgos financieros. Es más, dado el gran volumen de acciones que entrarían en el mercado boliviano (e internacional) como consecuencia del plan de capitalización, la existencia y transparencia de un mercado secundario de acciones es fundamental para promover un mercado competitivo entre los fondos de pensiones y garantizar que los 3,2 millones de titulares estimados de las cuentas de distribución diferida puedan obtener la mayor rentabilidad y liquidez de sus activos en cartera.

2.47 El gobierno se propone establecer un marco jurídico, institucional y reglamentario que pueda regular con seguridad los mercados de valores bolivianos. Para ello, habrá que adoptar medidas que mejoren la regulación, operación y supervisión de los valores, aspectos fundamentales para las reformas de las pensiones y la capitalización. En 1991 se redactó un proyecto inicial de ley de valores, que actualmente está siendo examinado por una comisión del Congreso destinada a tal fin. La ley, que se presentará al Congreso a comienzos de 1996, representa un gran avance, ya que permitirá cumplir la mayor parte de los requisitos previstos para los próximos años.

2.48 Otras medidas fundamentales del programa de reforma son las siguientes:

a. Aprobación por el Congreso de una ley de valores y promulgación de reglamentos para la aplicación de dicha ley. El proyecto de ley trata de garantizar la protección de los inversionistas (prevención de transacciones ilegales, fraude y manipulación de precios, porcentaje de reserva obligatoria para los operadores del mercado, etc.); mantener el funcionamiento ordenado de los mercados mediante la supervisión adecuada de las prácticas de los mercados accionarios; promover el mercado permitiendo la utilización de mecanismos que amplíen la diversidad de instituciones e instrumentos financieros y fomentar la apertura a la inversión extranjera y a los participantes del mercado. Los reglamentos básicos de aplicación de la ley se ocuparán de: i) la emisión y tramitación de los valores, y ii) los requisitos de registro y cotización.

b. Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Valores. Las medidas adoptadas en este sentido incluirían el establecimiento de procedimientos de regulación más estrictos en materia de equipo y programas informáticos y supervisión, orientaciones sobre la comunicación de información y capacitación del personal. El gobierno tiene también previsto establecer un mecanismo de financiamiento para garantizar el debido funcionamiento de esta Superintendencia.

2. Reforma de las pensiones

2.49 El actual sistema de seguridad social de Bolivia prevé prestaciones en forma de pensiones de jubilación, supervivencia e invalidez y seguros médicos. El seguro de pensión es obligatorio únicamente en el caso de algunos trabajadores. Los empleados de bancos, la policía y el ejército y los profesores de universidad tienen sus propios regímenes de seguro de pensión. En el caso de otros empleados, el seguro obligatorio de pensión se lleva a cabo mediante: i) un fondo nacional que cubre las pensiones básicas y ii) 22 fondos complementarios organizados por sectores o industrias. Un decreto de enero de 1994 creó el Instituto Nacional de Pensiones con la función de supervisar los fondos de pensiones

básicos y complementarios. Los contribuyentes representan aproximadamente el 12% de la población económicamente activa. De los 276.000 contribuyentes al sistema, aproximadamente el 69% son empleados del sector público (en particular, maestros, miembros de las fuerzas de policía y empleados de empresas estatales y organismos descentralizados).

- 2.50 El gobierno proyecta, como parte del "Plan de Todos" una reforma del sistema de pensiones cuyos principales objetivos son los siguientes: i) reestructuración financiera y operativa de las actuales pensiones básicas y complementarias para aumentar la eficiencia, solvencia y equidad de las contribuciones y prestaciones; ii) establecimiento de un nuevo sistema de fondos de pensiones de gestión privada y contribuciones previamente determinadas que sustituirá gradualmente al sistema actual, y iii) distribución de las acciones procedentes de la capitalización en cuentas individuales de distribución diferida administradas por nuevos fondos de pensiones privados. Entre los requisitos de la reforma figuran la aprobación de una ley de pensiones y los consiguientes reglamentos y el establecimiento de una Superintendencia de Pensiones.
- 2.51 El gobierno se ha comprometido a reestructurar el actual sistema de pensiones. Se llegó a un acuerdo en torno a los principios básicos de un sistema revisado de pensiones (véase el Anexo 5), pero el único aspecto de la reforma que condicionará el desembolso del segundo tramo del sector financiero del préstamo del Banco es el establecimiento de cuentas no contributivas para la distribución de acciones derivadas de la capitalización, y el establecimiento y dotación de personal del organismo, que se encargará de supervisar el cumplimiento de la ley de pensiones y reglamentos correspondientes.

3. Reforma del sector de los seguros

- 2.52 El mercado de seguros de Bolivia tiene que recuperarse todavía del grave proceso de desintermediación que tuvo lugar durante la hiperinflación de los años 80. Los ingresos anuales en concepto de primas son de sólo US\$40 millones, procedentes en su mayor parte de los seguros de bienes inmobiliarios, accidentes y automóviles y una parte muy pequeña del seguro de vida. Además, muchas compañías de seguros carecen de la necesaria base técnica, financiera y de capital para sus operaciones. Los límites a las actividades crediticias de las compañías de seguros les han impedido invertir en hipotecas, bonos privados o efectos comerciales. Una parte considerable de las reservas técnicas deben invertirse en capital fijo, por ejemplo edificios. La Superintendencia de Seguros es muy débil, debido a la falta de personal técnicamente especializado y de procedimientos de seguridad y control. Actualmente un comité de

examen se está encargando de considerar un proyecto de ley de seguros cuyo objetivo es fortalecer este sector y sus mecanismos de supervisión (los preparativos comenzaron en 1992). Se prevé que podrá presentarse al Congreso a comienzos de 1996.

2.53 La reforma del sector de seguros es necesaria para aumentar las opciones de cobertura de los riesgos comerciales múltiples, contribuir a establecer un vehículo para el ahorro a largo plazo y garantizar que los jubilados, inválidos y supervivientes puedan invertir eficazmente las prestaciones recibidas en concepto de pensión. La mejora de la reglamentación y supervisión de los seguros contribuye a reforzar los objetivos de capitalización y reforma de las pensiones, ya que un sistema de seguros eficiente y regulado es decisivo para la cobertura en caso de fallecimiento e invalidez así como para reestablecer un sistema de pensión vitalicia durante la jubilación. Además, la reforma de los seguros es también necesaria para que las compañías del sector puedan efectuar inversiones más diversificadas - incluidas las acciones de las compañías capitalizadas. Por ello, esta reforma se considera como complemento fundamental del proceso de capitalización.

2.54 La reformas fundamentales necesarias para el desarrollo del sector de los seguros son las siguientes:

- a. Aprobación por el Congreso de una ley de seguros y promulgación de reglamentos. Esta ley, presentada originariamente al Congreso en 1992, prevé el fortalecimiento de los parámetros para el funcionamiento de las compañías de seguros (actuación, solvencia y requisitos de capital, márgenes técnicos y de solvencia, reservas técnicas, inversiones, reaseguros, sistema de gobierno, administración, contabilidad, fusiones, transformaciones y cierres y liquidaciones); establecimiento de normas para el funcionamiento de intermediarios y personal auxiliar (agentes, corredores de seguros y reaseguros, tasadores de pérdidas y agentes de pago de reclamaciones, investigadores de accidentes e inspectores de daños); ampliación de la diversidad de activos en que las compañías pueden invertir sin olvidar las exigencias de las normas de prudencia y control; finalmente, el establecimiento de controles para la regulación de las compañías de seguros, intermediarios y auxiliares a través de la Superintendencia de Seguros, medidas de prudencia y control y sanciones. Se promulgarán reglamentos básicos sobre las siguientes materias: i) admisión de los aseguradores nacionales y extranjeros y de los reaseguradores; ii) procedimientos de supervisión, y iii) parámetros de inversión.

- b. Fortalecimiento de la Superintendencia de Seguros que se encargará de supervisar el cumplimiento de la ley de seguros y de sus correspondientes reglamentos, lo que supondrá: i) la revisión de la estructura orgánica, en caso necesario, ii) el fortalecimiento de la capacidad del personal, procedimientos y equipo *ex situ*; iii) mejora de la capacitación del personal y los procedimientos *in situ*, y iv) el establecimiento de un modelo común de cuentas, un manual de inspecciones, normas uniformes sobre las inversiones en cartera y sistemas para una evaluación mejor y más rápida de la información relativa a la supervisión.

III. ASPECTOS ESPECIALES DEL PROGRAMA

A. Aspectos fiscales de las actividades iniciales del proceso productivo en el sector de los hidrocarburos

- 3.1 En la carta de política de desarrollo, el gobierno ha manifestado que tiene la intención de establecer instrumentos legislativos, reglamentos e instrucciones sobre los contratos que puedan competir fiscalmente y en otros aspectos con los de los países vecinos.
- 3.2 El proyecto de ley sobre el sector de hidrocarburos trata de establecer un régimen fiscal competitivo, estable y equitativo que responderá también a las necesidades de Bolivia en esta materia. Dicho régimen incluye los impuestos descritos en la Ley 1606 que modificaba la Ley de Impuestos 843, los actuales cánones departamentales del 12,5% y un impuesto nacional móvil relacionado con el volumen o el valor de la producción o en función de un coeficiente de ingreso acumulado con respecto a los gastos acumulados (factor "R"). Estos tres aspectos permitirán al gobierno boliviano incrementar los ingresos procedentes del sector de hidrocarburos sin poner en peligro su competitividad en la región.

B. Estrategia de capitalización de YPFB y exportaciones de gas

- 3.3 La estrategia preliminar para la capitalización de YPFB, que es condición de un tramo flotante, ha sido presentada ya por las autoridades bolivianas y trata de apoyar los objetivos generales de la capitalización, con especial insistencia en los siguientes aspectos: a) crecimiento económico sustentable mediante la creación de un sector privado dinámico, con inversiones en productividad y eficiencia y crecimiento de la exportación; b) supresión de la participación gubernamental en la gestión de las empresas comerciales, y c) establecimiento de un proceso que sea sustentable e irreversible. Los objetivos del gobierno son atraer capital y tecnología, conservar a YPFB como fuente a largo plazo de ingresos fiscales, fomentar la competencia, ofrecer a la población boliviana mejores servicios de suministro de petróleo y gas, monetizar los recursos petroleros, utilizar prácticas ambientalmente racionales y hacer de Bolivia un importante abastecedor de gas natural en el Cono Sur.
- 3.4 En lo que se refiere a este último objetivo, la estrategia se propone concluir con éxito y poner en práctica el proyecto de gas natural con el Brasil, considerado por Bolivia como factor decisivo para atraer inversión extranjera orientada al desarrollo del sector de los hidrocarburos. La importancia de este proyecto se debe a las estructuras geológicas, que contienen hidrocarburos con gran contenido de gas, a la limitación de los mercados de exportación, el más significativo de los cuales podría ser el del Brasil, y al considerable volumen de gas que se abastecerá a este país; el

precio determinará el interés económico para los inversionistas extranjeros de emprender exploraciones en busca de gas y petróleo en Bolivia.

- 3.5 El gobierno boliviano ha presentado los elementos de su estrategia para la capitalización de YPFB con dos alternativas que difieren únicamente en lo que respecta a la integración o separación entre los sistemas de transmisión del gas y las compañías de exploración y producción. Las refinerías se capitalizarían como entidades independientes, los contratos de explotación todavía vigentes se traspasarían directamente al gobierno, los activos mercantiles se privatizarían y los activos residuales, como las operaciones de perforación, se agruparían en una empresa que sería privatizada posteriormente.
- 3.6 En las dos alternativas que se están considerando para la capitalización de YPFB, en los sistemas de transmisión del gas y en las actuales zonas de producción, los contratos y concesiones se aprobarán siempre que se atengan a las obligaciones contractuales negociadas con el Brasil.

C. Consideraciones ambientales

- 3.7 Las principales cuestiones que se consideran en el informe ambiental son las siguientes: i) coordinación del proceso de publicación de reglamentos con la Ley General del Medio Ambiente y con el calendario del programa de capitalización, y necesidad de examinar dichos reglamentos; ii) necesidad de llevar a cabo en forma oportuna auditorías ambientales en relación con todas las instalaciones que se incluirán en el programa, definiendo de antemano qué es contaminación acumulada y contaminación reciente y las correspondientes responsabilidades para las medidas de descontaminación; iii) necesidad de garantizar que los documentos de licitación para el programa de capitalización incluyan normas de emisión a las que se deban atener los nuevos propietarios; iv) estimación de los costos y probables fuentes de financiamiento para la purificación de los lugares más gravemente contaminados descubiertos por las auditorías ambientales, y v) costos sociales del proceso de capitalización, en particular en las zonas mineras.
- 3.8 Con el fin de preparar la evaluación ambiental del programa, el Banco contrató consultores que deberían ayudar en la preparación del informe ambiental y en la coordinación y preparación de los reglamentos ambientales más urgentes para los sectores que serán sometidos a capitalización, así como las medidas que se adoptarán con respecto a los efectos sociales de la operación. Los tres créditos de asistencia técnica de la AIF (programados para 1995; véanse los párrafos 4.15 al 4.25) tienen componentes ambientales en apoyo del programa del gobierno, sobre todo en los sectores de energía e hidrocarburos, como complemento del actual programa de fortalecimiento institucional ambiental (préstamo 929/SF-B0).

- 3.9 Con excepción del sector minero, todas las responsabilidades ambientales identificadas actualmente deberán ser asumidas por las compañías capitalizadas correspondientes. El gobierno continuará haciéndose cargo de las posibles responsabilidades no identificadas que puedan descubrirse en el futuro.

D. Los aspectos sociales en las regiones mineras

- 3.10 Durante los años recientes las regiones mineras bolivianas (occidente del país) se han visto afectadas por la caída de los precios de los minerales y por la constante operación ineficiente de las minas por parte de la COMIBOL. En el marco de los programas del gobierno que apoya el préstamo 628/OC-BO del Banco, se procedió al cierre de las minas ineficientes y se indemnizó a sus operarios. Lamentablemente, los programas anteriores no previeron la capacitación ni la creación de otras posibilidades de empleo. A medida que continúan empeorando las condiciones económicas en las regiones mineras, siguen sin surgir nuevas oportunidades de empleo, situación que se extiende a todo el país.
- 3.11 Los mineros desempleados han empleado diversos recursos para subsistir, entre ellos la explotación de minas abandonadas que se encuentran en condiciones muy precarias, y el uso no autorizado de mineral extraído de operaciones mineras de la COMIBOL que formarían parte de la capitalización del sector.
- 3.12 Se prevé que la transferencia de las operaciones de extracción y fundición al sector privado puede causar considerable perturbación social, si no se encaran esos problemas crónicos, comenzando por las áreas comprendidas por la capitalización.
- 3.13 Conforme a lo acordado con el gobierno y tal como se refleja en la carta de política de desarrollo, se formó un grupo de trabajo en el ámbito de la Secretaría Nacional de Minería (SNM) para dirigir la preparación de un Plan de Rehabilitación y Desarrollo Social de la región minera, y coordinar las acciones de diversos programas del gobierno con tal finalidad, que apoyará las actividades del programa de capitalización. Si bien se prevé que será necesario reasentar a pocos mineros, el Banco asegurará que el plan se ciña a todas las políticas pertinentes del BID y a sus pautas con respecto a los reasentamientos. Se prevé que el plan estará terminado dentro de los próximos nueve meses.
- 3.14 El Banco controlará la evolución del plan conforme al correspondiente calendario de actividades, como parte de la verificación del cumplimiento de las condiciones de la carta de política de desarrollo, como se indica en la matriz de políticas (Anexo 2, Parte A).
- 3.15 El Banco está preparando asistencia técnica adicional por un monto de US\$200.000 para ayudar al grupo de trabajo del Ministerio de Minas a establecer el plan de desarrollo económico y social en las

zonas mineras. En el Anexo 6 se ofrece una síntesis de los términos de referencia de la preparación del plan. Además se están examinando con las autoridades bolivianas y con posibles donantes y participantes en cofinanciamientos varias posibilidades de financiamiento para las inversiones y las actividades de capacitación con el fin de poner en marcha el plan, incluido un préstamo adicional, además de asistencia técnica.

E. Subprograma de cooperación técnica del BID

- 3.16 Uno de los factores más importantes que distingue el programa boliviano de otros programas de privatización es la distribución entre los adultos bolivianos de aproximadamente la mitad del valor del capital de las compañías capitalizadas. Para que este elemento sea eficaz es necesario llevar a cabo (con un costo de aproximadamente US\$16 millones - véase el Anexo 3) un censo y registro completo de la población boliviana adulta, ya que sólo el 35% de la población urbana y menos del 15% de la población rural están actualmente incluidos en el Registro Civil.
- 3.17 El Banco tiene intención de ofrecer una cooperación técnica de US\$12 millones, en paralelo con el préstamo sectorial, para financiar el 75% de este proyecto durante los tres próximos años. La mayoría de la actividad referente al registro de la población tendrá lugar en el primer año. En los dos años siguientes se establecerán una serie de datos completa y sistemas para el mantenimiento del registro civil (nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.) y elaborar las listas electorales.
- 3.18 Uno de los proyectos de asistencia técnica de la AIF (sector financiero, véase el párrafo 4.22) cofinanciará US\$2 millones del costo y el gobierno cubrirá el equivalente de US\$2 millones, principalmente en concepto de gastos de personal.
- 3.19 La ejecución de la cooperación técnica del Registro Único Nacional (RUN) se coordinará con una cooperación técnica que el Banco tiene previsto aprobar durante 1995 para la delimitación y demarcación de los límites provinciales y municipales del país, que será llevada a cabo por la Comisión interministerial de límites (COMLIT). En la Ley de Participación Popular se establece la reasignación del 20% de las rentas fiscales a las jurisdicciones en función de su número de habitantes, así como la delegación de la administración de otros servicios gubernamentales. Las actividades paralelas del RUN y la determinación de los límites por la COMLIT permitirán a Bolivia mejorar enormemente la eficiencia de sus registros electoral y civil y aplicar equitativamente el "Plan de Todos".

IV. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Ejecución

- 4.1 El principal responsable de la ejecución de la condicionalidad será el Ministerio de Capitalización, en coordinación con los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico. El desembolso se llevará a cabo por intermedio del Banco Central, utilizando los procedimientos habituales del Banco para los préstamos sectoriales.
- 4.2 Cada una de las seis empresas estatales que se van a capitalizar ha realizado actividades continuas y paralelas como preparativo a la capitalización. El actual calendario de capitalización está basado en el grado relativo de preparación de cada empresa en el momento actual, así como en la legislación requerida en cada caso. Las principales empresas, todas las cuales requieren la aprobación de un instrumento legislativo, se capitalizarán por este orden: ENDE, ENTEL y YPFB, tomando como base el programa del Congreso. Los ferrocarriles (ENFE), operaciones mineras (EMV) y la línea aérea (LAB) procederán en forma paralela, según se vayan preparando.

B. Aplicación de los requisitos de inversión

- 4.3 Las inversiones iniciales en cada compañía o bien estarán totalmente efectuadas en el momento de la adjudicación o estarán respaldadas por garantías bancarias. Las necesidades de inversión y ampliación para los inversionistas estratégicos en cada una de las compañías capitalizadas se especificarán en el respectivo contrato con cada inversionista estratégico. El nuevo SIRESE se encargará de supervisar el cumplimiento de los requisitos. Las compañías deberán inscribirse en los mercados de valores nacionales e internacionales y atenerse a los correspondientes requisitos de divulgación de información. La sanción máxima por el incumplimiento de los requisitos de ampliación consistiría en excluir de la compañía al socio estratégico.
- 4.4 Las tres primeras compañías que se capitalizarán se encuentran en el sector de la electricidad (ENDE). La inversión inicial en el sector eléctrico se habrá efectuado en su totalidad en el momento de la adjudicación. Cada una de las tres compañías creadas a partir de ENDE tiene requisitos específicos de inversión para aumentar la generación de energía expresada en KW de capacidad instalada, habiéndose impuesto además la condición de que al menos el 90% del capital adicional se invierta en capacidad instalada. Las compañías de distribución deberán ofrecer el servicio necesario y demostrar que han contratado a empresas productoras de al menos el 80% de su demanda prevista en los cinco años siguientes. Para determinar la demanda interna de energía en que se basará la mayor parte de los requisitos de inversión, el SIRESE publicará un cálculo anual de los aumentos de la demanda que se hayan producido

en el país. Se prevé que el sector privado competitivo pueda atender los aumentos de la demanda.

- 4.5 El Superintendente dispondrá de medios específicos para imponer dichas obligaciones, a saber: i) retención, en forma de cuenta en depósito, de las acciones del inversionista estratégico hasta el momento en que se hayan cumplido los requisitos de inversión; ii) fórmulas que se incluirán en el contrato con cada inversionista estratégico, en que se especifiquen los daños monetarios que se evaluarán en caso de incumplimiento o de retraso en el cumplimiento de los requisitos de inversión; iii) sustitución de la gestión de la compañía por personal del organismo regulador (SIRESE); iv) reducción del período de exclusividad de la compañía y, en último término, v) revocación del contrato con el inversionista estratégico. En el caso de que las compañías productoras no respondan a las necesidades de servicio del distribuidor, el Superintendente puede obligar a la compañía distribuidora a que obtenga la electricidad necesaria convocando una licitación pública internacional para la instalación de la capacidad necesaria.
- 4.6 En lo que respecta a ENTEL, la compañía del sector de las telecomunicaciones, se exigirá que el inversionista estratégico haya efectuado la inversión en capital social en el momento de la adjudicación. Los futuros requisitos de inversión de la compañía exigen la ampliación del servicio telefónico local y rural, así como de las redes celulares en nueve ciudades y de los teléfonos públicos en todo el país. Para imponer el cumplimiento de los requisitos de inversión se ha establecido una serie de sanciones progresivas, que culminan con la revocación de la concesión y la pérdida de la inversión en capital social efectuada por el inversionista estratégico.

C. Calendario de desembolsos

- 4.7 El primer tramo del préstamo que podría desembolsarse una vez aprobado por el Directorio representa el 20% del total, es decir, US\$14 millones. Habrá tres tramos adicionales "flotantes", de carácter sectorial y no secuencial, sin condiciones comunes para todos ellos, salvo el mantenimiento de un marco macroeconómico sólido y el cumplimiento de lo dispuesto en la carta de política de desarrollo. Las condiciones establecidas para estos tramos deberán cumplirse a lo largo de 1996; para el total cumplimiento de las condiciones establecidas se propone aplazar el desembolso final hasta que hayan transcurrido dos años de la entrada en vigor del contrato. Estos tramos flotantes son los siguientes: capitalización general, US\$14 millones; hidrocarburos, US\$28 millones y aspectos jurídicos y financieros, US\$14 millones. Todos los reglamentos específicos requeridos para la elegibilidad de los tramos fueron definidos en los proyectos de contratos y acordados con el gobierno.

D. Primer tramo: Condiciones previas a la aprobación por el Directorio

4.8 Se han cumplido todas las condiciones para la presentación al Directorio. El acuerdo sobre el calendario y financiamiento del programa de capitalización era una condición de las negociaciones que se alcanzó (previo debate durante la misión conjunta BID/AIF en octubre de 1994) en noviembre de 1994 en el marco de las conversaciones del FMI/AIF con el gobierno en relación con el documento sobre parámetros de política económica para 1994-1997. Entre las condiciones para la presentación al Directorio (entrega del primer tramo) figuran el mantenimiento de políticas macroeconómicas acertadas que estén en consonancia con los objetivos del programa y respondan a los programas y objetivos de política descritos en la carta de política de desarrollo (Anexo 1). Otras condiciones para la presentación al Directorio, que también se han cumplido, son las siguientes:

- a. Programa de capitalización: i) Aprobación por el Congreso de la Ley de Capitalización; ii) establecimiento de una estructura para coordinar y dirigir el proceso de capitalización, y iii) acuerdo sobre una estrategia para transferir parcialmente al pueblo boliviano la propiedad de empresas públicas de gran importancia.
- b. Establecimiento de un marco regulador general: Aprobación por el Congreso de la Ley sobre el SIRESE.
- c. Régimen fiscal: Aprobación por el Congreso de una enmienda (Ley 1606) de la Ley sobre Impuestos 843 con el fin de establecer un nuevo régimen fiscal para las sociedades.
- d. Reestructuración y capitalización del sector de las telecomunicaciones: i) Presentación al Congreso de una nueva ley de telecomunicaciones, y ii) acuerdo sobre un plan de recapitalización del servicio local y de capitalización de ENTEL.
- e. Reestructuración y capitalización del sector de la electricidad: i) Aprobación por el congreso de una ley de electricidad; ii) contratación de asesores financieros/funcionarios bancarios especializados en inversión con el fin de preparar a ENDE para la capitalización, y iii) acuerdo sobre una estrategia para la capitalización de ENDE.
- f. Reestructuración y capitalización del sector de la minería y metalurgia: i) Acuerdo sobre un proyecto de enmienda de la Ley de Minería para hacer este sector más atractivo a los inversionistas a largo plazo; ii) acuerdo sobre una estrategia para la capitalización de la EMV y otras empresas mineras, y iii) contratación de asesores financieros/funcionarios bancarios especializados en inversión con el fin de preparar a la EMV y a otras empresas mineras para la capitalización.

- g. Reestructuración y capitalización del sector de hidrocarburos:
i) Acuerdo sobre un proyecto de ley de hidrocarburos; ii) aprobación por el Congreso de una enmienda a la Ley sobre Impuestos 843 con el fin de establecer un nuevo régimen fiscal para los combustibles líquidos como medio de restaurar la transparencia de los precios y estimular la competencia en las operaciones ulteriores del proceso productivo, y iii) acuerdo sobre los principios para la capitalización de YPF.
- h. Resolución internacional de diferencias: Ratificación por el Congreso de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.

E. Tramos flotantes y condiciones de aprobación

- 4.9 La entrega de cualquiera de los tramos flotantes del préstamo propuesto estaría sujeta a estas dos condiciones: mantenimiento de un marco macroeconómico sólido en conformidad con los objetivos del programa; progreso adecuado en el desarrollo y la ejecución del Plan de Rehabilitación y Desarrollo Social de la región minera; y cumplimiento de los programas y objetivos de política descritos en la carta de política de desarrollo (Anexo 1). Se exigirá también, en el momento de entrega del tramo, el cumplimiento de las pertinentes condiciones de auditoría sobre los desembolsos previos. Además, la entrega de cada uno de los tramos flotantes estará sometida al cumplimiento de las condiciones respectivas, tal como se resumen a continuación y se presentan en el Anexo 2.

1. Tramo flotante: Capitalización general

- 4.10 El tramo de capitalización general prevé el cumplimiento de las siguientes condiciones específicas:
- a. Publicación de reglamentos sobre los procedimientos relativos a las licitaciones públicas en relación con las compañías que se van a capitalizar en el marco de la Ley de Capitalización.
 - b. Promulgación de reglamentos básicos en relación con la Ley sobre el SIRESE y nombramiento del Superintendente General.
 - c. Promulgación de reglamentos básicos para aplicar los nuevos sistemas de impuestos sobre las sociedades establecidos en la enmienda a la Ley sobre Impuestos 843.
 - d. Aprobación por el Congreso de la nueva ley de telecomunicaciones. Promulgación de reglamentos básicos para la aplicación de la ley de telecomunicaciones y, en particular, nuevas tarifas y estructuras de interconexión (párrafos 2.13(a) y 2.13(b)).

- e. El gobierno deberá solicitar ofertas para la capitalización de ENTEL (párrafo 2.13(c)).
- f. Establecimiento y dotación de personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro del SIRESE para la adjudicación y supervisión de las concesiones y el cumplimiento de los reglamentos (párrafo 2.13(d)).
- g. Promulgación de reglamentos básicos para la aplicación de la ley de electricidad (párrafo 2.17).
- h. Establecimiento y dotación de personal de la Superintendencia de Electricidad dentro del SIRESE para la adjudicación y supervisión de las concesiones y del cumplimiento de los reglamentos (párrafo 2.17).
- i. Aprobación por el Congreso de una enmienda a la Ley sobre Minas con el fin de aumentar el atractivo del sector para los inversionistas a largo plazo (párrafo 2.21).

2. Tramo flotante: Sector de hidrocarburos

4.11 Para el desembolso del tramo relativo a los hidrocarburos el gobierno deberá cumplir las siguientes condiciones:

- a. Aprobación por el Congreso de una nueva ley de hidrocarburos y promulgación de reglamentos básicos para la aplicación de esta ley (párrafos 2.10(a) y 2.10(b)).
- b. Promulgación de reglamentos básicos para la aplicación del nuevo régimen fiscal de los productos petroleros establecido en la enmienda de la Ley sobre Impuestos 843 (párrafo 2.10(c)).
- c. Establecimiento y dotación de personal de organismos reguladores y de otra índole en el sector de hidrocarburos para la adjudicación y supervisión de las concesiones y del cumplimiento de los reglamentos (párrafo 2.10(d)).
- d. Acuerdo sobre una estrategia para la capitalización de YPFB (párrafo 2.10(e)).
- e. Publicación de documentos de condiciones para la capitalización de al menos el 30% del valor contable de YPFB (excluidas las partes de dicha compañía que se van a privatizar (párrafo 2.10)).

3. Tramo flotante: Sector financiero/jurídico

4.12 Para el desembolso del tramo correspondiente al sector financiero y jurídico se requerirán las siguientes condiciones:

- a. Aprobación de la Ley de Valores y promulgación de los reglamentos básicos (párrafo 2.47(a)).

- b. Fortalecimiento de la Superintendencia de Valores, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y reglamentos sobre valores (párrafo 2.47(b)).
 - c. El establecimiento de cuentas no contributivas para la distribución de acciones como consecuencia de la capitalización. Promulgación de los reglamentos básicos (párrafo 2.52).
 - d. Establecimiento y dotación de personal de un organismo regulador para la supervisión del cumplimiento de los reglamentos de pensiones (párrafo 2.52).
 - e. Aprobación de la Ley de Seguros y de los reglamentos básicos (párrafo 2.54(a)).
 - f. Fortalecimiento de la Superintendencia de Seguros, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y reglamentos de seguros (párrafo 2.54(b)).
- F. Reembolso de los gastos contraídos antes de la aprobación del préstamo
- 4.13 Hasta un total de US\$14 millones de los fondos del préstamo podrán utilizarse para compensar a Bolivia por el costo de las importaciones adquiridas en los seis meses anteriores a la firma del contrato de préstamo.
- G. Procedimientos de adquisición
- 4.14 En la Política GP-116-4 del Banco se exige que las adquisiciones públicas y privadas por valor superior a US\$5 millones se hagan mediante licitación pública. Cuando se trate de cuantías menores, la adquisición por el sector público deberá efectuarse en conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación nacional siempre que dicha legislación no esté en contradicción con la política de adquisiciones del Banco. Este ha examinado dichos procedimientos y los ha considerado aceptables.
- H. Registros, auditoría y control
- 4.15 Para cada desembolso el prestatario presentará documentos que indiquen los artículos importados durante cada período, el país de origen y la fecha y valor de la transacción, de manera que el Banco pueda reembolsar los gastos. Para la contabilidad y control de dichas transacciones, el prestatario abrirá una cuenta especial en el Banco Central, mantendrá registros contables del programa, preparará y entregará la solicitud de desembolso, presentará una relación de las transacciones que reúnan los requisitos previstos y conservará todos los documentos justificantes.

I. Apoyo a la ejecución: programas de asistencia técnica de la AIF

- 4.16 La AIF acompaña el programa de capitalización con tres operaciones de asistencia técnica relacionadas específicamente con el sector financiero, el de la electricidad y el de los hidrocarburos, que apoyarán y facilitarán la aplicación de muchas de las reformas emprendidas.

1. Asistencia técnica de la AIF al sector de la electricidad

- 4.17 El proyecto de asistencia técnica al sector de la electricidad, por valor aproximado de US\$12,6 millones será financiado por un crédito de la AIF por un equivalente de US\$7,9 millones, y el resto será cofinanciado con fondos japoneses en concepto de donación y la contribución del gobierno local. El proyecto ayudará a realizar la reforma del sector eléctrico, la capitalización de los servicios públicos de propiedad estatal y el fortalecimiento de las instituciones reguladoras y ambientales con el fin de garantizar una competencia eficiente y la participación privada en el sector. El proyecto apoyará: a) la preparación de los reglamentos necesarios para aplicar las reformas de la nueva ley de electricidad y el establecimiento y desarrollo de la competencia de los organismos reguladores ya creados en virtud de la nueva ley; b) las inversiones necesarias para mantener la integridad del servicio eléctrico, así como los costos de reorganización y racionalización que se contraerán durante el período de transición y c) la capitalización de los servicios eléctricos de propiedad estatal mediante la: i) evaluación de las opciones y formulación de una estrategia final de capitalización, y ii) la preparación, licitación y capitalización y privatización final de los servicios públicos.
- 4.18 El proyecto constará de los siguientes elementos: a) preparación y ejecución de planes de acción por parte de la unidad de ejecución del proyecto, que contará con profesionales nacionales de rango superior respaldados por empresas consultoras con el fin de: i) redactar y ayudar a aprobar los reglamentos correspondientes a la ley de electricidad; ii) llevar a cabo las reformas jurídicas y reglamentarias del sector de la electricidad - creación de los organismos reguladores estipulados en la ley y capacitación del personal de los organismos reguladores en la formulación de políticas, actividades reguladoras, planificación, fijación de precios y establecimiento de reglamentos ambientales y iii) evaluar las responsabilidades del sector en general y de los servicios públicos estatales en materia de medio ambiente y seguridad y elaborar normas sectoriales de seguridad y protección ambiental; b) realización de las acciones e inversiones fundamentales durante el período de transición, necesarias para mantener la fiabilidad y calidad del servicio eléctrico, y del programa de reorganización de los servicios públicos antes de su capitalización, y c) puesta en práctica de la capitalización de los servicios públicos ayudando a: i) evaluar las diversas opciones y a elaborar una estrategia para

la desagregación, auditoría, evaluación y preparación de los servicios públicos en orden a su capitalización y privatización con asistencia de un consultor de gestión, y ii) promover y efectuar la privatización de los servicios eléctricos con asistencia de un oficial bancario especializado en inversiones.

2. Asistencia técnica de la AIF al sector de hidrocarburos

- 4.19 Este proyecto, de aproximadamente US\$13,8 millones (equivalente de US\$11 millones de la AIF), es el que se encuentra en una fase más avanzada de tramitación entre los tres préstamos de asistencia técnica. Sus objetivos son ayudar al gobierno en el análisis, planificación, diseño y ejecución de: i) su programa de reforma para el sector de hidrocarburos, incluido el fortalecimiento de las instituciones que se encargarán de supervisar y regular el sector, y ii) la capitalización de YPFB. El proyecto se basa en las conclusiones de un diagnóstico realizado en febrero/marzo de 1993, así como en varios estudios posteriores llevados a cabo durante la preparación del proyecto. Según las previsiones, éste se terminará en unos cuatro años.
- 4.20 El proyecto propuesto incluirá los tres componentes siguientes: i) estudios analíticos y actividades preliminares en relación con el diseño de la estructura jurídica y reguladora general para la reforma y desarrollo futuro del sector; ii) estudios analíticos y actividades preliminares relativos a la precapitalización de YPFB y preparativos para la capitalización de las empresas mixtas, y iii) fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría Nacional de Energía para la realización de la reforma y la supervisión del sector.
- 4.21 El último componente ofrecerá apoyo a la DGH en relación con los siguientes aspectos: actividades preparatorias encaminadas al diseño y establecimiento de un nuevo ente financieramente independiente, encargado de la formulación de políticas de exploración y producción, la promoción de la inversión y las negociaciones con las compañías petroleras y de gas de las concesiones y otros contratos; administración de una unidad de banco de datos; aplicación de las normas y reglamentos técnicos y de seguridad; supervisión de las concesiones y contratos de operaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas y de los interlocutores estratégicos con respecto a las inversiones mínimas y las obligaciones de capacitación. Incluirá el diseño de estructuras organizativas adecuadas, en particular la dotación de personal y las necesidades iniciales de: i) la unidad encargada de la gestión del banco de datos; ii) la unidad de medio ambiente que se establecerá con el fin de supervisar las actividades del sector y exigir el cumplimiento de los reglamentos ambientales, y iii) la Superintendencia de Hidrocarburos que deberá establecerse para garantizar el cumplimiento de la Ley sobre el SIRESE, ya aprobada, y la futura ley de hidrocarburos, así como los respectivos reglamentos para la aplicación de las dos leyes. Además, se pondrá en

marcha una campaña de promoción de la exploración y producción para atraer inversiones extranjeras privadas al sector; finalmente, se ofrecerán actividades de capacitación al personal de la Secretaría Nacional de Energía sobre la dotación de personal de las unidades antes mencionadas y la aplicación de los reglamentos técnicos, ambientales y de seguridad, la realización de campañas de promoción, la negociación y administración de los contratos y, en general, la supervisión de todas las actividades del sector. El crédito financiará la adquisición de equipo de oficina y de material, computadoras y programas informáticos.

3. Asistencia técnica de la AIF al sector financiero

- 4.22 La asistencia técnica al sector financiero, por un monto aproximado de US\$13 millones, tiene como finalidad prestar ayuda en la reforma de las pensiones, el diseño y ejecución del sistema de distribución de la capitalización, reglamentación de los valores, regulación y supervisión de los seguros, superintendencia de los bancos y administración de los créditos en el Ministerio de Hacienda.
- 4.23 En lo relativo a las pensiones, la asistencia técnica se orientaría a los siguientes aspectos: i) establecimiento de la estructura reguladora del sistema de pensión de capitalización individual y las cuentas de distribución diferida; ii) ayuda en la formulación de normas de regulación; iii) diseño de la informatización, procedimientos reguladores y dotación de personal de la Superintendencia de Pensiones dentro del SIRESE, y iv) informatización del Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA). En cuanto a la distribución, el crédito permitiría progresar en el diseño del sistema, acelerar el procedimiento de registro, organizar una campaña de información pública y adquirir equipo de oficina.
- 4.24 El componente de valores se destinaría al fortalecimiento de la legislación, examen y mejora de las directivas de la Superintendencia de Valores, reestructuración institucional de la CNV, perfeccionamiento de los procedimientos de supervisión e inspección, desarrollo y promoción del mercado, sistemas de información y capacitación.
- 4.25 Se reforzará la reglamentación y supervisión del sector de seguros mediante una evaluación institucional de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros (SNSR), la intensificación del análisis *ex situ* y de la inspección, establecimiento de sistemas de control de los reaseguros, evaluación de los requisitos de capital, campaña de sensibilización de la opinión pública, fortalecimiento de la concesión de licencias locales y capacitación en la escuela de técnicas de seguros.

- 4.26 La Superintendencia de Bancos recibiría apoyo en relación con el perfeccionamiento de los recursos humanos, las enmiendas a la ley sobre actividades bancarias, la formulación de normas, la actualización de las directrices operacionales y el fortalecimiento de los sistemas de información. Además, se suministraría equipo de oficina para la Unidad de Proyecto del Ministerio de Hacienda.

V. VIABILIDAD Y RIESGOS DEL PROGRAMA

A. Justificación

- 5.1 Hasta ahora, el programa de reforma del gobierno ha conseguido en general orientar la economía en un sentido positivo. Los recientes estudios económicos y sectoriales han confirmado la conclusión de que para mantener el crecimiento económico en Bolivia se requiere una "segunda generación" de reformas estructurales. Dado que las reformas emprendidas hasta ahora no han resuelto el problema de las grandes e ineficientes empresas públicas monopolísticas, la segunda fase del ajuste tendría como objetivo: i) aumentar la eficiencia de las empresas que intervienen en sectores productivos trascendentales, en especial transfiriendo la propiedad al sector privado; ii) atraer la inversión privada, y iii) liberar recursos públicos para inversiones en infraestructura básica y en el sector social. Un elemento esencial de este programa es un conjunto de reformas encaminadas a mejorar la capacidad del gobierno para adoptar políticas y regular en forma adecuada. Hace ya mucho tiempo que se reconoce la necesidad de estas reformas y el actual gobierno está totalmente decidido a ponerlas en práctica. El préstamo propuesto ofrecería apoyo financiero para la ejecución del programa de reforma.
- 5.2 La operación propuesta ha sido estudiada por varios equipos sectoriales especializados de la AIF y por el equipo de proyecto del Banco. La operación de ajuste apoyará el establecimiento de un entorno propicio que permita conseguir los siguientes objetivos: i) atraer la inversión privada conforme el gobierno se vaya retirando de estos sectores; ii) convertir esas inversiones en estímulo eficiente del crecimiento y iii) promover la competencia siempre que sea posible. La Administración recomienda la aprobación de la operación propuesta, en cuanto que puede representar una ayuda necesaria e idónea para las reformas que debe llevar a cabo el gobierno boliviano.

B. Repercusión económica y beneficios

1. Repercusión en la pobreza y en los ingresos

- 5.3 Aunque no se trate de una inversión orientada específicamente a luchar contra la pobreza, se espera que el programa respaldado por la operación propuesta permita un crecimiento económico sostenido y, por lo tanto, influya de forma positiva en el ingreso real per cápita de todos los bolivianos. Además, uno de los objetivos primarios del crédito propuesto es apoyar la reorientación de las funciones del Estado, de manera que vaya renunciando a la inversión y propiedad directa en el sector productivo. En consecuencia, habrá mayor disponibilidad de recursos estatales para los servicios públicos, incluida la prestación de servicios sociales esenciales

en favor de los pobres. Además, el propio programa de capitalización implica una redistribución masiva de ingreso basada en la transferencia a todos los ciudadanos adultos bolivianos de la parte de las grandes empresas públicas que hasta ahora es propiedad del Estado. Por otra parte, el producto de la privatización de las pequeñas y medianas empresas (US\$12 millones, hasta la fecha) se está destinando a proyectos sociales. Finalmente, algunas reformas jurídicas respaldadas por el programa redundarán en beneficio directo de las pequeñas empresas. Por ejemplo, la promulgación de la ley sobre transacciones garantizadas alentará la expansión del crédito a los pequeños empresarios mediante préstamos basados en los bienes muebles.

2. Efecto presupuestario

- 5.4 Las políticas respaldadas por este crédito mejorarán a largo plazo la posición fiscal del sector público, ya que sostendrán el crecimiento y ampliarán la base imponible. No obstante, a corto plazo, el programa de reforma puede tener los siguientes efectos negativos: i) reducción de los ingresos en la medida en que las transferencias directas de las empresas públicas al Tesoro sean sustituidas por precios desreglamentados y nuevos regímenes fiscales concebidos con la finalidad de garantizar la competencia en todos los sectores; ii) costos de las indemnizaciones por despido, obligaciones no financiadas y parte de la deuda externa de las empresas sometidas a proceso de capitalización, y iii) costos de las transacciones y de la asistencia técnica asociados a la aplicación de las medidas de reforma.
- 5.5 El costo total de estas reformas se ha estimado en, aproximadamente, el 2,8% del PIB anual durante los tres próximos años. Si bien el préstamo del Banco y el crédito de la AIF cubrirán en parte los efectos inmediatos de estas reformas, se requerirá financiamiento adicional, tanto interno como externo. Para financiar el saldo restante, el gobierno traspasará a los nuevos inversionistas parte de los costos a corto plazo - servicio de la deuda y, en la medida de lo posible, indemnizaciones por despido. Además, se prevé que la enmienda de la Ley sobre Impuestos aprobada en diciembre de 1994 elevará los ingresos mediante medidas como el aumento del impuesto sobre la cifra de negocios y la introducción del impuesto sobre las utilidades y sobre los productos derivados del petróleo. Se prevé que la combinación de estas medidas fiscales, el préstamo del Banco, el crédito de la AIF y otros recursos externos comprometidos permitirán financiar el déficit. Durante las negociaciones relativas al documento sobre parámetros de política económica, se llegó a un acuerdo entre el gobierno, la AIF y el FMI sobre el calendario y el financiamiento de los costos del programa de capitalización. Por su parte, en la carta de política de desarrollo, el gobierno se ha comprometido a adoptar todas las medidas fiscales necesarias para conseguir que el programa de reforma se pueda aplicar respetando el programa fiscal anual.

- 5.6 Los beneficios económicos de las políticas respaldadas por este crédito son considerables. La reforma global y el establecimiento de un marco regulador adecuado para los hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y minería alentarán la transferencia de tecnología e inversión privada. Estas reformas – en especial, el desarrollo acelerado de los recursos de hidrocarburos de Bolivia – deberán influir de forma notable en el crecimiento del PIB. Se prevé también que liberen una parte importante del presupuesto público anual y, en consecuencia, se pueda reducir el déficit actual e invertir en capital humano e infraestructura básica. Las reformas jurídicas encaminadas a promover métodos eficientes de resolución de diferencias, como la ratificación de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, tengan efectos positivos en la inversión privada, en general.

C. Riesgos principales de la operación

- 5.7 A pesar de las medidas que se están adoptando para la evaluación ambiental de esta operación, sobre todo en el sector minero, los problemas sociales relacionados la creación de fuentes de empleo alternativas para los mineros independientes y los miembros de las cooperativas, si no se resuelven debidamente, podrían provocar nuevos riesgos y retrasos en el proceso de capitalización. En el contexto de la preparación ambiental del programa, el Banco ha suministrado consultores para determinar el alcance del Plan de Rehabilitación y Desarrollo Social de las zonas mineras. Actualmente el Banco está tramitando una cooperación técnica por valor de US\$200.000 para contratar consultores que puedan ayudar al grupo de trabajo establecido en la Secretaría de Minería a elaborar el plan, y continuará estudiando opciones disponibles para ayudar al gobierno en la ejecución del programa.
- 5.8 Además, aunque las actividades previstas para cada sector incluyen disposiciones oportunas para poner remedio a la situación actual, la ausencia de normas claras y precisas sobre emisiones ambientales en los sectores que se van a capitalizar puede hacer que los licitantes se abstengan de intervenir por temor a las normas provisionales, a las incertidumbre en la evaluación de los costos ocasionados por el cumplimiento de los reglamentos y al retraso en el proceso de licitación. Además, si no se identifican debidamente, antes del proceso de licitación, las responsabilidades de la contaminación, acumulada o reciente, de las instalaciones que se van a capitalizar, es posible que los resultados no respondan a las expectativas.
- 5.9 La crisis financiera de América Latina, que comenzó en diciembre de 1994, ha limitado los flujos normales de capital privado hacia Bolivia. La privatización prevista (por medio de una oferta pública internacional de acciones) de la compañía eléctrica de la ciudad de Cochabamba (ELFEC) se anuló y sustituyó por una venta

directamente negociada, pero el programa principal de capitalización deberá continuar en la forma prevista. Se prevé que los precios de oferta de los inversionistas estratégicos por las compañías capitalizadas puedan ser algo inferiores a los que se habrían conseguido hace un año. No obstante, la magnitud de la reducción es tan pequeña que no parece que justifique un retraso en el proceso de capitalización. Los beneficios de la aplicación inmediata del programa deberán compensar el aumento que podría conseguirse en las ofertas por parte de los inversionistas estratégicos retrasando el proceso.

- 5.10 El principal riesgo es que las partes interesadas puedan tratar de trastocar el contenido y calendario del programa de reforma si consideran que van a salir perjudicadas. En segundo lugar, si la legislación necesaria se debilita notablemente antes de su aprobación por el Congreso, el sector privado continuará resistiéndose a aportar recursos para la inversión. Finalmente, la operación implica una compleja serie de reformas legislativas y normativas que deben ordenarse con sumo cuidado para conseguir el resultado apetecido.
- 5.11 Otro riesgo es la escasa capacidad de ejecución, que se intenta mitigar con varias operaciones de asistencia técnica del BID y de la AIF. Los logros conseguidos hasta ahora y las condiciones iniciales tienen como objetivo reducir el peligro de fracaso; no obstante, el incumplimiento en un solo ámbito podría imposibilitar el desembolso de los tramos del crédito. La propuesta de dividir el segundo tramo en tres tramos flotantes que se desembolsarán en el momento en que se hayan cumplido sus condiciones específicas tiene como objetivo evitar en parte esos riesgos e impedir que el retraso en un determinado sector provoque la paralización de todo el programa.

BOLIVIA

CRÉDITO PARA FINES DE AJUSTE DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN

MATRIZ DE POLÍTICA DE DESARROLLO

27 de marzo de 1995

Sr. Lewis Preston,
Presidente de la
Asociación Internacional de Fomento,
1818 H Street NW,
Washington, DC 20433
EE.UU.

Sr. Enrique Iglesias
Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue NW,
Washington, DC 20577
EE.UU.

De nuestra consideración:

1. Por el presente medio el gobierno de Bolivia solicita el otorgamiento de un crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de respaldar la ejecución en curso de su programa de reforma estructural. En las etapas anteriores del programa se ha dado inicio al proceso de reforma de las empresas públicas, con inclusión de la privatización de algunas pequeñas y medianas, el reestablecimiento de la integridad del sistema bancario y la creación de mercados de capital. El principal objetivo de esta operación es respaldar la capitalización de varias empresas públicas importantes en el marco del programa descrito en el denominado Plan de Todos del gobierno. Además, con la operación se seguiría eliminando restricciones al desarrollo del sector privado mediante el fortalecimiento del marco reglamentario y el aumento de la eficiencia de los mercados financieros. Al mismo tiempo, se fortalecería a los organismos públicos encargados de la formulación y ejecución de las políticas a fin de asegurar que el programa pueda llevarse a cabo de manera oportuna y eficiente.

2. La asistencia solicitada se necesita para financiar importaciones que permitirían liberar fondos de contrapartida que se utilizarían para financiar parcialmente los costos del ajuste relacionados con el programa

de reforma propuesto. Estos comprenden, sobre todo: i) costos de indemnizaciones por despido, pago de pensiones financiadas con ingresos corrientes, obligaciones ambientales y algunas obligaciones de deuda de las empresas que vaya a capitalizarse; ii) compensación de la insuficiencia de ingresos a corto plazo en momentos en que las transferencias directas del gobierno de las principales empresas públicas son reemplazadas por un sistema impositivo; iii) costos de asistencia técnica vinculados con la ejecución del programa de reforma descrito en la presente matriz, y iv) costos incrementales vinculados al programa de reforma de pensiones en que pueda incurrirse durante la vigencia de este programa.

I. EL PROGRAMA DE REFORMA MACROECONÓMICA

3. A partir de 1985, Bolivia ha venido aplicando un programa económico de amplio alcance destinado a restablecer la estabilidad de precios y proceder a la reforma estructural de la economía a fin de lograr un crecimiento sustentable. El programa recibió el respaldo de acuerdos del servicio financiero reforzado de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de créditos de ajuste y asistencia de distinta índole de la Asociación Internacional de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y donantes bilaterales. La estabilidad macroeconómica aumentó con el programa. Si bien los efectos de éste en el crecimiento económico no fueron tan notables — el crecimiento medio del PIB real fue de 2,7% en 1987-1989 — debido, en parte, a que la presencia de un sector público grande e ineficiente en los principales sectores de la economía limitaba el acceso del sector privado y de sus inversiones, a partir de 1990 el crecimiento del PIB se aceleró, alcanzó un promedio de 4% y el PIB per cápita registró aumentos considerables. El gobierno sigue firmemente empeñado en la aplicación del programa de reforma estructural y pretende acelerarla a fin de seguir eliminando restricciones a la inversión privada.

4. Las bases del programa para el período 1994-1997 constan en el documento de parámetros de política económica preparado por el gobierno con la colaboración del personal del FMI y la AIF en octubre de 1994. El programa para 1994-1997 tiene por objeto un crecimiento medio anual del PIB real de por lo menos 4,5%, la reducción de la inflación al nivel que se registra en los países industriales y un constante avance hacia la viabilidad de la balanza de pagos. El programa también tiene por componentes el aumento de la eficiencia del sector público, el desarrollo de capital humano, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del equilibrio ecológico del país. El gobierno seguirá respaldando las principales políticas para lograr estos objetivos, incluidos: i) el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica mediante una gestión fiscal y monetaria prudente; ii) el mantenimiento de políticas de precios de mercado, incluidos el tipo de cambio y las tasas de interés; iii) la eliminación de los obstáculos a la entrada en los principales sectores

económicos; iv) la consolidación del programa de reforma estructural iniciado en 1985, incluida la aceleración de la reforma de las empresas públicas y los esfuerzos de fomento del sector privado; v) la ampliación de la infraestructura económica básica y el suministro de otros bienes por el Estado, y vi) el diseño de programas sociales bien orientados con miras a aumentar el suministro de servicios a los grupos más pobres de Bolivia.

5. La culminación de este programa en la forma debida dependerá en gran medida de la adecuada puesta en práctica del programa de capitalización. Éste se aplicará en el contexto de una gestión financiera prudente, y se complementará con un marco legislativo y reglamentario que promueva la inversión extranjera y nacional. En estas circunstancias, las reformas respaldadas por la operación de ajuste propuesta son vitales para sostener el crecimiento.

6. Al sostenerse el crecimiento y ampliarse la base impositiva, con estas reformas mejorará la posición fiscal del sector público a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, el programa de reforma tiene los siguientes efectos fiscales adversos, a saber: i) la falta de ingresos, por cuanto las transferencias directas de las empresas públicas al Tesoro son reemplazadas por la liberalización de precios y un nuevo régimen tributario destinado a asegurar la competencia en todos los sectores; ii) el costo de las indemnizaciones por despido, obligaciones con cargo a ingresos corrientes (por ejemplo, las correspondientes a pensiones) y parte de la deuda externa de las empresas que se capitalizan, y iii) los costos de las transacciones y los de asistencia técnica vinculados con la aplicación de este programa de reforma.

7. Se estima que el costo total de estas reformas representa aproximadamente el 2,8% del PIB anual en los próximos tres años. En el curso de las negociaciones del documento de parámetros de política económica, llegamos a un acuerdo con la AIF y el FMI acerca de la oportunidad y financiación de los costos del programa de capitalización. A fin de minimizar los costos tanto como sea posible, el gobierno traspasará a los nuevos inversionistas parte de los costos a corto plazo - servicio de la deuda y, en la medida de lo posible, las indemnizaciones por despido. El gobierno adoptará todas las medidas fiscales necesarias para asegurar que el programa de reforma, sobre todo del régimen de hidrocarburos y del sistema de pensiones, pueda aplicarse dentro del programa fiscal anual. Además, gracias a la modificación de la ley tributaria sancionada en diciembre de 1994, aumentarán los ingresos debido al aumento del impuesto a las transacciones y a la introducción de un impuesto sobre la renta de las sociedades y un impuesto indirecto sobre los productos derivados del petróleo.

8. Se prevé que con este programa aumentará la participación del sector privado en los principales sectores de la economía y la capacidad del gobierno para fijar políticas y reglamentaciones. Dicho programa

consistirá en reestructurar y capitalizar a los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería y metalurgia, y transporte, lo que tendrá repercusiones cruciales en el aumento de los ingresos, el empleo y el ingreso fiscal. En diciembre de 1994, el Congreso de Bolivia sancionó una modificación de la ley tributaria, por la que se reformó el régimen tributario con miras a crear un medio impositivo uniforme y estable, aplicable también a las principales empresas públicas que se capitalizarán. El texto modificado de la ley tributaria elimina los regímenes especiales vigentes — excepto el de cánones — para los sectores de hidrocarburos, electricidad y minería. Se reemplazó el impuesto al patrimonio neto de las empresas por un impuesto uniforme a la renta de las sociedades, del orden del 25%, cuya base imponible es más amplia y comprende a las actividades profesionales independientes y a la mayoría de los demás ingresos no salariales. Se intensificarán las medidas actuales encaminadas a aumentar la eficiencia de la administración tributaria con la asistencia técnica del FMI y el BID. La modificación de la ley será objeto de reglamentación en las siguientes esferas: i) el nivel de los impuestos indirectos sobre los productos derivados del petróleo; ii) las deducciones contempladas en el Artículo 47 (2) de la ley, a los fines del impuesto a la renta de las sociedades, y iii) el método de recaudación de este impuesto.

9. A fin de reducir más las funciones del Estado y aumentar su eficiencia, se realizará una reforma del sistema de fondos de pensiones. Con objeto de complementar la reforma de los fondos de pensiones y desarrollar los mercados financieros, formularemos un marco jurídico para los mercados de valores e introduciremos reformas en el sector de seguros. Para lograr mayor eficiencia en la gestión de la política monetaria y asegurar la estabilidad del sistema financiero, se procederá a la reforma del Banco Central. A fin de eliminar los obstáculos a la entrada y crear un clima más propicio para la ampliación eficiente del sector privado, también comenzaremos a modificar los sistemas jurídicos civil y comercial.

II. CAPITALIZACIÓN Y REFORMA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El programa de capitalización

10. El programa oficial de capitalización es una iniciativa audaz, y el elemento central del programa de reforma del gobierno. La Ley de Capitalización, aprobada por el Congreso en marzo de 1994, autoriza la

capitalización de cinco empresas públicas 1/. En ella se establece que el gobierno procederá a: i) transferir el control de la administración y hasta el 50% de la propiedad de las nuevas empresas privadas resultantes de estas empresas públicas a inversionistas estratégicos; ii) exigir que los inversionistas privados no compren los activos existentes, sino que inviertan en la propia empresa, con lo que aumentará el capital de ésta en proporción al precio de compra de las nuevas acciones y se dotará de liquidez a la empresa para financiar nuevas inversiones para su ampliación, y iii) transferir las acciones del Estado a todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad. Dichas acciones no pasarán directamente a manos de éstos, sino que se transferirán a cuentas de ahorro de distribución diferida de los fondos de pensiones de administración privada hasta el momento de su retiro. Los pormenores del funcionamiento de este sistema se especificarán en otras normas legislativas y reglamentarias. Esta ley también establece que la responsabilidad por la reglamentación de los sectores de comunicaciones, energía eléctrica, hidrocarburos y transporte corresponderá al gobierno nacional y no a los gobiernos municipales.

11. Desde el momento de la capitalización de cada empresa hasta que se establezcan estos nuevos fondos privados de pensiones, las acciones de los ciudadanos bolivianos serán transferidas a un fideicomiso administrado por un fideicomisario internacional y custodio mundial. Este fideicomisario deberá transferir las acciones a cuentas de ahorro de los fondos de pensiones de administración privada. Estas cuentas se distribuirán entre los fondos de pensiones en condiciones de competencia.

12. Se ha establecido la estructura necesaria para coordinar y dirigir el proceso de capitalización. El gobierno ha creado un Ministerio de Capitalización encargado de administrar el proceso de reforma sectorial, capitalización y distribución de acciones entre los ciudadanos de Bolivia. Se ha formado un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno y expertos en cada uno de los seis sectores comprendidos, a fin de que se encargue de redactar la legislación y reglamentaciones pertinentes, formular la estrategia de capitalización para la empresa de que se trate y ayudar a aplicarla. También se han creado grupos de trabajo para introducir reformas en el sector financiero. Se ha avanzado considerablemente en la formulación de la estrategia para la transferencia de las acciones del Estado en las principales empresas públicas a los ciudadanos bolivianos. Además, la ley del Sistema de Reglamentación

1/ La ley menciona específicamente a las siguientes: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV). Como la compañía aérea nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) es una empresa mixta, no hace falta su transformación jurídica antes de la capitalización, razón por la cual no se la menciona expresamente en dicha ley.

Sectorial (SIRESE) que acaba de entrar en vigor establece un marco reglamentario para los sectores de electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y transporte, incluida la creación de organismos reguladores independientes y la formulación de algunas normas reglamentarias aplicables a varios sectores (véase la Sección III relativa al marco reglamentario propuesto).

El sector de hidrocarburos

13. Antecedentes: Alrededor del 40% del ingreso fiscal y el 10% de los ingresos de exportación provienen del sector de hidrocarburos. Si bien la Ley de Hidrocarburos amplió las posibilidades de participación del sector privado, la reacción de éste fue deficiente. Estimamos que entre 1994 y el año 2000 se necesitarán US\$700 millones sólo para inversiones en exploración y explotación, monto que supera con creces la capacidad del sector público.

14. Objetivos generales: Teniendo en cuenta el Plan de Todos, el gobierno ha fijado objetivos precisos en esta esfera, a saber: i) maximizar los beneficios económicos a largo plazo que todas las actividades del sector de hidrocarburos reporten a Bolivia; ii) acabar con el monopolio de YPF y promover la competencia; iii) capitalizar a YPF; iv) determinar con precisión la función que cabe al Estado en dicho sector; v) garantizar que el sector de hidrocarburos siga generando ingresos fiscales y en monedas fuertes; vi) atraer considerables inversiones privadas a todas las actividades del sector, sobre todo a las de exploración y producción; vii) lograr mayor eficacia y eficiencia en todo el sector; viii) proteger a los consumidores mediante una reglamentación eficaz, y ix) proteger el medio ambiente frente a los daños que pudieran causar las operaciones petroleras. A fin de lograr estos objetivos, proponemos varias medidas estratégicas.

15. Leyes y reglamentaciones y liberalización del precio de los productos derivados del petróleo: El gobierno se propone dictar leyes, reglamentaciones y directrices relativas a contratos que puedan competir, en cuanto a los aspectos fiscales y de otra índole, con los de los países vecinos. El gobierno se propone presentar ante el Congreso Nacional una nueva Ley de Hidrocarburos en agosto de 1995, y se prevé que ésta será sancionada poco después. Dicha ley contemplará, sobre todo: i) el derecho a la libre disposición, exportación e importación de petróleo crudo, productos derivados del petróleo y gas natural; ii) la racionalización de los impuestos que gravan a los primeros procesos y los productos derivados del petróleo, que no sean los establecidos en la Ley 843, texto enmendado por la Ley 1606; iii) la liberalización del precio de los productos derivados del petróleo; iv) mayor flexibilidad en los contratos de exploración, producción y transporte por tuberías; v) el establecimiento de una organización institucional adecuada con independencia y autonomía suficiente para fomentar las inversiones en exploración, negociar los contratos de exploración y producción, administrar el banco de datos, cumplir con las obligaciones del Estado frente a las empresas de explotación y vigilar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales, de conformidad con prácticas y normas internacionales; vi) la jurisdicción del Superintendente de Hidrocarburos en el marco del Sistema de Reglamentación Sectorial (SIRESE) 2/; vii) el establecimiento de disposiciones reglamentarias para asegurar el libre acceso de terceros a gasoductos, oleoductos y tuberías para el transporte de productos derivados del petróleo, contra el pago de las tarifas que normalmente aplican las empresas de transporte público; viii) la eliminación de obstáculos directos o indirectos a la entrada en las actividades de elaboración secundaria de los hidrocarburos, y ix) disposiciones tendientes a la capitalización de YPFB. Teniendo en cuenta la importancia de los ingresos fiscales provenientes de este sector, estos cambios, sobre todo los relativos a la liberalización de precios, se concebirán de manera tal que no produzcan efecto alguno en los ingresos fiscales, o bien contribuyan a incrementarlos a mediano plazo.

16. Inmediatamente después de promulgada la ley, se procederá a su reglamentación. Esta se promulgará en el curso de 1995 y abarcará las siguientes esferas: i) el proceso de adjudicación de las zonas de exploración; ii) las servidumbres de paso para el tendido de tuberías, el acceso a éstas y las tarifas aplicables; iii) normas ambientales, técnicas y de seguridad; iv) determinación de la estructura institucional para el otorgamiento y vigilancia de los contratos actuales y futuros de exploración y producción, y v) los impuestos aplicables a los primeros procesos de producción. Como se mencionó, el Congreso ha sancionado una modificación a la Ley 843, por la que se establece un nuevo régimen tributario para el precio de los productos derivados del petróleo, y a la brevedad se dictarán las principales reglamentaciones de dicha ley.

17. Marco institucional y reglamentario: Además, el gobierno se propone dotar de personal a la Superintendencia de Hidrocarburos y ponerla en funcionamiento en el marco del SIRESE, y hacer lo mismo con otros organismos encargados de la adjudicación y supervisión de las concesiones y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones. Ello comprenderá las siguientes medidas que se adoptarán en los primeros meses de 1996: i) el nombramiento del Superintendente de Hidrocarburos y la máxima autoridad de todo otro organismo pertinente; ii) la puesta en marcha de actividades de asistencia técnica; iii) la contratación de los principales funcionarios, y iv) la elaboración de planes de acción para la aplicación de las políticas orgánicas y administrativas. Además, el gobierno prevé: i) fortalecer la capacidad de la Secretaría Nacional de Energía para supervisar todas las actividades del sector y vigilar sus aspectos ambientales en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; ii) fortalecer la capacidad de la Secretaría Nacional de Hacienda para aplicar el nuevo régimen tributario y recaudar

2/ Estas funciones abarcarían, entre otras, la reglamentación de la distribución de gas natural, la supervisión de las obligaciones de acceso a los oleoductos y la vigilancia del cumplimiento de las normas antitrust.

impuestos, y iii) fortalecer la capacidad de la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente a fin de adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y mitigar todo daño ambiental que las operaciones de YPFB puedan ocasionar al medio ambiente, según lo determinado por auditorías ambientales, y hacer cumplir la legislación promulgada a tal fin.

18. Capitalización de YPFB: Con respecto a YPFB, el gobierno se propone aplicar el programa de capitalización y participación que ha anunciado en el Plan de Todos. Los objetivos importantes que se están tomando en cuenta para la formulación de la estrategia de capitalización de YPFB comprenden la capacidad de la nueva compañía o las nuevas compañías para: i) atraer capital de inversión, tecnología y capacidad empresarial; ii) aumentar el valor del capital accionario, y iii) ocupar una posición competitiva en el mercado regional del gas. Otro aspecto fundamental será dar a la nueva compañía o a las nuevas compañías una organización que reduzca al mínimo el temor al abuso del poder de mercado en detrimento de los consumidores nacionales. El gobierno ha convenido en que la compañía o las compañías privadas resultantes podrán competir en igualdad de condiciones en todas las esferas del sector, y en que toda superficie de exploración que YPFB no retenga una vez capitalizada se abrirá a la exploración por parte de compañías privadas. El gobierno conservará sus derechos con arreglo a los contratos vigentes de explotación y, por lo tanto, el Tesoro seguirá recibiendo ingresos. Aún quedan por determinar los mecanismos de recaudación de estos ingresos y de administración de los contratos.

El sector de telecomunicaciones

19. Antecedentes: En el sector de telecomunicaciones de Bolivia se registra baja densidad de teléfonos, servicios de mala calidad, tasas bajas de crecimiento y falta de un marco reglamentario adecuado. Los principales indicadores de la situación del sector revelan la necesidad de una mejora considerable. La densidad telefónica de Bolivia, de menos de cuatro teléfonos por cada 100 habitantes, es la peor de todos los países de América Latina. La demanda insatisfecha de servicios telefónicos es del orden de aproximadamente el 50% de las líneas de acceso actualmente en servicio. El mayor desarrollo del servicio telefónico se ve considerablemente limitado por el elevado monto del cargo por instalación, de más de US\$1.500. Para mantener el servicio telefónico de Bolivia y empezar a ampliarlo, concentrándose casi exclusivamente en la red de servicios locales, se necesitará una inversión de más de US\$600 millones en el curso de la próxima década. El gobierno se propone proceder a una reforma importante del sector y ha formulado un marco de políticas conforme a los lineamientos que se exponen a continuación.

20. Objetivos generales: Creemos que existe la necesidad acuciante de proveer a que el sector de telecomunicaciones sea un agente esencial de desarrollo económico y social. A fin de prestar más y mejores servicios

a la población se debe contar con inversiones de capital privado. Además, a fin de regular adecuadamente el sector, el Estado no debe participar en la prestación directa de servicios, salvo de los esenciales de emergencia. La mejor manera de llevar esto a cabo es estimular la competencia leal y abierta para la prestación de servicios de telecomunicaciones entre un grupo de agentes privados que puedan desarrollar sus actividades en un marco reglamentario eficaz.

21. Nueva Ley de Telecomunicaciones: El gobierno ha preparado una nueva Ley de Telecomunicaciones y se prevé que el Congreso la aprobará en el segundo trimestre de 1995. Dentro, como mucho, de los 90 días de sancionada, se dictarán nuevas reglamentaciones aplicables al sector. En la ley se determinarán las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el marco del SIRESE. La principal modalidad de reglamentación y autorización para la explotación de una red de telecomunicaciones públicas serán las concesiones. La Superintendencia representará al gobierno en las negociaciones con los concesionarios. En los contratos de concesión se establecerán los derechos y obligaciones de los concesionarios para la prestación de un servicio público, y se establecerán especialmente las obligaciones relativas a la cobertura de las zonas urbanas, el suministro de teléfonos públicos y la ampliación del servicio a las zonas rurales. En caso de que los concesionarios incurran en incumplimiento de las obligaciones y los requisitos establecidos en el contrato de concesión, la Superintendencia aplicará sanciones, incluida la posible terminación de las concesiones.

22. El organismo regulador determinará el número y las zonas de las concesiones teniendo en cuenta factores económicos, la eficiencia del servicio, la promoción del desarrollo regional y la interconexión eficiente de los operadores. Cuando no haya competencia, las tarifas serán reguladas por la Superintendencia, que utilizará métodos que contemplen una fórmula de ajuste automático. Las tarifas que se aplicarán al principio del período de transición se calcularán sobre la base del costo de cada clase de servicio, teniendo además en cuenta un margen razonable de utilidad. Los ajustes se harán con arreglo al método de los topes de precios. La ley prevé la interconexión obligatoria de las redes de telecomunicaciones públicas, a fin de permitir la interconexión en condiciones equitativas y no discriminatorias.

23. El espíritu de la ley se orienta a la promoción de la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con el aumento eficaz de la competencia en el sector, la necesidad de reglamentación desaparecerá en forma paulatina hasta que, finalmente, la competencia determinará libremente la variedad, la calidad y el precio de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, a fin de atraer nuevas inversiones de envergadura para la capitalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y del sector, en la ley se establecerá un período de transición de unos cinco años, durante los cuales ENTEL S.A. será el único proveedor autorizado de servicios básicos de llamadas de larga distancia e internacionales. Además, durante este período de transición, se permitirá que las cooperativas existentes amplíen el

servicio que prestan dentro de sus zonas de concesión o que se fusionen con otros concesionarios, aunque no se permitirá la entrada de operadores nuevos al mercado de servicios de llamadas locales. Se abrirán a la competencia todos los demás servicios, como los celulares, inalámbricos, de líneas privadas alquiladas, transmisión de datos y otros servicios que tengan valor agregado. ENTEL S.A. podrá competir en estos mercados, así como en la prestación de servicios de llamadas locales. La finalidad del período de transición es dar a ENTEL S.A. la oportunidad de hacer los ajustes necesarios en el marco de la nueva estructura y el nuevo régimen reglamentario, y de obtener un rendimiento razonable con el cumplimiento de sus nuevas obligaciones.

24. ENTEL S.A. tendrá la obligación de prestar servicios de telecomunicaciones a las zonas rurales, incluidos los que actualmente prestan ENTEL y DITER, ya sea en forma directa o por intermedio de sus filiales especializadas. En cada contrato de concesión se establecerá el nivel de cobertura, mantenimiento, calidad del servicio, zonas de operación y sanciones. Se prevé que dentro de los tres meses de sancionada la Ley de Telecomunicaciones se dictarán sus reglamentaciones, las que abarcarán los siguientes aspectos: i) procedimientos y fórmulas de ajuste de las tarifas, y ii) reglas para la interconexión (normas técnicas y cargos por acceso).

25. Marco institucional y reglamentario: El gobierno se propone dotar de personal a la Superintendencia de Telecomunicaciones y ponerla en funcionamiento en el marco del SIRESE, lo que comprende la adopción de las siguientes medidas dentro de los 90 días de sancionada la Ley de Telecomunicaciones, a saber: i) el nombramiento del Superintendente de Telecomunicaciones; ii) la puesta en marcha de actividades de asistencia técnica en apoyo de la Superintendencia, y dentro de los 90 días del nombramiento del Superintendente; iii) la contratación de los principales funcionarios de la Superintendencia, y iv) la elaboración de un plan de acción para la aplicación de las políticas orgánicas y administrativas.

26. Transformación y capitalización de ENTEL: El gobierno se propone capitalizar a ENTEL y a las cooperativas locales interesadas. Pretende constituir una sociedad anónima, ENTEL S.A.M., con el capital de ENTEL y las acciones de los trabajadores. Luego, se propone llamar a licitación, a mediados de 1995, para su capitalización mediante la concesión nacional de los servicios locales y de larga distancia. Esta concesión entrañará la obligación de efectuar inversiones, prestar servicios de buena calidad, aumentar el número de líneas telefónicas en el país y mejorar los servicios que se prestan a los usuarios. Las cooperativas que decidan no incorporarse al programa de capitalización (o las que decidan constituir sociedades en participación con otras empresas) seguirán teniendo un contrato no exclusivo de concesión para prestar servicios locales en sus respectivas zonas.

El sector de electricidad

27. Antecedentes: Por lo general, el sector de energía eléctrica de Bolivia ha prestado un servicio confiable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, su marco jurídico e institucional ha conducido a ineficiencias y restricciones financieras y de operación caracterizadas por cuatro problemas fundamentales, a saber: i) un sistema reglamentario deficiente; ii) la falta de incentivos para que las empresas de generación y distribución de electricidad aumenten su eficiencia; iii) la distorsión de las tarifas, ya que éstas no reflejan el costo de prestación de servicios a nivel regional ni a nivel de los usuarios finales, y iv) la falta de competencia y de incentivos para promover la inversión privada.

28. Objetivos generales: El principal objetivo del sector de electricidad es prestar un servicio económico y confiable al mayor número posible de usuarios, con el mínimo de intervención del Estado y teniendo debidamente en cuenta los aspectos ambientales. Este objetivo se logrará promoviendo la calidad y la eficiencia mediante la competencia y una reglamentación autónoma eficaz, y atrayendo fuentes nuevas de capital privado para apoyar el desarrollo del sector. A fin de abordar los problemas del sector y lograr el nivel de eficiencia necesario para respaldar el desarrollo económico y social del país, el gobierno se propone emprender una estrategia de reestructuración sectorial. Ello comprenderá la sanción de una nueva Ley de Electricidad y su pertinente reglamentación, así como la capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

29. Nueva Ley de Electricidad: En diciembre de 1994, el Congreso sancionó una nueva Ley de Electricidad que contiene disposiciones relativas a: i) el establecimiento de las funciones que caben a la Superintendencia de Electricidad en el marco del SIRESE, las que serán financiadas por el sector; ii) las funciones reglamentarias a nivel nacional, que comprenderán la administración del proceso de selección de concesionarios, la supervisión de concesiones y la fijación de tarifas; iii) solamente en el caso de las empresas de servicios públicos integradas al Sistema Interconectado Nacional, la separación de las funciones de generación, transmisión y distribución en distintas empresas, con la prohibición de que exista propiedad cruzada; iv) el libre acceso a la transmisión, y v) la promoción de la competencia eficiente cuando sea posible y la satisfacción de necesidades futuras de inversión por parte del sector privado después del período de transición. Se prevé que la reglamentación de esta ley se dictará a mediados de 1995. Las principales reglamentaciones se referirán a los siguientes aspectos: i) normas de calidad de los servicios; ii) reglas claras y específicas para la fijación de tarifas; iii) economía en la distribución de la electricidad y, iv) condiciones necesarias para el otorgamiento de concesiones y permisos, y normas de vigilancia del cumplimiento.

30. Marco institucional y reglamentario: El gobierno se propone dotar de personal a la Superintendencia de Electricidad y ponerla en funcionamiento en el marco del SIRESE, lo que comprende la adopción de las siguientes medidas para fines de junio, a saber: i) el nombramiento del Superintendente de Electricidad; ii) la puesta en marcha de actividades de asistencia técnica en apoyo de la Superintendencia y, para fines de septiembre; iii) el nombramiento de los principales funcionarios de la Superintendencia, y iv) la elaboración de un plan de acción para la aplicación de las políticas orgánicas y administrativas.

31. Período de transición: Durante el curso de la aplicación de la reforma estructural, reglamentaria y de la propiedad del sector, el gobierno asegurará que ENDE: i) mantenga la confiabilidad y calidad de sus servicios; ii) siga con la ejecución de las inversiones en curso, emprenda otras que se justifiquen y cuenten con total financiamiento e interrumpa las que no se justifiquen o no sean viables, y iii) adopte todas las medidas necesarias para ajustarse a las disposiciones de la nueva ley. El Ministro de Capitalización, junto con el Secretario Nacional de Energía, ha formado un grupo de trabajo que redactó la ley, facilitó su sanción por el Congreso y ahora está redactando su reglamentación y ayudando a poner en práctica la capitalización de ENDE.

32. Capitalización de las empresas de servicios públicos: El Ministro de Capitalización aplica la estrategia de capitalización de cada entidad de la siguiente manera:

- Capitalización de ENDE: El gobierno se propone capitalizar a ENDE a fin de integrar sus activos en el Sistema Interconectado Nacional, de manera tal de promover la competencia entre las empresas generadoras de electricidad que operen en el futuro y asegurar el libre acceso a la red nacional de energía eléctrica. Los activos de ENDE para la generación y transmisión de electricidad se separarán en distintas compañías y se capitalizarán por separado. La compañía resultante, ENDE-Generación de electricidad, se subdividirá en tres empresas generadoras que se capitalizarán a fin de que las nuevas inversiones en el sector impulsen la competencia eficiente, en lugar de crear un cuasimonopolio más fuerte. La empresa de Sistemas Independientes de ENDE se constituirá como sociedad anónima y se privatizará separadamente. La reforma propuesta del sector exigirá que se cree un comité de distribución de la carga, en el que deberán participar todas las empresas de generación y distribución de electricidad que quieran conectarse a la red nacional. Se prevé que la separación de ENDE en empresas de generación y de transmisión de electricidad debe estar terminada para abril de 1995, y la capitalización de éstas, para junio de 1995. El gobierno ha contratado los servicios de un banco internacional de inversiones para que preste asistencia en el proceso de capitalización.

- Venta de los sistemas de distribución regional: El 70% de las acciones de capital que tiene ENDE en la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC) se colocará en los mercados nacionales y extranjeros en el curso del segundo trimestre de 1995; el gobierno ha contratado los servicios de un banco internacional de inversiones para que administre y coordine la colocación. La estrategia para la venta de las tenencias de ENDE de valores de Servicios Eléctricos de Potosí S.A. (SEPSA) y de la Cooperativa de Electricidad Sucre S.A. (CESSA) se determinará en abril de 1995.

El sector minero

33. Antecedentes: La función de la minería en la economía de Bolivia ha venido disminuyendo constantemente desde mediados de los años ochenta. Si bien la baja de los precios de los minerales ha contribuido a esta disminución, la mala administración de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en años anteriores, la continuación de la explotación de minas no redituables y un gran exceso de personal han contribuido a que se produjeran pérdidas enormes. Además, la falta de estabilidad de algunas políticas oficiales tributarias y de concesiones del sector minero colocan a Bolivia en desventaja comparativa frente a otros países para atraer inversionistas. Entre 1986 y 1994 el gobierno emprendió un programa de racionalización de la COMIBOL, gracias al cual se redujo extraordinariamente el exceso de personal y se puso término a operaciones mineras no viables.

34. Objetivos generales: La estrategia del sector minero tendrá por objeto lograr un crecimiento económicamente sustentable y elevada competitividad internacional gracias a inversiones del sector privado. A fin de lograr este objetivo, el gobierno eliminará los obstáculos subsistentes a la entrada al sector y proporcionará instrumentos para asegurar estabilidad a los inversores en la minería. Se está convirtiendo a la COMIBOL en una entidad rentable que generará ingresos para el Estado. Al haber cerrado todas las actividades improductivas, la COMIBOL se limitará a administrar una cartera de propiedades y participaciones del Estado en el sector, transfiriendo las funciones de operación y administración de todas las actividades que puedan ser rentables al sector privado a través de sociedades en participación u otros mecanismos.

35. Seguiremos respaldando la modernización y el fortalecimiento de las instituciones del sector a fin de proveer al otorgamiento y la administración oportunos de derechos mineros, así como a la existencia de una base de datos técnicos y de infraestructura geológica modernas y confiables en la industria minera. Además, a fin de transformar la minería de pequeña escala en una actividad económicamente sustentable, debe seguir sujetándose al rigor del mercado.

36. También adoptaremos medidas encaminadas a mitigar los efectos ambientales perniciosos de las actuales operaciones mineras y a minimizar las repercusiones de todas las inversiones nuevas. También revestirá

prioridad la eliminación de las condiciones y actividades riesgosas en los lugares de trabajo. A tal efecto, el gobierno establecerá las normas pertinentes y fortalecerá al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, así como a la oficina ambiental de la Secretaría de Minería, para asegurar el seguimiento y cumplimiento de las normas.

37. Modificación de la Ley de Minería: Para que el sector despierte un mayor interés por parte de los inversionistas a largo plazo, se prevé que esta modificación comprenda disposiciones a los siguientes efectos: i) determinar la función que cabe a la COMIBOL en calidad de administrador de los activos mineros estatales y derogar las leyes en las que se le fijaron las funciones de una empresa de explotación minera; ii) permitir concesiones mineras de más de 10 años de plazo; iii) introducir la opción de la estabilidad impositiva para los inversionistas, con arreglo a la cual éstos pueden elegir entre ajustarse al marco tributario vigente o suscribir un contrato con condiciones impositivas fijas; iv) eliminar el régimen obsoleto y discrecional de cánones que actualmente se aplica junto con el sistema impositivo basado en los resultados; v) mejorar la administración de los derechos mineros; vi) determinar las atribuciones y responsabilidades de las instituciones del sector a fin de facilitar su modernización, mejorar su administración y mantener una base de datos confiable, y vii) actualizar las disposiciones ambientales vigentes para que guarden armonía con la política oficial. Se prevé que presentaremos este proyecto ante el Congreso para junio de 1995 y aseguraremos su sanción poco después.

38. Capitalización del sector minero: En la Constitución de Bolivia se dispone que ninguno de los activos nacionalizados en 1952 podrá transferirse fuera de la COMIBOL. En consecuencia, la COMIBOL no puede estar comprendida en el programa de capitalización, y la participación de la inversión privada en las operaciones de la COMIBOL se asegurará mediante sociedades en participación, concesiones mineras y otros mecanismos. Sin embargo, como no se nacionalizó en 1952, la EMV, de propiedad estatal, no está sujeta a la restricción mencionada y será capitalizada.

39. La presentación de un conjunto de opciones que asegure el adecuado suministro a largo plazo de materia prima a la EMV, despertará un interés considerablemente mayor de los posibles inversionistas en ella, además de la propia actividad mencionada. A tal efecto, el gobierno se propone presentar un conjunto de opciones que comprendan a la EMV y a varias minas de la COMIBOL. Se capitalizará a la EMV por el monto convenido para ésta, y las minas se darían en concesión a la EMV así capitalizada. En principio, se consideraría la inclusión en dicho conjunto de opciones a la mina de Huanuni y, posiblemente a la mina Colquiri. La formulación del conjunto definitivo de opciones se hará con arreglo a las recomendaciones de consultores técnicos que también prepararán la valuación de la EMV. De esta manera se tratará de maximizar el valor de los activos que tiene el Estado en el sector minero. A fin de preparar a la EMV para la capitalización y aumentar la participación del sector privado en la operación relativa a los activos de la COMIBOL, el gobierno ya ha contratado los servicios de un banco internacional de inversiones.

El sector de ferrocarriles

40. Antecedentes: La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) se constituyó en 1964 mediante la fusión de varias líneas andinas del occidente de Bolivia que pertenecían al Estado, con algunas empresas privadas. Pocos años después se agregaron las líneas del oriente de Bolivia con centro en Santa Cruz. En total el sistema comprende 3.500 km de líneas, y ocupa a 4.000 personas. Si bien la red ferroviaria del oriente es redituable (después de las subvenciones públicas destinadas a compensar las tarifas de transporte de pasajeros y de carga de nivel inferior a los costos), las pérdidas de la línea andina absorben casi todos los beneficios. Asimismo, la rentabilidad de las líneas andinas se ha reducido en los últimos años debido al deterioro del sector minero de Bolivia y al rápido aumento de los costos. En las redes ferroviarias andina y oriental se están registrando prácticas ineficientes, exceso de personal y una gran falta de inversiones. De no introducirse cambios fundamentales, todos los ferrocarriles sufrirán un deterioro constante.

41. Objetivos generales: Las nuevas políticas económicas de Bolivia posibilitan la reforma esencial de los ferrocarriles. Con arreglo a los preceptos del Plan de Todos, el gobierno se ha fijado los siguientes objetivos: i) acceso no discriminatorio a los servicios de ferrocarriles; ii) aranceles acordes con la situación del mercado y libres de distorsiones monopolistas; iii) adopción de las tecnologías y prácticas más eficientes y adecuadas por parte de los ferrocarriles, y iv) transformación de los ferrocarriles en empresas comerciales privadas mediante el proceso de capitalización. Si el gobierno decidiera que el sector privado debe seguir prestando servicios improductivos por razones sociales de peso, se compensará a los ferrocarriles mediante un sistema transparente de pago de obligaciones de servicios públicos a cargo del gobierno o de un organismo público.

42. Legislación relativa al sector de ferrocarriles: A mediados de 1995 se presentará ante el Congreso una nueva Ley de Ferrocarriles para permitir la capitalización con éxito de ENFE. Con esta ley, en virtud de un contrato de concesión, se conferirán a la nueva empresa capitalizada de ferrocarriles todas las facultades necesarias para prestar un servicio ferroviario integrado. En la capitalización se incluirían los activos de ENFE, con excepción de las vías. En la ley se tendrán en cuenta los cambios fundamentales ocurridos en la relación de los ferrocarriles con el público. El nuevo marco reglamentario garantizará que los ferrocarriles funcionen como "empresa de transporte público" y presten servicios a toda la población. A fin de eliminar los abusos monopolistas, las tarifas, los contratos de carga u otros precios fijados para dichos servicios, así como las condiciones de éstos estarán sujetos a la pertinente regulación del Superintendente de Transporte en el marco del SIRESE. La ley sentará los principios de un método de pago, en condiciones de transparencia, de servicios públicos no rentables que el gobierno o cualquier organismo público debidamente constituido quiera comprar a los ferrocarriles. En dicha ley se determinarán con precisión las responsabilidades del Superintendente sectorial en el marco del SIRESE.

43. Capitalización de ENFE: Se está realizando un análisis de las propiedades de los ferrocarriles a fin de determinar su valor y si su existencia está justificada por la necesidad de su uso o si exceden las necesidades. Se ha estudiado la situación actual y se han realizado simulaciones financieras de distintas estructuras de recursos de ENFE, teniendo en cuenta la eficiencia que podría lograrse aplicando las "prácticas óptimas internacionales" adaptadas a la situación de Bolivia. Los servicios actuales de consultoría se han reorientado hacia el objetivo de la capitalización y se han recibido más servicios especiales. Con este proceso se especificará una forma recomendada o preferida de transacción o transacciones que posteriormente serán objeto del esfuerzo de comercialización. Se han recibido propuestas de bancos internacionales de inversiones interesados en prestar servicios de asesoramiento acerca del proceso y pronto se seleccionará a uno de ellos.

El sector de aeronáutica

44. Antecedentes: Admitimos que el sector aeronáutico de Bolivia se ha caracterizado por una intervención relativamente importante y que carece de un marco reglamentario claro y eficaz. Esto se ha traducido en ineficiencias en la prestación de servicios de tránsito aéreo y de aeropuertos. Como parte de su programa de reforma, el gobierno ya ha dictado el Decreto Supremo 21060 por el que se liberalizaron las tarifas aplicables al tránsito aéreo interno. Los efectos de esta norma ya han generado una mayor competencia del sector privado en el mercado.

45. Objetivos generales: El gobierno quiere reestructurar el sector a fin de promover la participación del sector privado, aumentar la eficiencia del servicio aéreo nacional e internacional y reducir la participación indebida del Estado. Los tres aspectos básicos del programa de reforma se refieren a: i) los sectores de líneas aéreas de vuelos internacionales y nacionales; ii) el sector de aeropuertos, y iii) la adaptación del marco institucional y reglamentario.

46. Sectores de líneas aéreas de vuelos nacionales e internacionales: El gobierno se propone capitalizar al LLOYD Aéreo Boliviano (LAB) a fin de promover la competencia en el sector de aeronavegación nacional. Hemos contratado los servicios de un asesor técnico, un banco internacional de inversiones y un estudio jurídico para que ayuden con el proceso de capitalización de LAB. A partir de 1994, hemos eliminado las subvenciones implícitas que recibían Transportes Aéreos Militares (TAM) y Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que en la actualidad han suspendido sus operaciones. Las rutas nacionales a destinos no comerciales se subastarán y adjudicarán a la aerolínea nacional que esté dispuesta a recibir la compensación más baja. En lo que respecta a TAM y TAB, el gobierno se decidirá por una de las dos opciones siguientes: estas entidades se convertirán en empresas privadas y funcionarán en condiciones de competencia en el mercado o dejarán de prestar servicios comerciales y se integrarán al sector militar.

47. Servicios de los aeropuertos: Nos proponemos reestructurar a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), empresa de propiedad estatal, a fin de que: i) se transfieran al sector privado la mayor parte de las actividades de los aeropuertos, excluidos los servicios de control del tráfico aéreo; ii) la AASANA redimensionada (que es muy probable que sea una nueva entidad) siga siendo responsable únicamente de los servicios de control del tráfico aéreo; iii) la administración de aeropuertos se descentralice con la creación de administraciones regionales de los aeropuertos, con la participación del sector privado y de entidades regionales, y iv) se establezcan tarifas aeroportuarias más acordes con las aplicadas en países vecinos. Hemos contratado los servicios de consultores especialistas en la materia a fin de que ayuden en la reestructuración y privatización de AASANA, y nos proponemos contratar un banco de inversiones reconocido internacionalmente para que preste su asistencia en esta transacción.

48. Marco institucional y reglamentario: Nos proponemos: i) adaptar la legislación aeronáutica vigente a la nueva estructura del sector de aviación, así como a la ley del SIRESE; ii) modificar la política de aviación general y la de aviación internacional, con arreglo a los cambios del sector aeronáutico, y iii) crear una administración de aviación civil (organismo regulador) encargada de cuestiones relacionadas con la aeronáutica. El gobierno ha contratado los servicios de un estudio jurídico especializado para que ayude a redactar la reglamentación de este sector. La Superintendencia de Transporte, que funcionará en el marco del SIRESE, será responsable de vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones económicas, como los cargos aplicables.

Privatización de empresas pequeñas y medianas

49. El gobierno ha identificado a unas 72 empresas para su privatización. Se trata de empresas pequeñas y medianas que están bajo el control de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, las fuerzas armadas, las prefecturas locales (que controlan sobre todo hoteles), municipalidades, y diversos ministerios, secretarías, empresas estatales (que controlan filiales) y otros organismos. El valor total de dichas empresas se calcula en US\$100 millones. Respecto de aproximadamente la mitad de este grupo, consultores ya han realizado distintas evaluaciones previas a la privatización.

50. El proceso de privatización de empresas pequeñas y medianas se formuló cabalmente en la Ley de Privatizaciones de mayo de 1992 y sus reglamentaciones, y el gobierno anterior lo empleó para la privatización o venta de unas 30 empresas cuyo valor total era de US\$12 millones. Teniendo en cuenta los últimos cambios en la estructura del gobierno, en los primeros meses de 1995 se dictará un Decreto Supremo por el que se ajustarán los procedimientos a la nueva estructura.

51. Los fondos provenientes de la venta se utilizarán exclusivamente en actividades de orientación social, seleccionadas por el organismo respon-

sable de la empresa cuando ésta pertenecía al sector estatal, bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas. Hasta ahora se han desembolsado unos US\$5 millones para más de 100 proyectos sociales. Es nuestra intención continuar con este programa. Con la excepción de las empresas públicas grandes, casi todas las demás empresas estatales se privatizarán o venderán para fines de 1996.

Aspectos ambientales

52. Se han realizado auditorías ambientales en el sector de electricidad, otras están en marcha en el sector de minería, en tanto se están contratando los servicios de consultores especializados en el medio ambiente a fin de que lleven a cabo evaluaciones de ese tipo en el sector de hidrocarburos. En general, teniendo en cuenta el valor probable de los activos que se van a capitalizar, las empresas capitalizadas asumirán la responsabilidad de las obligaciones ambientales existentes en la medida en que se hayan cuantificado en las auditorías ambientales. El gobierno asumirá la mayor parte de las obligaciones correspondientes al sector minero, así como toda obligación contingente que pudiera surgir.

53. El gobierno ha formado un grupo de trabajo bajo los auspicios de la Secretaría Nacional de Minería (SNM) encargado de coordinar las actividades de varios programas gubernamentales de rehabilitación y desarrollo social en las regiones mineras, que servirán para respaldar las etapas del programa de capitalización. Este grupo de trabajo dirigirá la preparación de un plan de desarrollo social y rehabilitación de la región minera de Bolivia, que se prevé que quedará terminado dentro de los próximos meses.

54. El gobierno ha progresado en la preparación de las reglamentaciones de la Ley de Medio Ambiente (LMA) y presentará el proyecto ante la AIF y el BID con antelación a la fecha de presentación del préstamo ante los respectivos Directorios Ejecutivos.

55. Antes de la presentación de las ofertas económicas para cada una de las empresas que se van a capitalizar en el marco del programa, el gobierno pondrá a disposición de la AIF, el BID y los posibles inversionistas los siguientes elementos: i) las conclusiones de las auditorías ambientales pertinentes; ii) las cláusulas relativas al medio ambiente que se incluirán en el contrato con los inversionistas estratégicos; iii) las directrices ambientales que las empresas capitalizadas deberán seguir en sus futuras operaciones, y iv) la estructura y las funciones de la pertinente unidad sectorial de medio ambiente.

III. EL MARCO INSTITUCIONAL

56. El hecho de que la economía boliviana no logre atraer inversiones privadas se atribuye fundamentalmente a dos factores: i) el papel predo-

minante del sector público en esferas de la economía del país que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento, y ii) la falta de un marco institucional que asegure a los agentes privados claridad, previsibilidad y el efectivo cumplimiento de los principios jurídicos y reglamentarios por los que se rigen sus actividades. El programa de capitalización tiene por objeto racionalizar el papel que cumple el Estado en calidad de propietario y operador en los principales sectores económicos. Sin embargo, al mismo tiempo es preciso realizar esfuerzos para establecer un marco institucional que proporcione al sector privado incentivos adecuados para desarrollar actividades y realizar inversiones en Bolivia.

57. El gobierno está adoptando diversas medidas encaminadas a establecer un marco institucional propicio para la participación del sector privado. Concretamente, se están:

- estableciendo marcos reglamentarios orientados hacia la competencia para cada uno de los sectores comprendidos en el plan de capitalización;
- introduciendo un sistema de reglamentación sectorial (la ley del SIRESE) que proporciona un amplio marco reglamentario para los sectores capitalizados, incluida la creación de un sistema de organismos reguladores independientes;
- estableciendo sistemas eficaces e imparciales de arreglo de las diferencias que surjan de la aplicación de la reglamentaciones sectoriales y las operaciones comerciales, incluida la transacción propuesta de capitalización;
- respaldando los esfuerzos del Poder Judicial para mejorar la oportunidad y acierto de la solución judicial de controversias, como parte de un programa integral de reforma judicial, y
- procurando superar restricciones legales y deficiencias en el registro y ejecución de garantías constituidas sobre bienes muebles, que restringen indebidamente el acceso al crédito.

El marco reglamentario

58. Antecedentes: El proceso de capitalización exige la racionalización de la función del Estado en los sectores pertinentes, la fijación por ley de las normas básicas que rigen para cada sector (es decir, fijación de precios, estructura del sector y requisitos para la entrada y salida) y el establecimiento de sistemas eficaces de arreglo de diferencias en salvaguardia de los derechos de los inversionistas privados y los consumidores. La racionalización del papel del Estado consiste fundamentalmente en el cese de sus actividades de operador en los sectores y en el fortalecimiento de su capacidad reglamentaria.

59. Sistema de reglamentación sectorial: En octubre de 1994, el Congreso sancionó la ley del SIRESE. La ley establece un marco reglamen-

tario amplio para los sectores de electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, transporte y abastecimiento de agua, incluida la creación de la Superintendencia General y de Superintendencias Sectoriales y la formulación de normas reglamentarias fundamentales aplicables a varios sectores. Las superintendencias serán autónomas y se financiarán con gravámenes aplicables a las industrias reguladas. La ley comprende varias salvaguardias contra influencias políticas indebidas en el funcionamiento del sistema reglamentario, incluida la protección de los superintendentes contra su remoción arbitraria. Las apelaciones interpuestas contra decisiones de los Superintendentes Sectoriales son resueltas por el Superintendente General. Las decisiones de éste son apelables ante la Corte Suprema, sin intervención del Poder Ejecutivo. Las reglamentaciones de la ley establecerán el sistema de administración de algunos recursos compartidos por el sistema reglamentario.

60. La aplicación de un marco reglamentario que abarque varios sectores, incluida una Superintendencia General con funciones de supervisión, coordinación y resolución de apelaciones, tiene por objeto: i) promover la coordinación y la coherencia entre los sectores regulados; ii) proporcionar a las Superintendencias Sectoriales más independencia de las influencias políticas indebidas, y iii) permitir la existencia de economías de escala y de alcance en materia de personal y otros recursos. Tenemos prevista la creación de las Superintendencias Sectoriales inmediatamente después de la sanción de cada ley sectorial, y la de la Superintendencia General a más tardar a mediados de 1995. A mediados de 1995 también dictaremos las reglamentaciones de la ley del SIRESE con respecto a los siguientes temas: i) la estructura administrativa y el funcionamiento de la Superintendencia General; ii) los procedimientos de apelación contra las decisiones del Superintendente General y los Superintendentes Sectoriales, y iii) las cuestiones relativas al antitrust.

Mejora del marco jurídico para el arreglo de diferencias entre el gobierno y los particulares

61. Antecedentes: El establecimiento de marcos reglamentarios orientados hacia la competencia da lugar a la posibilidad de que surjan controversias entre los organismos reguladores y los inversionistas privados. En la actualidad, la legislación de Bolivia no prevé sistemas eficaces e imparciales de arreglo de las diferencias que pudieran surgir.

62. Apelación contra decisiones administrativas: Además de las reglamentaciones que se promulgarán con arreglo a la ley del SIRESE, el gobierno también está estudiando una Ley de Procedimientos Administrativos, que sometería una gama más amplia de decisiones administrativas a revisión judicial con arreglo a procedimientos claros.

Mejora del marco jurídico para el arreglo de diferencias entre particulares

63. Antecedentes: El gobierno se da cuenta de la importancia de sistemas rápidos y equitativos de arreglo de diferencias relativas a

cuestiones comerciales y financieras, incluidas las transacciones de capitalización. La legislación vigente presenta grandes deficiencias en materia de sistemas a los que pueda recurrirse para el arreglo de diferencias. Existen muchas restricciones en cuanto a las condiciones que deben reunir las partes, el ámbito de aplicación y la posibilidad de que se dicten decisiones con celeridad y se pueda exigir su cumplimiento.

64. Ley de Arbitraje: El gobierno quiere promover el uso de otros sistemas de arreglo de diferencias, es decir, el arbitraje, la conciliación y la mediación, para satisfacer eficazmente las necesidades de los inversionistas de arreglar sus diferencias. La legislación vigente sobre dichos sistemas distintos limita su esfera de aplicación y no asegura la adopción de decisiones con celeridad ni su pronto cumplimiento efectivo. El gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley sobre arbitraje, conciliación y mediación que tiene por objeto superar las deficiencias de la legislación vigente. A fin de asegurar el uso del arbitraje en determinadas transacciones de capitalización, el proyecto de ley permitirá específicamente al Estado someterse a arbitraje respecto de cualquier controversia que surja en relación con sus funciones como agente privado. A fin de asegurar el cumplimiento de laudos arbitrales en el plano internacional, el gobierno ya ha ratificado las Convenciones sobre Arbitraje de Nueva York y Panamá y el Convenio Constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

Reforma judicial

65. En un notable esfuerzo conjunto, los Poderes Legislativo y Judicial han convenido en emprender la reforma integral del sistema judicial, sobre todo de las ramas de derecho civil y comercial. Se ha determinado que el sistema judicial constituye una restricción fundamental al desarrollo del sector privado y al funcionamiento eficiente de una economía de mercado en Bolivia. El hecho de que el Poder Judicial no pueda proporcionar un medio confiable y previsible para el ejercicio de los derechos relativos a las transacciones comerciales es un factor esencial que obstaculiza el surgimiento de prácticas comerciales modernas y mercados eficientes. El mal desempeño del Poder Judicial también ha sido una cortapisa para el establecimiento de distintos sistemas de arreglo de diferencias, como el arbitraje comercial.

66. Nuestra estrategia de reforma tiene como objetivo a largo plazo modernizar la administración de justicia en Bolivia, es decir, convertir al Poder Judicial en un órgano impulsado por las siguientes metas: i) resolver las contiendas judiciales en forma expedita; ii) asegurar que las decisiones judiciales se basen en la jurisprudencia pertinente y uniforme con arreglo a principios de derecho y de equidad; iii) asegurar la eficiencia en el uso de los recursos judiciales, y iv) promover la responsabilidad y la adecuación del poder judicial a las necesidades de administración de justicia de la sociedad.

67. La ejecución de la primera etapa ha comenzado con la reestructuración institucional del Poder Judicial prevista en la reciente reforma

de la Constitución. Las reformas posteriores se centrarán en tres esferas interrelacionadas a las que ahora se atribuye en parte el mal desempeño del Poder Judicial, a saber: i) reformas de las políticas de administración de los recursos humanos a fin de cambiar la estructura injusta de incentivos aplicables a la contratación de personal, las promociones y las remuneraciones; ii) el establecimiento de una función de administración estratégica junto con sistemas adecuados de información para la administración, y iii) reformas de los procedimientos a fin de satisfacer eficazmente la demanda de la población de una administración de justicia rápida, equitativa y previsible.

68. El gobierno se propone, como parte de las medidas destinadas a apoyar esta iniciativa de reforma judicial, asegurar que, dentro de las restricciones fiscales globales, se asignen los recursos necesarios para permitir que el Poder Judicial aplique las iniciativas de reforma mencionadas antes.

Promoción de la garantía de las transacciones

69. Antecedentes: En Bolivia, sólo tienen acceso al crédito quienes pueden ofrecer bienes inmuebles como garantía. Las existencias, cuentas por cobrar o los equipos industriales no pueden servir de garantía sin el complemento de una garantía real o personal. El papel singular que cumplen los bienes inmuebles como garantía se debe a las deficiencias del marco jurídico e institucional en materia de garantía de las transacciones.

70. El marco jurídico actual restringe los activos que pueden servir como garantía y torna incierta la prioridad de los derechos de los acreedores y el registro en que ellos deben asentarse. Además, la ley no permite ningún tipo de mecanismo privado para exigir el cumplimiento de los derechos, alternativa que es fundamental para un sistema eficaz de garantía de las transacciones. Estas restricciones legales afectan sustancialmente la capacidad de los particulares para constituir garantías sobre bienes muebles.

71. El funcionamiento de los registros también constituye un gran obstáculo para el buen funcionamiento de un sistema de garantía de las transacciones. El Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de Comercio no aplican procedimientos adecuados para asegurar la inscripción, individualización y publicidad eficientes de las garantías. De esa manera se desvirtúa el objetivo principal de proporcionar a los acreedores garantizados certeza con respecto a la preferencia de sus derechos sobre los activos de los deudores.

72. Ley de Garantía de transacciones: A fin de eliminar las restricciones jurídicas existentes, el gobierno se propone presentar ante el Congreso para su aprobación las pertinentes modificaciones del Código de Comercio o una ley relativa a la garantía de las transacciones. Con estas medidas legislativas se procuraría facilitar, modernizar y delinear claramente la constitución, el perfeccionamiento y el efectivo cumpli-

miento de los derechos de garantía real y gravámenes sobre bienes muebles. Se dictarán nuevas reglamentaciones bancarias con arreglo a esta nueva ley.

73. Mejora de los registros: Como la información de los registros es esencial para asegurar la existencia de un medio empresarial eficiente, el gobierno está empeñado en mejorar los registros de comercio y de la propiedad, por lo que ha encargado la realización de evaluaciones de las necesidades técnicas de cada oficina de registro. Teniendo en cuenta estos estudios, el gobierno promoverá y emprenderá un programa destinado a mejorar el funcionamiento y la administración de los registros a través de la informatización y el seguimiento del desempeño. También estudiaremos la posibilidad de contratar la administración de algunos registros por el sector privado.

IV. EL SECTOR FINANCIERO

Reforma de los mercados financieros

74. El gobierno está abocado a un programa importante para ampliar el campo de acción y mejorar la eficiencia de los intermediarios financieros a fin de facilitar el proceso de capitalización, movilizar ahorro a largo plazo y eliminar restricciones al financiamiento para empresas y personas físicas. Nos proponemos promover el desarrollo de los mercados financieros a largo plazo mediante la mejora de la reglamentación de valores, las compañías de seguro y las instituciones autorizadas para recibir depósitos, así como el fortalecimiento de los sistemas contractuales de ahorro y pensiones.

75. La intensificación de la actividad de los mercados financieros a largo plazo es fundamental para la estrategia oficial de capitalización señalada. Un mercado bursátil regulado, con mecanismos adecuados de acceso a la información, permitirá la realización de operaciones en el mercado secundario a fin de promover la competencia y asegurar a los accionistas y miembros de los fondos mutuos y de pensiones el mejor precio y la mayor liquidez posibles. La mejora de las reglamentaciones de seguros contribuirá a movilizar las inversiones institucionales, el ahorro contractual y asegurar que los jubilados, discapacitados y sobrevivientes puedan invertir eficientemente los beneficios jubilatorios en programas de renta vitalicia que aseguren su sostén a perpetuidad. Por último, la reglamentación y supervisión del sistema de pensiones reducirá la posibilidad de pérdidas de activos de pensiones y promoverá las inversiones eficientes.

Mejora de la reglamentación de las instituciones autorizadas para recibir depósitos

76. En los últimos años, en Bolivia se ha registrado un aumento considerable de la confianza en la intermediación financiera cumplida por bancos comerciales e instituciones de ahorro y préstamo, así como en su eficiencia, debido en parte a la mejora de las reglamentaciones y la calidad de la supervisión. La reglamentación de las instituciones financieras se ha fortalecido con la sanción y aplicación de la Ley de Entidades Financieras y se reforzará aún más con la sanción de la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Con el respaldo del programa de ajuste, el gobierno prevé continuar mejorando la supervisión de las instituciones autorizadas para recibir depósitos (incluida la aplicación de normas adecuadas de disciplina y control) a fin de seguir teniendo la confianza del público, promover una mayor movilización del ahorro y la eficiencia de la intermediación financiera. Esto se logrará fortaleciendo la capacidad de regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos, así como la capacidad del Banco Central para administrar las políticas monetaria, crediticia y cambiaria.

Desarrollo de los mercados de valores

77. Si bien hasta la fecha los mercados de valores en Bolivia no han tenido un gran desarrollo, es esencial contar con un sistema transparente y eficiente de mercado, sobre todo habida cuenta del programa de capitalización propuesto. Así se aseguraría que las personas físicas, empresas y fondos de pensiones puedan hacer una inversión prudente y redituable de sus tenencias, y que aumenten las posibilidades de que Bolivia cuente con financiamiento para las empresas e inversiones institucionales. Los mercados más dinámicos y eficientes de acciones y bonos estimularían el financiamiento a largo plazo para las empresas y proporcionarían un mecanismo de protección contra los riesgos financieros. A tal fin, el gobierno presentará ante el Congreso una Ley de Valores, que contemplará la reforma del organismo regulador y las disposiciones necesarias para su fortalecimiento. Se prevé que para fines de marzo de 1996 se habrá sancionado y comenzado a aplicar la Ley de Valores, el programa de fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Valores estará en marcha y se habrá establecido un mecanismo de financiamiento de esta Superintendencia. Las principales reglamentaciones de la ley se referirán a los siguientes aspectos, a saber: i) emisión y gestión de valores, y ii) requisitos en materia de inscripción y cotización. El fortalecimiento de la Superintendencia de Valores asegurará que cuente con el personal, equipo, sistemas y presupuesto necesarios para el cumplimiento efectivo de la nueva ley y sus reglamentaciones.

Reforma de las pensiones

78. El sistema de pensiones en Bolivia ha experimentado varias dificultades, por ejemplo: i) reducción de los beneficios como consecuencia de la incapacidad del sistema para financiarlos íntegramente, incluso por causa de costos crecientes y la insolvencia de algunos fondos; ii) ele-

vados costos administrativos; iii) variación considerable de los beneficios proporcionados por fondos complementarios; iv) significativa disminución de la relación contribuyentes-jubilados, y v) cobertura de tan sólo un 12% de la población económicamente activa de Bolivia.

79. El gobierno está empeñado en la reforma de las pensiones a fin de: i) brindar mayor seguridad respecto de los beneficios de jubilación, discapacidad prolongada, sobrevivientes y otros beneficios prolongados de los trabajadores y personas a su cargo; ii) ampliar el número de ciudadanos bolivianos a quienes puede asegurarse dicho beneficio; iii) establecer un sistema de prestaciones que movilice el ahorro contractual a largo plazo, lo invierta eficientemente y proporcione periódicamente información a los contribuyentes y jubilados, y iv) supervisar el sistema de pensiones a fin de que pueda ampararse a los contribuyentes y jubilados contra el mal uso de sus fondos, y que sus activos puedan invertirse de manera prudente y redituable gracias a una administración idónea.

80. El gobierno emprenderá un programa importante de reforma de las pensiones que consta de tres pilares básicos. Primero, el programa entrañaría una modificación profunda del sistema vigente de pago con cargo a los ingresos corrientes, que comprendería la reforma de los Fondos de Pensiones Básicas (FOPEBA) y de los Fondos Complementarios existentes. El resultado final de dicha reforma será la creación de un sistema que administre las contribuciones y otros recursos a fin de prestar mejores servicios a los trabajadores que permanezcan en el sistema vigente después de la reforma. Segundo, se establecerá un sistema nuevo de fondos de pensiones de aporte definido y de administración privada a fin de reemplazar paulatinamente al sistema actual. Estos fondos serían supervisados por la Superintendencia de Pensiones. Este sistema sería voluntario para los contribuyentes actuales y obligatorio para los que se incorporen a la fuerza laboral. Tercero, todas las acciones correspondientes a la capitalización se colocarían en cuentas de distribución diferida administradas por nuevos administradores privados de los fondos de pensiones.

81. A fin de lograr estos objetivos, el gobierno procederá a: i) dictar las normas y reglamentaciones pertinentes para reestructurar el sistema actual; ii) establecer mecanismos para servirse de los administradores privados de los fondos de pensiones como posibles instrumentos de distribución de acciones correspondientes a la capitalización; iii) asegurar, para marzo de 1996, la sanción de una ley de fondos de pensiones por la que se establezca la reforma del sistema de pensiones, y iv) iniciar un programa de fortalecimiento de la Superintendencia de Pensiones. Las principales reglamentaciones de la ley que se dictarán abarcarán los siguientes temas: i) requisitos y procedimientos de entrada y funcionamiento; ii) límites a las inversiones de cartera, clasificaciones y valuaciones, y iii) determinación de beneficios y normas técnicas. Estableceremos una Superintendencia de Pensiones a fin de vigilar el cumplimiento de la nueva legislación, incluida la adopción de las siguientes medidas: i) nombramiento del Superintendente y los

principales funcionarios; ii) desarrollo de actividades de capacitación, e iii) instalación de los equipos y sistemas necesarios.

Reforma del sector de seguros

82. Creemos que la mejora de las reglamentaciones y la supervisión del sector de seguros puede: i) proporcionar más opciones de seguros individuales y combinados comerciales; ii) ayudar a crear un instrumento de ahorro a largo plazo; iii) asegurar que los jubilados, discapacitados y sobrevivientes puedan hacer inversiones eficientes con los beneficios jubilatorios, y iv) fortalecer a las instituciones del sector. A tal fin, el gobierno volverá a presentar ante el Congreso una Ley de Seguros. Se prevé que la sanción de la ley y la promulgación de las principales reglamentaciones tendrán lugar en marzo de 1996. Con esta ley se reforzarán las normas por las que se rigen las compañías de seguro y el organismo regulador. Se promulgarán las principales reglamentaciones relativas a los siguientes aspectos, a saber: i) entrada de compañías de seguro y reaseguro nacionales y extranjeras; ii) procedimientos de supervisión, y iii) parámetros de inversión. También están en marcha medidas encaminadas a fortalecer la capacidad y aumentar la eficiencia de la Superintendencia de Seguros, las que asegurarán que cuente con el personal, equipos, sistemas y presupuesto necesarios para hacer cumplir la nueva ley y sus reglamentaciones.

Reforma del Banco Central

83. El gobierno está empeñado en mejorar y fortalecer al Banco Central en su calidad de autoridad máxima del sector financiero, incluida su responsabilidad por el programa de política monetaria de Bolivia. A fin de lograr sus objetivos en esta esfera, se ha presentado ante el Congreso la Ley Orgánica del Banco Central, en la que se prevé lo siguiente: i) una definición clara de la función del Banco Central; ii) disposiciones que aseguran la independencia del directorio y el presidente de la institución; iii) la autonomía presupuestaria y financiera; iv) los medios por los cuales el Banco Central puede afectar la política monetaria, incluidas las facultades para establecer el encaje legal y realizar operaciones de mercado abierto; v) la función del Banco Central como encargado de prestar apoyo para fines de liquidez dentro de los límites del programa monetario, y iv) la aclaración de que el Banco Central deberá promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros valiéndose de mecanismos competitivos de mercado.

84. El gobierno también está empeñado en la reforma de la estructura financiera y orgánica del Banco Central, a fin de que cumpla eficazmente la función que le cabe en virtud de la Ley Orgánica del Banco Central. A tal efecto, el Directorio de esta institución emprendió un programa de reestructuración que comprende medidas encaminadas a: i) reestructurar financieramente la institución de manera de facilitar la autonomía financiera sostenible; ii) modificar el sistema contable; iii) establecer un sistema financiero y de información para la administración integrado;

iv) fortalecer las funciones jurídicas y de auditoría interna; v) formular descripciones de cargos y exámenes de ingreso para la mayoría de los puestos de empleo, con arreglo a las modificaciones de la estructura orgánica, y vi) formular nuevas directrices relativas a la contratación y promoción del personal y los procedimientos.

85. En reconocimiento de la importancia de una intermediación eficiente de los créditos de fomento proporcionados por instituciones extranjeras para beneficiarios del sector privado, el gobierno adoptará medidas para crear una institución financiera autónoma de importancia secundaria. El gobierno designará a dicha institución como instrumento exclusivo para encauzar el crédito bancario con garantía pública al sector privado, por intermedio del sector financiero. Además, se formulará y aplicará un programa de fortalecimiento de esa institución de importancia secundaria. Se prevé que para mediados de 1995 esta institución estará en pleno funcionamiento, con su estructura orgánica, dotación de personal, procedimientos y administración en marcha.

Ejecución del proyecto

86. Se ha designado a una pequeña unidad responsable ante el Ministro de Finanzas encargada de la administración del préstamo y la coordinación con los organismos públicos pertinentes. La unidad será responsable de: i) preparar la información necesaria para certificar y supervisar cada etapa de la tramitación del préstamo, y ii) asegurar que los fondos se desembolsen con arreglo a los procedimientos de la AIF.

Conclusión

87. El programa descrito constituye un cambio fundamental de la estrategia de desarrollo de Bolivia. Las reformas entrañarán un esfuerzo considerable por parte de la población de Bolivia y generará ajustes importantes a medida que Bolivia modernice su economía y establezca las bases del desarrollo futuro impulsado por el sector privado. El gobierno considera que el apoyo oportuno de la AIF y del BID será vital para ayudar a consolidar las reformas y asegurar su éxito. El apoyo en forma de un crédito para fines de ajuste sectorial así como de asistencia técnica en el marco de varios proyectos de la AIF y del BID permitirá al gobierno allanar el proceso de ajuste y generar un crecimiento económico firme.

Ministro de Capitalización

Ministro de Finanzas

de la República de Bolivia

Bolivia - Operación para fines de ajuste del programa de capitalización

Matriz de política propuesta

Ámbito/Objetivos	Medidas adoptadas hasta la fecha	Primera columna Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo
-------------------------	---	--

Segunda columna Condiciones del tramo flotante	Parte
---	--------------

C. POLÍTICA MACROECONÓMICA

Política macroeconómica	Matriz de política de desarrollo en la que se enuncian las políticas que se aplicarán en el marco del programa suscripto por el Ministro de Finanzas y el Ministro de Capitalización.	Mantenimiento de un marco macroeconómico sólido que guarde armonía con los objetivos del programa. Cumplimiento de los objetivos de política y los programas descritos en la matriz de política de desarrollo.
-------------------------	---	---

Mantenimiento de un marco macroeconómico sólido que guarde armonía con los objetivos del programa. Cumplimiento de los objetivos de política y los programas descritos en la matriz de política de desarrollo.	A
---	---

Nota sobre la condicionalidad de la operación propuesta

Antes del desembolso del tramo siguiente se requeriría el cumplimiento de las condiciones de la auditoría

Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo deberían cumplirse todas las condiciones enunciadas en la primera columna

A los fines del tramo flotante para la capitalización general deberían cumplirse todas las condiciones enunciadas en las partes A y B de la segunda columna

A los fines del tramo flotante para el sector de hidrocarburos deberían cumplirse todas las condiciones enunciadas en las partes A y C de la segunda columna

A los fines del tramo flotante para el sector financiero deberían cumplirse todas las condiciones enunciadas en las partes A y D de la segunda columna.

Ambito/Objetivos	Medidas adoptadas hasta la fecha	Primera columna Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo
------------------	----------------------------------	--

Segunda columna Condiciones del tramo flotante	Parte
---	-------

II. CAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y REFORMAS SECTORIALES

A. Programa de capitalización		<p>Sanción por el Congreso de la Ley de Capitalización.</p> <p>Establecimiento de una estructura para coordinar y dirigir el proceso de capitalización.</p> <p>Aprobación de una estrategia para transferir parte de la propiedad de las principales empresas públicas a los ciudadanos de Bolivia.</p>
B. Establecimiento del marco reglamentario general	Redacción de las reglamentaciones de la ley del SIRESE	Sanción por el Congreso de una ley sobre el marco reglamentario (SIRESE).
C. Régimen tributario		Sanción por el Congreso de la modificación de la Ley Tributaria 843 por la que se establezca un nuevo régimen de impuestos a las sociedades.

Dictado de la reglamentación del procedimiento de licitación pública de las empresas que se capitalizarán con arreglo a la Ley de Capitalización.	B
Promulgación de las principales reglamentaciones de la ley del SIRESE y nombramiento del Superintendente General.	B
Promulgación de las principales reglamentaciones necesarias para la puesta en práctica del nuevo régimen de impuestos a las sociedades establecido en la modificación de la Ley Tributaria 843.	B

Ambito/Objetivos	Medidas adoptadas hasta la fecha	Primera columna Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo
------------------	----------------------------------	--

D. Reestructuración y capitalización del sector de telecomunicaciones	Cumplimiento del plan estratégico para el sector. Contratación de los servicios de bancos de inversión para ENTEL.	Presentación ante el Congreso de una nueva ley de telecomunicaciones. Aprobación del plan para recapitalizar los servicios locales y capitalizar a ENTEL.
E. Reestructuración y capitalización del sector de electricidad	Redacción de reglamentaciones, contratos de concesiones y de administración. Terminación de la auditoría ambiental.	Sanción por el Congreso de la Ley de Electricidad. Contratación de los servicios de asesores financieros y bancos de inversión para preparar a la ENDE para su privatización. Aprobación de la estrategia para capitalizar a la ENDE.
F. Reestructuración y capitalización del sector metalúrgico y minero	Realización del análisis de las principales minas. Terminación de la auditoría ambiental.	Aprobación de un proyecto de modificación de la Ley de Minería con el objeto de despertar un mayor interés por parte de los inversionistas a largo plazo en el sector. Aprobación de una estrategia para capitalizar a la EMV y otros activos mineros. Contratación de los servicios de asesores y bancos de inversión para preparar, para su capitalización, a la EMV y otros activos mineros, con derechos de concesión de minas a largo plazo.

Segunda columna Condiciones del tramo flotante	Parte
---	-------

Sanción por el Congreso de una nueva ley de telecomunicaciones. Promulgación de las principales reglamentaciones para aplicar la ley, incluidas estructuras nuevas de tarifas e interconexiones. Llamada a licitación por parte del gobierno para la capitalización de ENTEL. Creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que funcionará en el marco del SIRESE, dotándola de personal y encargándole la responsabilidad de la adjudicación y supervisión de las concesiones y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones.	B
Promulgación de las principales reglamentaciones de la Ley de Electricidad. Creación de la Superintendencia de Electricidad, que funcionará en el marco del SIRESE, dotándola de personal y encargándole la responsabilidad de la adjudicación y supervisión de las concesiones y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones.	B
Sanción por el Congreso de la modificación de la Ley de Minería.	B

Ambito/Objetivos	Medidas adoptadas hasta la fecha	Primera columna Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo
G. Reestructuración y capitalización del sector de hidrocarburos	Sanción de la Ley de 1990 por la que se permite la entrada en todas las etapas de la producción (especialmente en las operaciones de elaboración secundaria).	<p>Aprobación de un proyecto de Ley de Hidrocarburos.</p> <p>Sanción por el Congreso de la modificación a la Ley Tributaria 843 a fin de establecer un nuevo régimen tributario aplicable a los combustibles líquidos con el objeto de reestablecer la transparencia de precios y estimular la competencia en las operaciones de elaboración secundaria.</p> <p>Acuerdo acerca de los principios por los que se regirá la capitalización de YPFB.</p>

Segunda columna Condiciones del tramo flotante	Parte
<p>Sanción por el Congreso de una nueva ley de hidrocarburos y promulgación de las principales reglamentaciones de dicha ley.</p> <p>Promulgación de las principales reglamentaciones para la aplicación de los nuevos impuestos indirectos sobre los productos derivados del petróleo establecidos en la modificación de la Ley Tributaria 843.</p> <p>Creación de los organismos reguladores y de otra índole, dotándolos de personal y encargándoles la función de adjudicar y supervisar las concesiones y vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones.</p> <p>Aprobación de una estrategia para capitalizar a YPFB.</p> <p>Emisión de los documentos de licitación para la capitalización de por lo menos el 30% de YPFB (excluidas las partes de YPFB que habrán de privatizarse).</p>	C

Ámbito/Objetivos	Medidas adoptadas hasta la fecha	Primera columna Antes de la presentación ante el Directorio Ejecutivo
------------------	----------------------------------	--

Segunda columna Condiciones del tramo flotante	Parte
---	-------

III. MARCO DEL SECTOR FINANCIERO

A. Desarrollo de los mercados de valores	Redacción del proyecto de Ley de Valores y prestación de asistencia técnica para fortalecer a la Comisión Nacional de Valores.	
B. Reforma de las pensiones	Redacción de la ley por la que se establezca un sistema de cuentas de ahorro de los fondos de pensiones. Realización de estudios de los fondos existentes. Acuerdo acerca de los principios básicos del nuevo sistema de pensiones.	
C. Reforma del sector de seguros	Acuerdo en torno al proyecto de Ley de Seguros.	

Sanción de la Ley de Valores y promulgación de las principales reglamentaciones. Fortalecimiento de la Superintendencia de Valores, a los fines de la supervisión del cumplimiento de la Ley de Valores y sus reglamentaciones.	D
La apertura de cuentas de ahorro sin aportación, para la distribución de las acciones correspondientes a la capitalización. Promulgación de las principales reglamentaciones. Creación de un organismo regulador, dotándolo de personal, a fin de que supervise el cumplimiento de las reglamentaciones sobre pensiones.	D
Sanción de la Ley de Seguros y promulgación de las principales reglamentaciones. Fortalecimiento de la capacidad de la Superintendencia de Seguros para supervisar el cumplimiento de la Ley de Seguros y sus reglamentaciones.	D

PLAN DE OPERACIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA
PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL
DE POBLACIÓN EN BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO Y GARANTE:	La República de Bolivia		
ORGANISMO EJECUTOR:	Ministerio de Gobierno		
MONTO Y FUENTE:	BID:	US\$12.000.000, con cargo a los recursos del FOE	
	Local:	US\$ 2.000.000	
	AIF (IDA):	US\$ 2.000.000	
	Total:	US\$16.000.000	
PLAZOS Y CONDICIONES:	Plazo de amortización:	40 años	
	Período de desembolso:	3 años	
	Período de gracia:	10 años	
	Tipo de interés:	1% durante los 10 primeros años y 2% de ahí en adelante	
	Inspección y vigilancia:	1%	
OBJETIVOS:	Colaborar con el gobierno de Bolivia en la organización del Registro Único Nacional de población (RUN). Para cumplir su objeto, las actividades del proyecto procuran, de manera específica:		
	1. Dotar de carné de identidad a todos los bolivianos.		
	2. Generar una "Base de Datos" que contenga información de carácter civil y social, de toda la población de Bolivia.		
	3. Establecer un sistema de información y estadísticas a partir de la base de datos.		
DESCRIPCIÓN:	En el área rural se continuarían las actividades de registro y expedición del carné de identidad hasta diciembre de 1996.		

En el área urbana, las actividades preparatorias están en curso. El preregistro universal se realizaría a partir de julio de 1995 hasta mayo de 1996 mediante el trabajo de brigadas de registradores con entrevistas directas en las viviendas. La expedición de carnés de identidad con una tecnología moderna se iniciaría en enero de 1996 y concluiría en diciembre del mismo año.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Antecedentes

- 1.1 El Registro Único Nacional, en adelante denominado "RUN", fue establecido mediante el Decreto Supremo 22601 del 20 de septiembre de 1990 y el Decreto Supremo 22786 del 25 de abril de 1991, ambos con fuerza de ley, en virtud de la Ley 1245 de julio de 1991.
- 1.2 La implantación del RUN tenía un plazo de cinco años, lo que significaba que el proyecto terminaría el 19 de septiembre de 1995, pero se está tramitando la extensión del plazo por dos años más. El RUN se inició con la cooperación del Reino de España mediante un crédito de US\$3 millones, que fue destinado a la adquisición de equipos de cómputo y de vehículos.
- 1.3 El RUN cumple un papel importante en el marco de la capitalización de las seis empresas del Estado y de la reforma de pensiones. La base de datos del RUN se utilizaría como fuente principal para iniciar el proceso de distribución de acciones a todos los bolivianos, mayores de 21 años en diciembre de 1995.

B. Organismo ejecutor

- 1.4 El organismo ejecutor del proyecto sería el Ministerio de Gobierno, por conducto de la unidad ejecutora que se establecería para el efecto, con la participación de representantes del Ministerio de Capitalización; de la Corte Electoral, de la cual depende el registro civil y los padrones electorales; así como del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El proyecto es parte del plan global del gobierno nacional, que tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, a partir de la capitalización de las seis empresas estatales más importantes del país.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

2.1 Los objetivos generales del proyecto son:

- a. Dotar de carné de identidad a todos los bolivianos.
- b. Generar una "Base de Datos" que contenga información de carácter civil y social, de toda la población de Bolivia, teniendo en cuenta la definición de población rural y urbana del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
- c. Establecer un sistema de información y estadísticas a partir de la base de datos.

B. Objetivos específicos

2.2 De manera específica, mediante la realización del proyecto se obtendrá:

- a. El registro universal de la población urbana y rural.
 - (i) Población urbana (58%): 4,4 millones de habitantes
 - (ii) Población rural (42%): 3,0 millones de habitantes
- b. La dotación de documento de identidad definitivo a las personas mayores de 16 años, expidiendo distintos documentos provisorios a los menores.
 - (i) Documentados en la zona rural: 45%
 - (ii) Documentados en la zona urbana: 80%

2.3 En el trabajo del RUN se preparará un banco de datos que serviría de base para el Registro Civil y los padrones electorales. Asimismo, este banco de datos sería mantenido con el registro de nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.; y así contendría los bases estadísticos para el censo y los varios programas sociales del gobierno.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A. Actividades

3.1 El proyecto para la implantación del Registro Único Nacional comprende las varias actividades en las áreas rural y urbana.

1. Área rural

- 3.2 Para comenzar el proceso se prevé un período de un mes para capacitar a las unidades móviles del RUN, dar mantenimiento a los sistemas de comunicación y brindar servicios de reacondicionamiento al equipamiento de las brigadas y materiales de campo. Se prevé el siguiente calendario operativo para la iniciación de trabajos:

Julio 1995	comienzo	Beni, Pando
Julio 1995/ julio 1996	comienzo	Cochabamba, Santa Cruz
	compleción	Potosí, Chuquisaca, Tarija
Enero/julio 1996	trabajos complementarios si fueran necesarios	La Paz, Oruro, Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba

- 3.3 Actualmente, en las áreas cubiertas por el RUN se ha registrado y expedido documento de identidad sólo a mayores de 16 años de edad. Para completar el registro universal de esta población se necesitará nuevas visitas a las áreas registradas que se pueda realizar en un plazo de seis meses. El registro universal aumentaría al doble, pero se realizaría el registro de los menores simultáneamente con los demás miembros de las familias, lo que implica poco costo adicional.

2. Área urbana

- 3.4 En una primera fase, se ha previsto un preregistro universal de la población basado en el lugar de residencia habitual, registrando nombres, fechas de nacimiento y sexo de las personas. Este trabajo se podría concluir en un término de once meses, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- 3.5 Se realizarían campañas publicitarias dos semanas antes de empezar cualquier actividad a nivel departamental mediante radio, televisión y afiches.
- 3.6 Se realizaría la capacitación, selección y contratación del personal de campo, es decir, los supervisores de campo, registradores y personal de apoyo administrativo.
- 3.7 El período de preregistro, como se ha señalado, tendría una duración de once meses. Las actividades para la expedición de documento de identidad empezarían en cuanto se cuente con los

equipos, que se estima sea para el mes de noviembre de 1995; estas actividades también tendrían una duración aproximada de once meses.

- 3.8 A medida que se tengan los datos del registro de población, se verificaría la legibilidad y cabalidad de la información en el terreno, luego se enviarían los formularios a la oficina central, donde se realizaría la transcripción en el centro de procesamiento de datos y se actualizaría la base de datos en forma permanente.
- 3.9 Se procedería a verificar y complementar la base de datos del pre-registro con los datos de las tarjetas de la Dirección Nacional de Identificación Personal.
- 3.10 Se procedería a la instalación y prueba de la red de equipos de computación en cada capital de departamento, los cuales estarán comunicados con el equipo central en la ciudad de La Paz.
- 3.11 Recolectados los datos de las personas y verificados en lo posible con los de los registros existentes, se emitiría un informe de estos datos y se pediría la aprobación del mismo al interesado. Posteriormente, se emitiría por computadora el carné, con una fotografía de la persona, tomada en forma instantánea, usando la experiencia de expedición de documento en las etapas anteriores. Finalmente, se procedería a la plastificación del carné y a su entrega al ciudadano.
- 3.12 Cada día se enviaría vía red de comunicación datos de las personas con carné de identidad al computador central, para evitar que una persona obtenga más de un carné en diferentes departamentos, y también se enviaría de la central a cada departamento un archivo de referencia de los carnés emitidos.

B. Administración y ejecución

- 3.13 El organismo ejecutor del programa sería el Ministerio de Gobierno. Para el ejercicio de sus funciones el organismo ejecutor establecería una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), responsable de la administración del programa, a cargo del Director del RUN o de un coordinador con las calificaciones y experiencia adecuadas para este tipo de tarea.
- 3.14 La UEP atendería todo lo relacionado con la programación, organización, coordinación, seguimiento y control del proyecto, en especial en lo atinente a los llamados a licitación, propuestas de modificación de términos de referencia, verificación de avance de las tareas, autorización de pagos, producción de informes, coordinación de consultores, funcionarios del gobierno y entes vinculados directa o indirectamente al programa. Los gastos que demande el funcionamiento de la UEP podrán ser cubiertos con los fondos de la contrapartida local.

- 3.15 La adquisición de bienes y servicios y la contratación de consultores se efectuará de acuerdo con los procedimientos del Banco sobre la materia.
- 3.16 En los casos en los que los procedimientos del Banco permiten la utilización de la legislación local, las adquisiciones y contrataciones se efectuarían mediante las Normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. La unidad administradora de dicho sistema cuenta con experiencia en la aplicación de los correspondientes políticas y procedimientos del Banco.
- 3.17 Antes del primer desembolso del financiamiento, el organismo ejecutor debería presentar al Banco: a) evidencia de haber establecida la Unidad Ejecutora del Programa (UEP); b) el plan de acción del proyecto, con el detalle para el primer año de las contrataciones de servicios de consultoría y de las demás actividades del proyecto, los términos de referencia y los cronogramas correspondientes; c) evidencia de la extensión del plazo de ejecución del RUN; y d) el calendario de ejecución del proyecto (tipo CPM).
- 3.18 En el área rural se continuará las actividades de registro y de expedición de carnés hasta aproximadamente diciembre de 1996. Se ha previsto la realización de un plan de aceleración del trabajo e registro, mediante la incorporación de 50 brigadas móviles.
- 3.19 La exitosa conclusión del trabajo en el área rural está condicionada a la aprobación de una ley de excepción para el registro legal de los nacimientos de las personas indocumentadas. De no obtenerse dicha Ley, el trabajo se extendería por más de dos años a partir de 1995.
- 3.20 En el área urbana, las actividades preparatorias están en curso. El preregistro universal se realizaría mediante el trabajo de brigadas de registradores con entrevistas directas en las viviendas. La expedición de documentos de identidad se iniciaría en enero de 1996 y concluiría en once meses.

C. Desembolsos

- 3.21 Los desembolsos se efectuarían de acuerdo con los procedimientos del Banco sobre la materia. El período de desembolsos será de 36 meses.

D. Supervisión

- 3.22 A partir de la iniciación del programa, el organismo ejecutor debería presentar al BID informes de progreso semestrales que permitan efectuar un adecuado seguimiento del programa. Los informes deberán contener: i) el avance de las actividades previstas en el programa; ii) el avance de los desembolsos en

relación con lo previsto y las erogaciones realizadas, imputables a la contrapartida; iii) un resumen de las recomendaciones de los consultores contratados con recursos del programa; iv) las propuestas de cambio o adaptaciones del programa que el organismo ejecutor considere necesarias, que pueden incluir tanto modificaciones en los plazos como en los rubros de contratación; y v) un resumen de las actividades que deban realizarse en el semestre siguiente.

- 3.23 Dentro de los seis meses siguientes a la finalización del programa, el organismo ejecutor presentará un informe final con un sumario de las actividades desarrolladas; el destino de los gastos realizados con recursos del proyecto; los resultados alcanzados; las decisiones adoptadas como consecuencia del programa, y los resultados que se espera obtener a raíz de las mismas. Igualmente, en el convenio de cooperación técnica se pactará la obligación del organismo ejecutor de presentar los estados financieros del programa, determinados por auditores independientes, aceptables para el Banco y de acuerdo con normas satisfactorias para éste.

E. Gastos anteriores a la firma del convenio

- 3.24 Con la aceptación del Banco, se podrán reembolsar los gastos que se efectúen con cargo al programa a partir del 1 de enero de 1995 y hasta la fecha de suscripción del convenio de financiamiento, hasta por el equivalente de US\$4.000.000. Asimismo, el Banco podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos que se efectúen en el programa a partir del 1 de enero de 1995 y hasta la fecha de suscripción del convenio de financiamiento, hasta por el equivalente de US\$1.000.000.

IV. BENEFICIOS, RIESGOS Y JUSTIFICACIÓN

A. Beneficios

- 4.1 Una vez que el preregistro de la población urbana y rural sea terminado, se contará con un banco de datos electrónico que facilitará la obtención de información por parte de los organismos legalmente autorizados.
- 4.2 Durante la etapa del preregistro, se contará con equipo que en última instancia será utilizado para mantener una constante actualización de los datos de identificación.

B. Riesgos

- 4.3 La exitosa conclusión del trabajo en el área rural está condicionada a la aprobación una ley que simplifique los requisitos para el registro legal de las personas indocumentadas. De no obtenerse

dicha ley, se corre el riesgo de extender el trabajo por más de dos años a partir de 1995.

- 4.4 El rendimiento de registros y expedición de carnés a la población rural puede mantenerse en menos del 50%, lo cual extendería el plazo de entrega del banco de datos correspondiente.
- 4.5 Existe el riesgo general de demora en las adquisiciones y la ejecución del programa. La contratación de los consultores para organizar el proceso y la aplicación de la nueva Sistema de Administración de Bienes y Servicios disminuye sustancialmente dicho riesgo.

C. Justificación

- 4.6 En caso de no efectuarse los objetivos del RUN, no se tendría el banco de datos para la distribución de acciones a todos los bolivianos.
- 4.7 Además, el país no contaría con sistema computadorizado para el suministro de información de toda la gente que recibió el carné de identidad.
- 4.8 La población dispersa de las regiones rurales de Bolivia carece, en muchas poblaciones, de un registro apropiado. Sin el RUN, estas poblaciones corren el riesgo de ser excluidas totalmente de los distintos programas del gobierno.

V. PRESUPUESTO POR RUBROS DE GASTOS

- 5.1 El programa tiene un costo total del equivalente de aproximadamente US\$16 millones como se aprecia en el cuadro siguiente.

COSTO TOTAL

Partida	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO			
		BANCO	AIP	APORTE LOCAL	TOTAL
1.	Gastos de personal			400.000	400.000
2.	Consultores	6.800.000		1.000.000	7.800.000
3.	Equipos	3.600.000	2.000.000	470.000	6.070.000
4.	Gastos Financieros				
	4.1 Comisión de crédito			120.000	120.000
	4.2 Intereses	175.000			175.000
	4.3 Inspección y Vigilancia			120.000	120.000
5.	Imprevistos	1.600.000		130.000	1.730.000
TOTALES		12.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000

REFORMA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS PROPUESTA

El gobierno está comprometido a realizar una reforma general del régimen jurídico, institucional y normativo que regula el sector de hidrocarburos de Bolivia. Sus metas globales son captar inversiones externas para el sector a fin de incrementar la base de reservas, promover una mayor eficacia y maximizar los beneficios económicos a largo plazo. Para lograr estos objetivos se presentará al parlamento una nueva ley de hidrocarburos, iniciativa que se fundamentará en los principios siguientes:

- a. **Libre competencia**, incluida la eliminación de todos los monopolios artificiales y del tratamiento preferencial, y la reglamentación adecuada de los monopolios naturales.
- b. **Derechos de libre disposición** del petróleo crudo, gas natural y derivados, incluida la libertad para importar y exportar. (La ley no debiera incluir los requisitos especiales que los contratistas deben satisfacer en las ventas de gas al Brasil).
- c. **Liberalización de precios**, salvo en el caso de los monopolios naturales, donde podría necesitarse una reglamentación (por ejemplo para los precios de acceso a los oleoductos).
- d. **Introducción de un régimen fiscal** para operaciones iniciales que sea competitivo con los de otras naciones de la región, pero que a la vez satisfaga las necesidades fiscales de Bolivia. Se calcularía el impuesto sobre las utilidades para poder optar a los descuentos tributarios estadounidenses; las exploraciones nacionales y las actividades productivas se consolidarían a fin de calcular el ingreso neto; y las cancelaciones en libros se basarían en el valor inicial en dólares de los Estados Unidos.
- e. **Eliminación de barreras directas e indirectas** para el ingreso, incluido el uso limitado de concesiones para dirigir las actividades del sector. Casi todas las actividades del sector estarían abiertas a cualquier interesado, sujetas al cumplimiento de las normas y estándares técnicos, de seguridad y ambientales. Las concesiones se aplicarían solo para:
 - (i) exploración y producción;
 - (ii) transporte por oleoducto, y
 - (iii) distribución de gas natural por gasoducto
- f. **Acceso abierto a los oleoductos** para terceros, sujeto sólo al pago de una tarifa no discriminatoria.

- g. **Flexibilidad en acuerdos contractuales para exploración y producción**, con adjudicación de los contratos según la capacidad técnica y financiera del inversionista y los compromisos mínimos de trabajo.
- h. **Definir la jurisdicción de la Superintendencia de Hidrocarburos en el Sistema de Reglamentación Sectorial (SIRESE)**, que debiera incluir: i) todos los aspectos de distribución del gas natural por gasoductos; ii) administración del acceso y las tarifas de los oleoductos; y iii) control y sanción de las conductas anticompetitivas en el sector.
- i. **Crear una entidad independiente para promover inversiones de exploración, negociar y administrar los contratos de exploración y producción, dirigir la unidad del banco de datos sobre exploración y producción, asumir los derechos y las obligaciones estatales de los actuales y futuros contratos de operaciones; y vigilar los compromisos mínimos de los inversionistas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) capitalizado.**
- j. **Ausencia de controles en los reembolsos al exterior por concepto de ingresos de venta, sean locales o extranjeros.**
- k. **Estabilidad de los regímenes tributario y cambiario durante la duración de los contratos de exploración y producción, o que las modificaciones sean aceptadas por el contratista.**
- l. **Disposiciones que permitan la capitalización de YPFB.** Esta entidad recibirá el mismo tratamiento que otros inversionistas, pudiendo celebrar contratos con el estado para la exploración y/o producción en áreas bajo tutela fiscal, si las hay, y recibir concesiones por sus oleoductos. Si YPFB capitalizado no recibiera contratos para áreas de exploración, éstos pasarán a manos del Estado, que asumirá la responsabilidad de las funciones del sector público que en la actualidad desempeña YPFB.
- m. **Se respetarán los contratos de operaciones existentes y a los concesionarios se les ofrecerá la opción de libre disposición del gas natural y de los hidrocarburos líquidos.**
- n. **Se especificará la responsabilidad para los estándares ambientales.**

BOLIVIA: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LEY DE PENSIONES PROPUESTA

I. Estructura del sistema

- 1.1 El sistema se financiará y basará en cuentas de capitalización individuales.
- 1.2 Habrá dos tipos de fondos y de cuentas. Un fondo (activo) administrará las contribuciones mensuales de sus participantes. El otro fondo (pasivo) administrará las acciones de la capitalización para sus participantes. Los ejecutivos que manejen el fondo activo podrán optar a la administración de los fondos pasivos, además de la gestión de los valores de sus miembros activos.
- 1.3 Los fondos serán administrados privadamente por empresas autorizadas administradoras de fondos de pensiones (AFP). Los fondos estarán jurídica y financieramente separados de las AFP y de sus capitales.
- 1.4 La incorporación a una AFP será de carácter individual y ninguna AFP puede rechazar un miembro que califique según la ley.
- 1.5 Los contribuyentes podrán cambiar sin costos sus cuentas entre las AFP.
- 1.6 Las contribuciones serán obligatorias para todos los trabajadores con contrato de trabajo y voluntarias para los trabajadores independientes. A ningún participante en el sistema se le obligará a contribuir en sistemas previos.
- 1.7 La participación en el sistema nuevo estará abierta a todos los trabajadores, sean dependientes o independientes, y será obligatoria para todos aquellos con un contrato de trabajo.
- 1.8 Los trabajadores que se transfieran al sistema en los primeros tres años calificarán para un bono que reconocerá sus contribuciones al sistema antiguo.
- 1.9 Las AFP administrarán exclusivamente fondos de pensiones. Podrán libremente subcontratar las actividades que se requieran para proporcionar sus servicios.
- 1.10 Las contribuciones y comisiones de los trabajadores no se contabilizarán en su base impositiva. Los fondos de pensiones y sus dividendos no son imponibles.

II. Beneficios

- 2.1 Los beneficios de ancianidad serán calculados de acuerdo a los contribuciones aportadas.
- 2.2 Las pensiones de invalidez y de supervivencia son beneficios definidos, financiados por medio de contribuciones y de un seguro.
- 2.3 Las AFP no incurrirán en riesgos actuariales y reasegurarán cualquier riesgo que asuman en sus actividades aseguradoras.
- 2.4 Los requisitos para los beneficios en términos de edad, tiempo de participación, sueldo básico y número de contribuciones serán armonizados entre los diferentes sistemas. Este proceso será realizado en un plazo de cinco años.
- 2.5 Los beneficios del sistema antiguo no se aumentarán sin incrementar los aportes a fin de mantener un equilibrio contable.

III. Competencia

- 3.1 Las AFP establecerán libremente sus comisiones por concepto de administración y honorarios de seguro. Las comisiones y honorarios fijados por una AFP deben ser uniformes y no discriminatorios.
- 3.2 Los valores de los fondos serán publicados diariamente y las AFP garantizarán la liquidez de los fondos al valor cotizado.
- 3.3 Cada fondo de pensión se integrará con las cuentas individuales que representan una acción en el fondo total. Así, todas las cuentas en una AFP tendrán la misma cartera de inversiones.
- 3.4 Los empleados retendrán sus contribuciones y las AFP serán responsables de recaudarlas.

IV. Reglamentación

- 4.1 Las AFP serán reglamentadas y supervisadas por una sola entidad fiscalizadora, que será jurídica y operativamente independiente.
- 4.2 Existirá una reglamentación y una supervisión estrictas que garantizará que los fondos de pensiones son invertidos en forma prudente y rentable. La ley sólo determinará los límites máximos de las inversiones, y la ley o el reglamento fijará límites prudentes por tipo de instrumento, emisor y emisiones específicas.
- 4.3 Los límites de inversiones no discriminarán contra inversiones externas de las AFP.
- 4.4 La ley también especificará las relaciones directas, indirectas o de propiedad mixta con AFP que descalifiquen instrumentos de

inversión, a fin de minimizar los conflictos de interés. También determinará las instituciones del sector financiero cuyas acciones no pueden ser adquiridas por los fondos de pensiones.

- 4.5 Los directores y gerentes de las AFP, así como sus accionistas, no podrán vender instrumentos financieros de su propia cartera al fondo de pensión, ni comprar sus instrumentos.
- 4.6 Se requerirá que las AFP coinviertan el 1% del monto del fondo de pensión. También habrá un capital mínimo nominal.
- 4.7 Las inversiones de las AFP serán limitadas a una lista de instrumentos que devengan intereses fijada por la entidad fiscalizadora. Las inversiones en acciones serán restringidas a compañías necesarias para las actividades de las AFP.
- 4.8 Se requerirán auditorías externas por lo menos semestralmente. En la medida de lo posible la supervisión se delegará en empresas auditoras externas, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de reglamentos, adecuación de arreglos de custodia y registros contables.
- 4.9 La clasificación de riesgo de los instrumentos será realizada por empresas privadas y su clasificación será aceptada o rechazada por la entidad fiscalizadora.

V. Transición

- 5.1 Se aplicará un incentivo financiero para el cambio al sistema nuevo.
- 5.2 Las AFP, los fondos de pensiones y las contribuciones no se gravarán para financiar el sistema antiguo.
- 5.3 Las contribuciones al sistema antiguo se incrementarán a fin de equiparar los aportes y comisiones que se esperan para el sistema nuevo.
- 5.4 El cambio al sistema nuevo será irreversible.

ESTUDIOS PARA LA PREPARACION DE UN
PLAN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y REHABILITACION DE LAS AREAS MINERAS

RESUMEN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

I. OBJETIVOS Y DIRECTRICES

- 1.1 Estos términos de referencia establecen las bases y condiciones de ejecución de estudios para la preparación de un Plan para el Desarrollo Social y Rehabilitación de las Areas Mineras. Los estudios serán realizados por un equipo multidisciplinario de expertos y profesionales, a ser contratado y supervisado por el Banco con cargo a los fondos de cooperación técnica (CTFondos).
- 1.2 Los estudios tienen como finalidad la preparación de un Plan que, de forma articulada al proceso de capitalización, permita alcanzar los siguientes objetivos:
 - a. Dar una respuesta inmediata a la crisis social y económica que afecta a los centros mineros.
 - b. Promover el desarrollo económico y social en las áreas mineras deprimidas, potenciando sus actividades productivas, de forma coherente con las reformas estructurales y los principios del nuevo modelo de país buscado por el gobierno nacional.
 - c. Garantizar la continuidad de la actividad minera cooperativa, en mejores bases técnicas y económicas, como forma de asegurar la estabilidad social en la región.
 - d. Delinear el camino para soluciones más permanentes, sostenibles del punto de vista social, económico y ambiental.
 - e. Propiciar condiciones favorables al éxito de la capitalización del sector minero-metalúrgico.
- 1.3 El Plan debe seguir los principios básicos siguientes que delinear el rumbo pretendido:
 - a. Establecer de manera concertada, formas de convivencia de la operación minera empresarial (en gran escala, objeto de la capitalización) con la actividad cooperativa, ambas compatibilizadas con el control de la contaminación ambiental, así como también con las empresas mineras de pequeña y mediana escala.
 - b. Estimular la iniciativa empresarial y las nuevas formas de organización productiva que han surgido con la crisis, rompiendo gradualmente con los factores que llevaron al colapso del modelo anterior.
 - c. Favorecer un aumento gradual de la eficiencia económica de las operaciones mineras artesanales, como base de su supervivencia, inclusive a corto plazo.

- d. Incentivar la responsabilidad, la iniciativa y la autosuficiencia de las personas, empresas, cooperativas e instituciones, evitando el paternalismo estatal.
- e. Viabilizar el inicio de la recuperación ambiental en la minería y el encuadramiento del sector en la nueva normatividad.
- f. Permitir la transición al nuevo modelo, evitando costos sociales y ambientales y buscando, por el contrario, aprovechar la reestructuración económica para avanzar en la solución de problemas seculares y difundir sus beneficios a nivel regional y social.
- g. Tener una adecuada fundamentación técnica y el respaldo político de su discusión y aceptación por parte de los principales sectores involucrados.

1.4 De forma más específica, el Plan será orientado por las siguientes directrices:

- a. Buscar un equilibrio en la asignación de áreas de explotación mineral entre grandes empresas y cooperativas, para que el patrimonio mineral del país pueda servir tanto de palanca del desarrollo económico general, como de medio de vida y de supervivencia inmediata de decenas de miles de familias.
- b. Enfocar de manera realista la organización social y económica delineada espontáneamente en los centros mineros, resguardando el papel de las cooperativas en la regulación social pero estimulando la actividad empresarial (en todos sus niveles) como base de un desarrollo económico sostenible. Se deben evitar pseudo-soluciones idealistas, como querer forzar que las cooperativas funcionen como tal, más allá del interés real de sus integrantes.
- c. Direccionar la capitalización de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y las empresas y minas asociados en el paquete de capitalización para la consolidación de un Sistema Integrado Regional de Producción y Comercialización Mineral, abarcando todos los eslabones de la cadena productiva, inclusive las cooperativas (en contraposición a una economía de enclave).
- d. Limitar la acción estatal nacional a: (i) promover, a corto plazo, la rehabilitación minera que permita la continuidad productiva; (ii) apoyar la pesquisa mineral y la difusión de la información; (iii) promover la absorción de tecnología y la reconversión productiva; (iv) regular la actividad minera y coordinar la actuación de nivel regional de los diversos organismos gubernamentales.
- e. Concertar, a nivel del gobierno nacional, la necesidad de dar prioridad a proyectos de desarrollo e infraestructura que benefician las áreas mineras deprimidas.

- f. Encuadrar los programas sociales en el marco y los límites de la Ley de Participación Popular, acelerando la descentralización administrativa en el área global de acción del Plan.
- g. Financiar el Plan mediante un conjunto de recursos provenientes de: (i) movilización productiva de activos paralizados de COMIBOL; (ii) inversión privada, adecuadamente direccionada a proyectos específicos dentro del Plan global; (iii) cooperación internacional, donaciones y préstamos reembolsables de agencias internacionales; y (iv) la Ley de Participación Popular (para programas sociales).
- h. Establecer metas realistas de control de la contaminación, con diferenciaciones según el tamaño y características de cada actividad, apoyándose en una postura activa de difusión de tecnologías más limpias y soluciones de conjunto (estructurales) en cada centro minero.
- i. Promover la participación de la población involucrada durante la elaboración del Plan y prever mecanismos descentralizados para su implementación y control.
- j. Establecer, concertadamente, reglas claras para la transición al nuevo modelo de operación privada de minas de COMIBOL y para la convivencia posterior de los varios tipos de actividad minera.

II. COBERTURA GEOGRAFICA

- 2.1 El Plan abarcará los centros mineros y sus áreas de influencia que se encuentran ubicados en el occidente del país y se extienden al norte desde las zonas auríferas del Departamento de La Paz, hasta los centros mineros del sur, en el Departamento de Potosí, conforme indicado en el cuadro a continuación.

CUADRO 1 - COBERTURA GEOGRAFICA DEL PLAN

AREA No.	DEPARTAMENTO	CENTRO MINERO	AREA DE INFLUENCIA
1	Potosí	Catavi	Llallagua, Siglo XX, Uncía, Chayanta
2	Potosí	Cerro Rico	Ciudad de Potosí
3	Potosí	Quechisla	Chorolque, Tasna, Tatasi, Chocaya, Telamayu-Atocha
4	Potosí	Tupiza	Ciudad de Tupiza, Cotagalla
5	Potosí	Pulacayo	Ciudad de Uyuni
6	Oruro	Huanuni	Ciudad de Huanuni
7	Oruro	Santa Fé	Japo, Morococala
8	Oruro	Poopó	Antequera, Pazña, Machacamarca
9	La Paz	Matilde	Chaguaya
10	La Paz	Viloco	Araca
11	La Paz	Caracoles	Quime
12	La Paz	Colquiri	Colquiri
13	La Paz	Corocoro	Corocoro
14	La Paz	Zonas auríferas	Consata, Mapiri, Teoponte, Guanay, Tipuani
15	Cochabamba	Kami	

III. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS PARA PREPARACION DEL PLAN

A. Naturaleza de los trabajos

3.1 El Plan a ser elaborado constituye una acción complementaria al Programa de Ajuste Estructural y Capitalización en el sector minero - metalúrgico e incluye, por lo tanto, todos los centros mineros e industriales de COMIBOL donde existe actividad cooperativa o minería artesanal. Se deben diferenciar dos tipos de situaciones:

- a. Centros mineros donde hay operaciones que se pretende transferir, total o parcialmente, a empresas privadas. Este grupo, prioritario por su mayor peso económico y de población involucrada, está compuesto por los centros mineros de Colquiri, Huanuni, Siglo XX/Catavi, Caracoles y Cerro Rico. En este grupo, el Plan deberá establecer, entre otras acciones y de forma concertada, soluciones para la convivencia de la operación minera empresarial privada con la actividad cooperativa, compatibilizando ambas con el control de la contaminación ambiental.
- b. Centros mineros con minas paralizadas, explotadas por cooperativas y consideradas inviables para operación comercial. En este grupo, que abarca poco más de 20 minas, el Plan deberá enfocar, prioritariamente, los aspectos de difusión tecnológica y de promoción económica y social.

- 3.2 Los trabajos de elaboración del Plan involucran: (i) estudios técnicos de varios tipos; (ii) pleaneamiento estratégico, en términos de la formulación de estrategias de desarrollo y su articulación con los programas de gobierno en ejecución (Capitalización, Participación Popular, etc.); y (iii) consulta, discusión y concertación con los sectores interesados.
- 3.3 El objeto del Plan constituye un tema políticamente sensible, principalmente en vísperas de la Capitalización. Así, los trabajos serán conducidos con orientación de la SNM como parte de un proceso político de interacción con las comunidades locales, preparatorio y complementario a la Capitalización.

B. Actores principales del proceso

- 3.4 El problema en consideración, y el Plan propuesto para enfrentarlo, involucran una serie de actores institucionales que deberán participar en la formulación y posteriormente asumir responsabilidades en la implementación de las acciones definidas. Los principales participantes son:
- a. el Gobierno Nacional, abarcando diferentes ministerios, secretarías nacionales y entidades, inclusive E.M. Vinto, COMIBOL y sus subsidiarias;
 - b. los Gobiernos Departamentales de Potosí, Oruro y La Paz;
 - c. los Gobiernos Municipales de Colquiri, Huanuni, Llallagua, Uncía, Chayanta, Potosí y otros eventualmente involucrados;
 - d. cooperativas mineras y asociaciones de subsidiarios de los centros mineros involucrados;
 - e. las empresas comercializadoras e intermediarios (los rescatiris);
 - f. las empresas potencialmente interesadas en la capitalización de empresas y joint-ventures con COMIBOL;
 - g. ONGs y líderes comunitarios locales (por ej.: la Radio Pío XII en Llallagua);
 - h. sindicatos de obreros de COMIBOL.
- 3.5 Otras instituciones también tendrán participación en el proceso, como por ejemplo:
- a. la Federación Nacional de Cooperativas Mineras -FENCOMIN;
 - b. la Asociación Nacional de Mineros Medianos;
 - c. asociaciones empresariales y fuerzas vivas de la región;
 - d. agencias internacionales de cooperación, donantes de recursos;

- e. los bancos multilaterales BID y BIRF, que apoyan financieramente el Programa de Capitalización.

C. Otras Iniciativas Vinculadas al Plan

3.6 Los estudios deberán considerar una serie de acciones, en desarrollo o previstas, que se vinculan al Plan propuesto, buscando la compatibilización de los programas. Las principales iniciativas son:

- a. las Auditorías Ambientales de las operaciones de COMIBOL;
- b. el proceso de negociación Gobierno - Comunidad iniciado con el "Seminario de Planificación Participativa de la Provincia Bustillo", en Octubre 1994, que abarca el área de Siglo XX/Catavi;
- c. el Proyecto Piloto Oruro, en ejecución, con término previsto en Diciembre 1995, para preparación de un Plan Maestro Ambiental de área que abarca los centros mineros de Huanuni, Santa Fé y Poopó; y
- d. el Proyecto Industrial, Minería y Medio Ambiente, en preparación a cargo de la Coordinación COMIBOL/Banco Mundial para inicio en 1996.

D. Marcos Temporales

3.7 El proceso de formulación del Plan deberá permitir alcanzar los siguientes resultados parciales:

- a. un bosquejo del Plan, que incluya los criterios técnicos básicos de la compatibilización de la operación privada de minas de COMIBOL con la actividad cooperativa, deberá estar disponible en un plazo de 2 meses, de forma que estos elementos puedan integrar el paquete de información y condiciones a ser presentado a los inversionistas internacionales para la Capitalización;
- b. la consolidación y el detallamiento del Plan deberán ser concluidos alrededor de Diciembre de 1995, de modo que las acciones más inmediatas puedan comenzar a ser implementadas en paralelo a la transferencia de gestión de los centros mineros a los nuevos socios privados;
- c. el esquema de funding del Plan debería ser definido también en los primeros meses del estudio, de manera de poder viabilizar los primeros desembolsos ya a principios de 1996.

LEGI-0041/95
BO-0094
Original: Español

APENDICE I

PROYECTO DE RESOLUCION DE-/95

BOLIVIA. PRESTAMO /SF-BO A LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Programa de Reformas Sectoriales para la Capitalización

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Bolivia, como Prestataria, para otorgarle un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento del Programa de Reformas Sectoriales para la Capitalización. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$70.000.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Bolivia, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, y se sujetará, además, a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

PROYECTO DE RESOLUCION DE- /95

BOLIVIA. COOPERACION TECNICA REEMBOLSABLE /SF-BO PARA EL PROYECTO
PARA LA IMPLANTACION DEL REGISTRO UNICO NACIONAL (RUN)
DE POBLACION EN BOLIVIA

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, proceda a suscribir los acuerdos que sean necesarios y adoptar las demás medidas pertinentes para la ejecución del plan de operaciones referido en el Documento AT-_____ sobre una cooperación técnica reembolsable con la República de Bolivia, para la ejecución del Proyecto para la Implantación del Registro Unico Nacional (RUN) de Población en Bolivia.
2. Destinar para los fines de esta resolución hasta el equivalente de US\$12.000.000, con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter reembolsable, de acuerdo con las condiciones pertinentes especificadas en el Convenio de Cooperación Técnica.